

Löbbe, Héctor

La guerrilla fabril : clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires : 1975-1976 . - 2a ed. -

Buenos Aires : RyR, 2009.

320 p. ; 14x20 cm.

ISBN 978-987-22816-2-5

1. Historia Política Argentina. I. Título
CDD 320.982

“...Porque lo que el sistema no soporta ni admite es que desde las mismas entrañas de su aparato de dominación: las fábricas, las minas, los talleres, los venerados santuarios de la ‘diosa propiedad’, se gesten organismos que, por ser expresión cabal de los trabajadores y sus intereses cuestionen en la lucha cotidiana la esencia misma de la explotación. Lo que el régimen no soporta es que pese a sus irracionales manotazos represivos este nuevo poder que surge desde abajo se extienda día a día. Que por cada compañero asesinado o detenido se alcen cientos dispuestos a ocupar su lugar. Lo que los capitalistas no pueden admitir es tener que reconocer ante la historia que su voracidad sangrienta por el lucro, su egoísmo intrínseco, las contradicciones insalvables entre el régimen que ellos han construido y los intereses de la humanidad gesten día a día allí donde el ritmo de las máquinas y la opresión cotidiana esperaban encontrar instrumentos dóciles a la explotación cientos, miles, millones de “guerrilleros fabriles” que están acumulando fuerzas, experiencia y poder para mañana decir ¡basta!...”

Movimiento Socialista Revolucionario-
Organización Comunista Poder Obrero

“...Esto de la guerrilla fabril constituye una especial preocupación para nuestro país. Debiéramos preguntarnos si los dirigentes o quienes estimulan y ejecutan estas ofuscadas acciones tienen conciencia de que tales perjuicios no tienen punto de retorno y que significan una traición cobarde para el país y para la empresa que los agrupa. Se advierte en todo esto una intolerable conducta que protagonizan grupos infiltrados entre la clase trabajadora, que hasta procuran armarse en contra de los empresarios. ¿ Se informó usted de que alguna vez el empresario haya adquirido armamentos o instrumentos para asesinar a sus obreros? La subversión, en este caso, consiste en atentar contra la producción nacional y se logra mediante el ausentismo, el sabotaje industrial o imponiendo el control obrero de la producción...”

Reportaje al General Carlos Delia Larocca,
ex -jefe del III Cuerpo de Ejército argentino,
en la revista “Mercado”, número 325, 13/11/75.

©CEICS-Ediciones ryr, 2009, Buenos Aires, Argentina

Queda hecho el depósito que marca la ley 11723

Printed in Argentina- Impreso en Argentina

Se terminó de imprimir en Pavón 1625, C.P. 1870.

Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Primera edición: Ediciones ryr, Buenos Aires, agosto de 2006

Segunda edición: Ediciones ryr, Buenos Aires, marzo 2009

Responsable editorial: Gonzalo Sanz Cerbino

Diseño de tapa: Sebastián Cominiello

Diseño de interior: Agustina Desalvo

www.razonyrevolucion.org.ar

editorial@razonyrevolucion.org.ar

Capítulo II

Hacia la huelga general

*La situación nacional: agudización
de la crisis política y económica (enero-junio de 1975)*

El año 1975 se inició con un agravamiento de la crisis económica, aumentando la convulsión social y política. A nivel institucional, el recambio ministerial llevado a cabo por el gobierno de María E. Martínez de Perón, acentuó la derechización iniciada ya en vida por el creador del movimiento peronista. A este proceso se le sumaría (constituyendo un bloque reaccionario) la nueva conducción de la CGT y el progresivo ascenso a los puestos principales de mando de los sectores más anti-comunistas dentro de las Fuerzas Armadas. Este alineamiento, que la izquierda venía denunciando desde 1973, se expresaría con total transparencia en las declaraciones del nuevo Secretario General de la CGT, el dirigente de la Asociación Obrera Textil, Casildo Herreras. En ellas, luego de ratificar la adhesión de la dirección nacional de la CGT al gobierno peronista, afirmaba: “López Rega es un compañero, un hombre del Movimiento Nacional Justicialista (...) Las FFAA vienen acompañando el proceso y han afianzado su unidad y solidaridad con el pueblo, en especial con las organizaciones sindicales”¹. Estas declaraciones cobraban mayor sentido teniendo en cuenta el colapso del “Pacto Social” y la proximidad de la discusión salarial, en el marco de las paritarias a nivel nacional. Se trataba, por un lado, de defender el programa estructural del gobierno y mantener el control más estricto sobre las bases obreras, para evitar los desbordes. Al mismo tiempo, impedir que se pusieran al frente de los reclamos las nuevas conducciones clasistas, capitalizando el

¹Senén González (1984), página 37.

descontento de los trabajadores. Los primeros días de febrero de 1975, a medida que se iban reincorporando a las fábricas los distintos contingentes de trabajadores luego del período de vacaciones de fin de año, comenzó a percibirse un nuevo repunte de las manifestaciones de protesta obrera a nivel nacional. Este resurgimiento coincidía con el rápido deterioro de las condiciones económicas. El diario *La Nación* informaba que el costo de vida había registrado un aumento del 40% en 1974, en tanto el gobierno incrementó a comienzos de febrero un 50% la tarifa de los ferrocarriles, además de otros aumentos en la energía eléctrica, gas natural y licuado. El ministro de Economía Gómez Morales trataba de bajar el tono de la confrontación, anunciando la próxima convocatoria a la discusión paritaria. Esta convocatoria urgía, ya que los aumentos graduales de salarios aplicados por el gobierno desde mediados de 1974 más los alcanzados por los cuerpos de delegados combativos de cientos de fábricas, resultaban insuficientes ante el relanzado proceso inflacionario. Así, un cálculo oficial conservador admitía que se había producido un deterioro del salario real del 17% desde el aumento oficial de noviembre pasado. A su vez, el sector empresario incrementaba sus críticas, denunciando el ausentismo y la baja de productividad, dos herramientas de lucha utilizadas por los trabajadores. A comienzos de marzo de 1975, inicio formal del proceso de discusión paritaria, se denunciaron más de 500 convenios colectivos de trabajo, al mismo tiempo que se conocía que el costo de vida había acumulado un 57% de aumento desde febrero del año anterior.

La estrategia de las distintas organizaciones políticas de izquierda coincidía en ponerse al frente de las demandas, promoviendo como delegados paritarios a los activistas que encabezaban las comisiones internas, en un simultáneo movimiento que podía desplazar a los dirigentes burocráticos. Sin embargo, las coincidencias no eran totales a la hora de evaluar hasta qué punto se podía producir un proceso de ruptura progresiva del frente gubernamental. El PST, por caso, llamaba a profundizar la lucha, aunque se ilusionaba en que la propia CGT se pusiera a la cabeza de estos reclamos. En términos concretos proponían un apoyo incondicional a todas las medidas parciales; defensa de las comisiones internas atacadas por la patronal y el gobierno; contra los asesinatos de dirigentes y luchadores obreros (declaración contradictoria con sus expectativas puestas en la burocracia sindical, responsable de esos ataques) y formación de comisiones obreras y barriales que combatieran el desabastecimiento². Esta postura ambigua reeditaba las esperanzas que

²AS, 5/3/75.

en su momento había alimentado la “tendencia revolucionaria” del peronismo con el idealizado “socialismo nacional” de Perón. Así, mientras la izquierda peronista, aunque tardíamente, venía revisando esa postura, algunos sectores de origen marxista (al cual podemos sumar al PC), seguía esperando con distintas expectativas un quiebre del peronismo.

En el orden nacional, las dirigencias sindicales ortodoxas reclamaban en un tono cada vez más imperativo una recomposición económica profunda en el marco de las paritarias. En un difícil ejercicio discursivo debían tratar de canalizar los reclamos de las bases por los andariveles institucionales reconocidos, demostrando que no se había roto el proyecto de conciliación de clases que levantaba el peronismo gobernante. Para ello se necesitaba una actitud favorable del gobierno, una predisposición positiva del sector empresario y sobre todo, la inexistencia de una instancia de dirección alternativa como la encarnada en los núcleos de activismo de izquierda. A diferencia de la coyuntura de mediados de 1973, ninguna de esas precondiciones podían garantizarse, en medio de una disputa fraccional interna dentro del gobierno peronista (incluyendo los sectores gremiales afines), un bloque burgués en recomposición que aspiraba a recuperar el control del Estado y un movimiento clasista que, aun golpeado en el Interior, surgía con fuerza y audacia en el cordón suburbano de Buenos Aires, semejando un anillo obrero que comprimía el corazón del capitalismo argentino.

Promediando marzo, el gobierno nacional y la dirección central de la UOM pusieron en marcha un operativo represivo sobre Villa Constitución. Ese operativo emprendido contra la seccional “rebelde”, con asiento en la ciudad santafesina de Villa Constitución, se constituyó así en el episodio más destacado para esclarecer la posición del gobierno peronista para con los sectores obreros de vanguardia, tal vez de la misma magnitud que, tres meses después, lo fue la respuesta de estos mismos sectores en el ciclo de la huelga general de junio-julio.³

³La acción sobre Villa Constitución, por su magnitud, ocultó un acontecimiento similar, significativamente simultáneo: la intervención militar al Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy. Dentro de la estrategia contrainsurgente del gobierno, en la perspectiva de “guerra revolucionaria”, esa zona se encontraba peligrosamente cercana a Tucumán, en el “norte caliente”. En Salta, la llamada “CGT clasista y combativa” había sido conducida por Armando Jaime, dirigente del Frente Revolucionario Peronista (FRP) y al mismo tiempo Secretario Nacional del FAS (frente político legal del PRT). El Sindicato del Ingenio Ledesma, a su vez, era conducido por Melitón Vázquez, dirigente cercano también al PRT. Como organización gremial había protagonizado importantes

Villa Constitución era visualizada, a comienzos de 1975, por los sectores clasistas y combativos como el “faro” que persistía iluminando un proyecto que ya había sido truncado a la fuerza en Córdoba y que pretendía ser suprimido en el resto del país, caracterización que era compartida por el frente reaccionario. Así, con el argumento de conjurar un “complot subversivo” con cabecera en esa ciudad, se montó un operativo represivo en el que participaron todas las fuerzas de seguridad legales (Policía Federal y provincial, Prefectura, Gendarmería y Servicios de Informaciones militares). A este operativo se sumaron las bandas fascistas parapoliciales y las organizadas por la burocracia sindical. Esta última, a su vez, recurrió a los instrumentos legales de la Ley de Asociaciones Profesionales. El operativo derivó en la ocupación militar de la localidad y sus poblaciones aledañas, el encarcelamiento y la persecución de cientos de dirigentes y activistas y por lo menos una decena de asesinatos de militantes de izquierda.

El conflicto superó el marco fabril para extenderse al territorial, en una disputa por el poder que habían previsto algunas organizaciones revolucionarias pero en un marco defensivo y de retroceso por la represión. Si en junio de 1973, Ezeiza mostró a la sociedad argentina el ensayo general del proyecto represivo que se incubaba en la Argentina, la vanguardia obrera y el resto de la clase contempló en el espejo de Villa Constitución el futuro que le esperaba en la contraofensiva de la burguesía, que se preparaba para imponer de manera definitiva su hegemonía. Por ese motivo, las organizaciones políticas de izquierda tensaron al máximo sus energías y recursos para revertir esa ofensiva, generándose así una corriente de solidaridad en todo el país.

La derrota del movimiento huelguístico con el que esa fracción obrera intentó resistirse (que se extendió heroicamente por dos meses) fue un duro revés para los sectores combativos y los sectores proletarios de vanguardia. Pero el “triumfo” del frente reaccionario no hizo más que develar el carácter antipopular del gobierno (y antiobrero de la burocracia), dejando al desnudo su incapacidad para mantener su dominio sobre las clases subalternas por medio del consenso⁴. Esta debilidad no pasó tampoco desapercibida para los sectores más “duros” de la burguesía,

luchas reivindicativas. Meses más tarde, la Dictadura Militar descargará sobre esa localidad uno de los más duros operativos represivos, con decenas de secuestros de dirigentes gremiales, sociales y activistas políticos. Véase Nelli (1988) y también la prensa política de izquierda de los años 1974 y 1975.

⁴Balech (1985) y Castro (2002/3). Entre las organizaciones que habían anticipado la presentación de una situación de “doble poder”, se destacaba el PRT-ERP, que

que a partir de marzo de 1975 comenzaron a preparar los planes para el golpe militar. Creemos que la acción sobre Villa Constitución, en escala, representó un típico ejemplo de “terapia preventiva”, como más tarde el golpe de 1976. La preocupación no era el nivel realmente alcanzado por la amenaza subversiva (en el sentido literal del término) que expresaba la organización aun incipiente de la vanguardia obrera sino su capacidad potencial. Por lo tanto, arrasar al movimiento clasista aun poco consolidado era una prioridad, antes que se tornara inmanejable. También, imponer un “escarmiento” ejemplificador, que restara apoyos a los sectores combativos y de izquierda. Dentro de ese contexto, la calificación de “complot subversivo” que le adjudicó el gobierno al movimiento de Villa Constitución inauguraba en términos discursivos y prácticos la guerra abierta a la vanguardia de la clase obrera, la que será justificada a partir de allí bajo la caracterización de “guerrilla fabril”⁵.

El período que comienza a fines de febrero y se extiende hasta fines de junio está marcado por un proceso ininterrumpido de movimientos de protesta a lo largo y ancho de la Argentina, que involucraban a todas las fracciones de trabajadores, de las distintas ramas de la producción y también de los servicios, tanto públicas como estatales⁶. La primera víctima del intenso proceso de movilización social fue el ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales. Su propuesta de relanzar la economía a partir de incentivos a la iniciativa privada y crecientes dosis de liberalismo, no pudo resistir el embate de una realidad conflictiva, tanto en el ámbito interno como externo. Su relevo pareció inevitable al no poder imponer el criterio gubernamental de ajustar los salarios de convenio de acuerdo a un índice fijo, al término de las paritarias.

Desde comienzos de 1975, en la prensa partidaria de izquierda, empezó a generalizarse el uso del término “coordinación” como acción

había dedicado a estudiar ese proceso el ya citado documento, *Poder Burgués, Poder Revolucionario*. Véase De Santis (2000), páginas 275 a 306.

⁵Los que así formulaban el problema tenían referencias precisas de la fuerte influencia en la dirección de la seccional metalúrgica santafesina de dos organizaciones revolucionarias (el PRT y la OCPO, ésta última en formación). Sin embargo, se buscaba generalizarla a todo el país. Recordemos en éste punto que la asociación entre “subversión” en sentido amplio y “guerrilla fabril” se venía insinuando de manera cada vez más marcada desde 1969.

⁶Se destacaron los protagonizados por los trabajadores de las áreas de la salud, la justicia, la educación, el transporte e inclusive del personal civil de las fábricas militares. Véase LN, el medio más minucioso en la cobertura de dichos conflictos. Para la reconstrucción del marco económico y el relevo ministerial, Brunetto (2007).

concreta a implementar y también la necesidad de poner en marcha “Coordinadoras”, en tanto organismos que centralizaran y asumieran una conducción alternativa de hecho del movimiento obrero⁷.

Las asambleas obreras se transformaron durante el primer semestre de 1975 en el único y tal vez último ámbito democrático en medio de un ambiente de violencia extrema. En esas asambleas, los trabajadores decidían sobre su propio destino y lo hacían además en el lugar en donde se constituían como miembros de la clase explotada. Su extensión y generalización venía a poner límites a la fuerza del capital y por dicha razón resultaba más intolerable para la burguesía que la acción armada de las organizaciones revolucionarias. Descalificar este incipiente “poder obrero” se transformó así en una prioridad. A fines de abril la UCR salió a avalar la denuncia del gobierno al afirmar que “la guerrilla ha entrado en las fábricas”, lo que será ratificado por el máximo líder del principal partido opositor, Ricardo Balbín, ante la prensa extranjera cuando declaró abiertamente estar más preocupado por la guerrilla que se infiltró en las fábricas que aquella que accionaba militarmente en los montes tucumanos. El valor simbólico de estas declaraciones es que con ellas se reconfiguraba el otro campo del enfrentamiento social, convalidando las acusaciones que apenas semanas atrás había formulado el gobierno⁸.

Se tornaba evidente que la conflictividad obrera seguiría un curso ascendente, a medida que el proceso de paritarias se empantanaba, ya que el mismo demandaba una actitud acuerdista, en la que las partes resignaran simétricamente una porción de sus demandas, con la intervención favorable del Estado para compensar los posibles desequilibrios que surgieran. Ni el gobierno ni el capital estaban dispuestos a ceder y por el contrario, se coaligaron para descargar el efecto de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores.

Los empresarios proponían la aplicación de cláusulas a la productividad, protestaban contra el ausentismo obrero y reclamaban líneas de crédito a bajas tasas, para financiar los aumentos que se avecinaban. Indirectamente, sugerían la supresión del control de precios y poder trasladar a los mismos el porcentaje de incrementos salariales que se pactasen.

El gobierno por su parte, haciéndose eco de la posición del ministro de Economía, sostenía que los aumentos de convenio no debían superar el “techo” del 38%. Los aumentos debían ser aplicados sobre los básicos,

⁷EC, 15/1/75. BCC, febrero de 1975. AS, 29/3/75.

⁸LN, 28/4/75. Las declaraciones de Balbín a la prensa extranjera están citadas en ese mismo diario del 16/5/75.

desconociendo las gran cantidad de sumas no remunerativas que de manera encubierta concedían los empresarios ante la presión obrera, y absorber y “blanquear” los aumentos formales conseguidos al margen de lo dispuesto en los sucesivos (e insuficientes) reajustes concedidos por el gobierno. Los trabajadores veían así afectados su capacidad de consumo (por la liberación de los precios, sumado al “mercado negro” y el desabastecimiento) y sus ingresos por el cepo salarial, además de desconocer los incrementos surgidos por la lucha en las empresas. En términos simbólicos, este último punto era una clara señal: precisamente se querían suprimir las conquistas económicas obtenidas al margen de las conducciones sindicales.

Durante mayo, las dirigencias gremiales manifestaban públicamente su disconformidad con el rumbo económico, exigiendo la rectificación del mismo y la adopción de medidas como el control de precios, sanciones contra el desabastecimiento y también la necesidad de reconocer las crecientes demandas salariales. Al mismo tiempo, esas dirigencias alertaban sobre movimientos y reclamos obreros por fuera de las organizaciones gremiales, impulsados por “grupos subversivos, disolventes e infiltrados”. Reclamaban a las bases obreras que no prestaran atención a esos activistas y no participaran en movilizaciones que no fueran las organizadas por las conducciones oficiales. Confirmando esas prevenciones, se multiplicaban las medidas de protesta y demandas obreras a lo largo y ancho de la Argentina. En la práctica, las conducciones gremiales tradicionales habían sido rebasadas (o estaban a punto de serlo) y las masas obreras se orientaban todavía en forma vacilante por otro rumbo, buscando (y en algunos casos creando) una conducción alternativa.

La dirección del movimiento obrero quedó así en medio de una crucial pulseada: por un lado, las conducciones ortodoxas del peronismo retenían (superestructuralmente) las riendas de los sindicatos, controlando sus locales y el rol de interlocutores con la patronal y el Estado. Sin embargo, se les tornaba cada vez más difícil mantener el control institucional de las bases a nivel fábrica y perdían consenso entre los contingentes de trabajadores. En la trinchera opuesta, desde las bases fabriles, las camadas más jóvenes de activistas de izquierda, conseguían la atención, simpatía y eran acompañadas por incipientes fracciones obreras, más precisamente aquellas que constituían el corazón industrial del capitalismo argentino. No obstante, no podían convertir esa influencia e inserción en un control del aparato gremial, concebido como una de las piezas fundamentales para sus proyectos de transformación económica y social de la Argentina.

De cómo se resolviera esa pulseada, en especial la capacidad de acaudillar al conjunto de la clase, quedaba cifrado el destino del proyecto revolucionario en la Argentina.

Hacia fines de mayo, como se esperaba, el ministro Gómez Morales, incapaz de controlar y poner orden en la economía fue desplazado, en una renovación ministerial que apenas encubría un nuevo giro derechista del gobierno. El reemplazante de Gómez Morales, Celestino Rodrigo (un hombre de absoluta confianza de José López Rega) llegó al ministerio de Economía con la misión de aplicar, de manera drástica, un ajuste estructural de carácter ultraliberal, anticipando el que más tarde aplique el ministro del gobierno militar, José Alfredo Martínez de Hoz. Para llevar a cabo esa tarea, Rodrigo se rodeó por un equipo de colaboradores que ostentaban una trayectoria e ideología opuesta al proyecto tibiamente reformista y estatista de Gelbard.

El “sinceramiento de la economía” propuesto por Rodrigo no se hizo esperar y se manifestó en un descomunal aumento de las tarifas públicas: gas domiciliario (60%); luz (75%); nafta (174%); gasoil (50%); boletos de transporte colectivo y subterráneos (entre el 75 y el 150%). La canasta de consumos básicos recibió de lleno el impacto de las medidas con incrementos en lácteos (65%); pan, harinas, fideos y medicamentos (más del 70%). El brusco encarecimiento del dólar provocó otro fenómeno que afectó al consumo interno, cuando las firmas que actuaban en condiciones oligopólicas retiraron del mercado sus productos, exportándolos de contrabando a los países vecinos, lo que retroalimentó el “mercado negro” y el desabastecimiento local⁹. La idea implícita en el nuevo equipo económico era pegar un brusco golpe de timón, recuperando la tasa de ganancia empresaria e incentivar la inversión externa, merced a una formidable redistribución de la renta interna, reasignando recursos a favor de los sectores más concentrados. Por primera vez en la historia de los gobiernos peronistas, la “rama gremial” perdía el papel central que había jugado en anteriores administraciones. No se trataba solamente de una nueva distribución de roles, sino de subordinar abiertamente los intereses de los trabajadores al nuevo proyecto económico del capitalismo más concentrado. En ese proyecto, el sindicalismo tradicional no era

⁹Un ejemplo concreto de tales prácticas era la llevada a cabo con los medicamentos que producían los laboratorios Squibb de Martínez (partido de San Isidro). La lucha contra ese desabastecimiento fue encarada por los trabajadores del laboratorio, encabezados por su Comisión Interna, quien desarrolló una minuciosa tarea de “inteligencia”, incluyendo un seguimiento de los camiones en donde se los transportaba ilegalmente hasta las fronteras. Cristina (2002/3).

concebido como imprescindible correa de transmisión burguesa entre el Estado, el capital y los trabajadores, función que había desempeñado durante los gobiernos peronistas previos, en los que se pretendía alcanzar un “equilibrio social”. Ante este panorama, las comisiones que debían discutir la readecuación de las escalas salariales quedaron paralizadas. La dirigencia gremial ortodoxa había logrado, dificultosamente, acordar aumentos que rondaban en algunos casos el 100%, pero ahora esperaba evaluar el plan del nuevo elenco económico para no quedar descolocada. Igual comportamiento adoptó el sector empresario, especulando con una nueva correlación de fuerzas y orientación económica.

Finalmente, el gobierno que debía homologar las negociaciones para que éstas entraran en vigencia, dilataba ese trámite para no tener que iniciar el nuevo rumbo con el fuerte condicionamiento que implicaban los aumentos salariales, muy por encima de sus previsiones. También, pretendía dar una señal inequívoca: la negociación, medida que apuntaba al consenso social, sería reemplazada por la imposición de las normas puestas en ejecución por Rodrigo. Así, el 38 % de aumento general de emergencia de los salarios, concedido por la gestión de Gómez Morales se había volatilizado de las manos de los trabajadores ni bien se anunciaron las nuevas medidas puestas en ejecución por Rodrigo.

La actividad de la izquierda en las fábricas: organización y alistamiento (enero-junio de 1975)

Corresponde aquí detenernos a considerar la lectura que hacían las organizaciones de izquierda de la situación nacional. Esas distintas agrupaciones estimaban que en lo sustancial se habían definido los campos del enfrentamiento social. Para las organizaciones peronistas, en sus dos vertientes principales, Montoneros y PB, la muerte de Perón abría la etapa por su sucesión. La primera seguía levantando en sus declaraciones públicas la figura del creador del movimiento, pero al mismo tiempo empezaba a postular tímidamente que su natural continuación sería una nueva fase de tal movimiento, encarnado precisamente en Montoneros. Al PB y sectores cercanos a esa organización, en tanto, la redefinición de su accionar les era menos difícil de conciliar con sus prácticas desde mediados de 1973. En efecto, desde su surgimiento, habían sostenido la necesidad de crear una “alternativa independiente” para la clase obrera, lo que quedó plasmada en una posición crítica al punto de la

ruptura, aun durante la última y breve presidencia de Perón¹⁰. Resulta así comprensible que una organización marxista como PO evaluara más factible un acercamiento progresivo con el PB que con el PST (a pesar del origen ideológico de éste último), resaltando no sólo la coincidencia en el trabajo fabril, sino también en lo superestructural¹¹. Este original alineamiento se reforzaba por las críticas que el PB (al igual que PO) dirigía a Montoneros por priorizar el trabajo militar por sobre el de los frentes de masas¹².

En la izquierda marxista, las diferencias no tardaron en aparecer. Las organizaciones inclinadas abiertamente a la lucha armada se preparaban para una agudización del enfrentamiento militar abierto o encubierto, tal el caso del PRT, algunas fracciones del maoísmo, el GOR y la OCPO. Los núcleos trotskistas encolumnados en PO y el PST, en tanto seguían apostando sus esfuerzos a la creación de un partido obrero de vanguardia, aunque sus estrategias diferían en cómo se procesaba la crisis del peronismo: mientras PO la saludaba buscando rescatar a los sectores más radicalizados como el PB, el PST no terminaba de superar su tendencia a practicar el “entrismo”, lo que lo llevó a tener acercamientos con sectores de la propia burocracia sindical. Todas estas organizaciones coincidían no obstante en el peligro que implicaba la creciente escalada fascista, resultado de un proyecto que naufragaba y recurría al terror como último instrumento para impedir un vasto movimiento de protesta que se avecinaba. Resulta irónico observar como aquellos que critican de manera retrospectiva el militarismo y el desprecio por la democracia de las organizaciones de izquierda, soslayan el hecho que los partidos políticos tradicionales en sus declaraciones y acciones proponían, como única solución superadora, el recambio institucional, subestimando o ignorando en los hechos el terrorismo estatal y paraestatal.

Por el contrario, desde la izquierda, sobre la que se descargaba el mayor peso de la violencia, se reconocía el origen estructural de la misma y por lo tanto, en la medida de sus precarias posibilidades, se desplegaban esfuerzos para enfrentarlas con la movilización masiva de la población. Sus frentes de masas (estudiantil, territorial y sindical), como así también todos aquellos que como artistas, intelectuales y abogados denunciaban de manera consecuente al terrorismo parapolicial, fueron

¹⁰Anzorena (1988). Véanse las declaraciones del PB y sectores afines, páginas 272 a 273; 289 a 290; 293; 299; 302 a 303; 304 a 306.

¹¹Correa (2003) y Frigoli (2003).

¹²PP, primera quincena de septiembre de 1974, en Baschetti (1999), páginas 241 a 244.

a la vez, no sólo la vanguardia de la lucha por las libertades democráticas sino también, y por eso mismo, los que sufrieron de manera inmediata los mayores efectos de la violencia.

Las distintas organizaciones, en tanto, desplegaban diferentes planes de contingencia. Sin pretender dar cuenta de todos los documentos y declaraciones abiertas o restringidas, elaboradas por las organizaciones de izquierda, nos detendremos a precisar algunos argumentos que permiten conocer desde qué posición se fijaba la estrategia a seguir. El PRT-ERP, por ejemplo, había adoptado un diagnóstico prospectivo, tomado como línea de acción hasta el golpe militar de 1976¹³. En él se reconocía la proximidad de una situación revolucionaria, que podría derivar en crisis revolucionaria. Se planteaba la implementación progresiva de un doble poder, a semejanza de la organización soviética previa a la Revolución de Octubre de 1917, que de manera gradual disputara al bloque de poder la soberanía política del Estado. Se destacaba la necesidad de aunar todas las fuerzas políticas y sociales enfrentadas objetivamente al gobierno, evitando el aislamiento de las luchas particulares, para lo cual recurrían como ejemplo de coordinación a lo que sucedía con un conflicto fabril, combinando las acciones clandestinas con las legales. En términos organizativos concretos, la intención era la de preservar las estructuras partidarias en los distintos frentes, por ejemplo el sindical, desarrollando al mismo tiempo niveles clandestinos y de superficie, inculcando con el trabajo cotidiano en la masa la ideología socialista que hiciera conciente la razón de su lucha. El criterio organizativo buscaba enlazar a las distintas células hasta constituir una malla partidaria que cubriera no sólo la fábrica, centro embrionario de la construcción, sino todo su entorno territorial, en lo que se denominaba “Comité fabril”¹⁴.

Dentro del resto de la izquierda marxista, en especial el PST y PO, primaban los mismos objetivos, aunque lógicamente adecuados a una estrategia no armada. Para garantizar la política de crecimiento entre la vanguardia obrera se desplegaba una serie de tareas que iban desde la propaganda en puerta de fábrica con los materiales partidarios (el “piqueteo”), hasta las charlas más o menos informales dentro de la misma planta. Esta actividad permitía detectar a los trabajadores más interesados, a los que luego se invitaba a reuniones mucho más formales, que podían derivar en cursos de discusión teórica y según el grado de avance

¹³El ya nombrado *Poder Burgués, Poder Revolucionario*, redactado por su Secretario General, Mario Roberto Santucho en agosto de 1974. Ver cita 4 de este capítulo.

¹⁴Véase cita 63 del Capítulo I. Por su parte, De Santis (2005) polemiza con Mattini respecto a las falencias de los “comités fabriles”.

y compromiso, de adoctrinamiento e incorporación partidaria¹⁵. La politización que impregnaba por aquel tiempo al conjunto de la sociedad reforzaba esta tendencia, convirtiéndose la lectura de un simple diario en un alto del trabajo, en el comienzo de una discusión y punto de partida para plantear una reivindicación concreta¹⁶.

El peronismo de izquierda, en especial la JTP, había logrado con éxito recuperar importantes organismos de base fabril en Zona Norte del Gran Buenos Aires y además se acercaban a sus filas un número significativo de trabajadores. Para compatibilizar la expansión cuantitativa con el creciente nivel de violencia que se abatía sobre todos los activistas de izquierda, la conducción de Montoneros elaboró un dirección táctica adecuada a la coyuntura¹⁷. Se ponía énfasis, dentro de la “Resistencia integral”, al papel que debían jugar las Agrupaciones como la JTP y cómo hacer para afrontar una “retirada estratégica”. Este último punto era fundamental como forma de preservar a la militancia ante el terror fascista, sin dejar de tener presencia y renunciar al rol conductor que habían alcanzado. La idea era concentrar el trabajo en los gremios de la producción y donde la presencia de la burocracia fuera débil. En materia de seguridad de sus militantes, sostenía el documento que la misma se garantizaba por la relación directa con las bases y finalmente se fijaba como prioridad la publicación de volantes y boletines zonales de las Agrupaciones como herramienta organizativa, mantener la presencia política y guiar las acciones concretas.

¹⁵Para PO, Coggiola (2006), PO, Correa (2003) y Frígoli (2003). Para el PST, Pozzi y Schneider (2000) y el testimonio de “Oscar”, obrero metalúrgico y activista del PST en la zona de nuestro estudio.

¹⁶Los medios preferidos, mientras circularon legalmente, fueron *El Mundo* (vesperino orientado por el PRT) y *Noticias* (matutino que respondía a Montoneros). Más tarde o si las condiciones eran de mayor politización se recurría directamente a la prensa partidaria. La lectura no involucraba sólo al activismo, sino que se formaban “ranchadas” en un alto en la labor o al momento de las comidas. Entrevistas a: Cristina (2002/3), Correa (2003), Frígoli (2003), Benencio (2002), “Petiso” (2003), Morelli (2003), Pérez (2002), Castro (2002/3) y Carlos Girotti, activista político y delegado gremial de la automotriz Fiat en la localidad de El Palomar (Noroeste del Gran Buenos Aires), entre los años 1973 y 1976 (Buenos Aires, 2002).

¹⁷“Resistencia peronista al avance imperialista”, publicado en el primer número de *Evita Montonera*, diciembre de 1974, en Baschetti (1999), páginas 305 a 324.

La Zona Norte del Gran Buenos Aires en el primer semestre del año 1975

En la Zona Norte del conurbano bonaerense se presentaba a comienzos de 1975 una serie de elementos que favorecían objetivamente el surgimiento de una instancia de coordinación interfábrica combativa. El primero era el elevado nivel de actividad industrial, que a su vez implicaba uno de los más altos porcentajes de concentración obrera. Un segundo factor fue el crecimiento de la militancia político-sindical de izquierda (en sus vertientes marxista y peronista), como resultado, tanto de las prácticas de “proletarización” de las propias organizaciones, como también del aporte de grupos de jóvenes obreros que se politizaban al compás de la dinámica de la lucha de clases. En tercer lugar, el exitoso proceso de recuperación de organismos de base fabril, en especial en las empresas industriales de punta, por parte de esa militancia de izquierda. Estos organismos, como cuerpos de delegados, comisiones internas y comisiones de reclamos, preexistían a 1975, pero en la muy especial coyuntura de ese año, se transformaron en la principal herramienta utilizada por las fracciones obreras en lucha. Todos estos elementos se resignifican, teniendo en cuenta que la conflictividad obrera en Zona Norte del Gran Buenos Aires había mantenido desde principios de 1973 un ritmo de incremento constante, efectivamente conducida por un activismo de izquierda, reconocido por las bases. Además, este proceso se presentaba, en términos cualitativos, muy elevado: ocupación de plantas, con rehenes y autodefensa; asistencia y cooperación concreta de otros contingentes obreros y partidarios y, finalmente, solidaridad con los dirigentes y militantes sindicales represaliados por el sector empresario. Asimismo, las estructuras gremiales tenían una presencia muy endeble: seccionales jóvenes, sin demasiada trayectoria ni experiencia y, en otros casos, inexistencia de las mismas. Por lo tanto, organizativamente hablando, los organismos de base fabril resultaban mucho más importantes para canalizar de manera directa la movilización obrera.

Durante el “Pacto Social”, la movilización obrera se derramó en un sinnúmero de luchas parciales, en donde la salubridad, la seguridad laboral, la disminución de los ritmos de producción y en las empresas más grandes, los reclamos de aumento de salarios, dan cuenta de un estado de insatisfacción y protesta en importantes fracciones proletarias. Contradictoriamente, las referencias en la prensa (aun en la de las organizaciones de izquierda) a conflictos y protestas obreras en nuestra zona

de estudio, se reducen significativamente durante el período enero-mayo de 1975. Probablemente, esta sea la causa por la cual algunos de los más serios historiadores del movimiento obrero sostienen que para aquella fecha se había entrado en una fase de reflujo de las mismas, en paralelo con el eclipse que estaba sufriendo la influencia de la izquierda político-sindical. Sin embargo, los testimonios de los distintos participantes que hemos podido registrar, coinciden en señalar que tal reflujo tenía más de aparente que de real. Creemos que esta contradicción se puede deber a varios factores. En primer lugar, las organizaciones de izquierda procedieron a readecuar su estrategia y metodología en el campo fabril, acentuando la clandestinidad de sus acciones. En casos extremos, retiraron a sus activistas más expuestos a la muy efectiva “condena a muerte” formulada por los escuadrones fascistas¹⁸. Todas estas prácticas tornaron seguramente menos visible su presencia e influencia. Sin embargo, el éxito de muchas de las demandas obreras, alcanzadas sin recurrir a grandes enfrentamientos, da cuenta indirectamente de lo hegemónica que era su presencia en las fábricas.

En segundo lugar, los sectores empresarios también habían terminado por reconocer la conveniencia de dar respuesta positiva a esas demandas antes que las mismas escalaran hasta alcanzar un punto de no retorno, en donde se involucraran las organizaciones armadas como había demostrado trágicamente el caso de la fábrica Miluz. Los empresarios veían también con preocupación cómo tanto los grupos fascistas como el gobierno intervenían brutalmente ante un agravamiento de los conflictos, justificando precisamente la acción de los destacamentos armados de la izquierda. En tanto, también en el resto del frente reaccionario (burocracia sindical y gobierno) existía un tácito acuerdo en disminuir el alcance público de las protestas obreras y la conducción que de las mismas ejercían las organizaciones de izquierda. La dirigencia gremial ortodoxa porque admitir que unas y otras escapaban a su control era un reconocimiento de su propia incapacidad para poner en caja el conflicto social, devaluándose a ojos del gobierno y del capital. A su vez, el “gobierno popular” minimizaba toda manifestación de disconformidad

¹⁸Un ejemplo ilustrativo es el caso de Néstor Correa, Secretario General de la Comisión Interna de EMA. Su organización decidió replegarlo ante las muy serias amenazas contra su vida. Más tarde, cumpliendo tareas de solidaridad con los trabajadores de Villa Constitución es apresado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (Correa, 2003). Lo mismo ocurría con los integrantes de organizaciones político-militares. Así, aparecían en sus publicaciones cartas de militantes explicando el por qué de su paso a la clandestinidad. Véase EC, 11/6/75.

popular (en especial obrera) ya que se presentaba como representante de la voluntad de la sociedad. Admitir que, a menos de dos años de elegido, el descontento crecía y la propia clase obrera empezaba a escuchar con atención a los que proponían un cambio de sistema podía dar alas a esos sectores y, al mismo tiempo, aceleraba el desgaste gubernamental ante la gran burguesía, reduciéndole su margen de maniobra y la continuidad misma como mecanismo de contención de la lucha de clases en la Argentina. Los cuerpos represivos (policía, servicios de informaciones, ejército), mientras tanto, cultivaban su propia política de silencio. De esta manera, al no reconocer (al menos abiertamente) la magnitud de la presencia de la izquierda en las fábricas, aparentaban no estar interesados y preocupados por la misma, intentando tender una celada al activismo, que bajaría la guardia al sentirse “invisible”.

Finalmente, si el malestar e insatisfacción de los trabajadores se hubiera suprimido, como podrían sugerir las estadísticas, no se podría entender la súbita explosión que en forma generalizada (y organizada) se desplegó en los ámbitos obreros en junio-julio de 1975. Las “Jornadas de junio-julio”, por el contrario, vienen a demostrar cuán arraigado estaba el activismo político-sindical de izquierda en fábrica, aun cuando su visibilidad pasara desapercibida por los motivos ya apuntados.

La complejidad para reconstruir los grados de conflictividad obrera a comienzos de 1975, podría deberse también a una elección conciente de aquellas organizaciones de izquierda que practicaban la vía armada, las que restringían al mínimo indispensable toda mención a conflictos puntuales, para no atraer sobre ellos la atención de la acción represiva. No obstante, otras organizaciones como PO o el PST consideraban que era necesario sacarlos a la luz para impedir su aislamiento y además remarcar el amplio campo de lucha democrática que, según dichas organizaciones, se abría y no se debía abandonar.

Detallaremos a continuación el relevamiento provisional de conflictos de acuerdo a la información contenida en la prensa partidaria, la más precisa para los casos de nuestra zona. En la primera quincena de marzo los ceramistas de Lozadur (encuadrados en el combativo Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina), luego de asambleas por sección y planta, implementaron el quite de colaboración, para obtener un aumento salarial de emergencia. En la autopartista Del Carlo (San Isidro), también se produjeron asambleas por turno con igual demanda. Similar actitud cumplieron los metalúrgicos de Corni-Cormasa. En Vicente López, en la textil La Hidrófila, sus trabajadores luego de un largo proceso (con varios paros generales y quites de colaboración), obtuvieron sustanciales aumentos, pero mantenían sus reclamos, dentro de los cuales se exigía

la libertad de un dirigente del PST, que formaba parte de la comisión interna, encarcelado a disposición del Poder Ejecutivo. Días más tarde, a este panorama se le sumaron los reclamos surgidos de asambleas en la metalúrgica Vicciu y en la fábrica de ascensores Otis (San Fernando). En Vicente López, en los talleres gráficos de Editorial Abril las medidas de fuerza también obtuvieron importantes aumentos anteriores a la paritarias. En esa localidad, en la fábrica de neumáticos Imperial Cord se produjo un agravamiento de un conflicto iniciado semanas antes por el despido de activistas. La empresa procedió a despedir a cerca de 350 trabajadores. Estos, encabezados por su combativa comisión interna, intentaron forzar una asamblea en el local del sindicato. La dirigencia burocrática, recurriendo a matones impidió la reunión pero no obstante los obreros siguieron expresando su descontento con quites de colaboración y paros rotativos¹⁹.

A esta altura de los acontecimientos, el PST reinició una larga polémica a través de su publicación contra lo que denominaba “ultraizquierda” (apelativo dirigido a la JTP-Montoneros y al PRT). El reclamo, que será el primero de una serie de críticas, se fundaba en la actitud que tenían aquellos sectores radicalizados de dirigir sus ataques contra la burocracia sindical y no a las empresas²⁰. Las falsas expectativas del PST puestas en la dirigencia gremial tradicional serán a su turno duramente cuestionadas (en tanto política equivocada), no sólo por las organizaciones armadas sino también por PO²¹.

Todos los conflictos relatados se inscriben en un patrón común y anticipan algunos rasgos de la Coordinadora Interfabril zonal: se desarrollaron en los establecimientos más importantes de cada rama de actividad en términos de personal ocupado y producción; en esas

¹⁹La mención al conflicto en Imperial Cord, en el BCC, febrero de 1975. Para el resto de los conflictos, AS, 12/3/75 y 19/3/75.

²⁰La polémica PST-PRT se remontaba al origen común de ambas organizaciones. El PST acusaba de “militarizar la política” al PRT y descuidar el trabajo gremial. A su turno, el PRT respondía criticando la tendencia del PST de sobreestimar la acción sindical, al extremo de caer en una deformación “sindicalista”, licuando el rol del Partido. Respecto a la burocracia sindical, el PRT solía recordar la política de “entrismo” en el peronismo que habían cultivado los núcleos que luego conformaron el PST. Según el PRT, de allí provenían las expectativas que alimentaba el PST en la dirigencia gremial peronista ortodoxa.

²¹A este respecto se puede consultar la polémica que PO sostenía a través de su prensa con el PST, en particular en lo referido a la conformación de listas para las elecciones de Comisiones Internas.

fábricas con elevada presencia de activistas político-sindicales de izquierda las medidas de lucha se impulsaban y surgían en asambleas de trabajadores, la mayoría desde las propias secciones de la planta, en un movimiento ascendente; las reivindicaciones eran prioritariamente de carácter económico-salarial, pero al evolucionar con demandas políticas (libertad sindical, fin a la represión y la violencia paraestatal) ponían en entredicho a la burocracia sindical y aun al propio gobierno nacional; su dinámica de expansión partía de un núcleo geográfico localizado en torno a un puñado de establecimientos vecinos o aledaños y se difundía en círculos concéntricos involucrando a todo un área fabril; al frente y encabezando estos movimientos se encontraban los organismos de base fabril (cuerpos de delegados, comisiones internas, comités de reclamos) recuperados por el activismo de izquierda.

En Zona Norte del Gran Buenos Aires el operativo represivo combinado contra la seccional “rebelde” de la UOM en Villa Constitución tuvo un impacto muy profundo, organizándose fondos de huelga y desplazando experimentados activistas obreros para reforzar a los cuadros políticos-sindicales que sostenían la resistencia en Villa Constitución. El desenlace de ese proceso ratificó la necesidad vital de establecer una coordinación obrera permanente que presentara una barrera a nuevos embates reaccionarios. Los contactos informales se transformaron en vínculos concretos, aunque los mismos no quedaran registrados oficialmente. La concentración fabril por sub-zonas facilitó el trabajo político en plantas físicamente contiguas, anticipando lo que semanas más tarde emergerá en forma de Coordinadora Interfabril²².

En el mes de abril en Zona Norte siguió aumentando y profundizándose el proceso de luchas obreras. En las ceramistas Lozadur y Cattaneo, las asambleas y el quite de colaboración lograron su objetivo de obtener aumentos de salarios (por fuera del convenio) y abrir la discusión sobre las condiciones de trabajo. Similares procesos dieron por resultado también sendos triunfos en las metalúrgicas Vicciu, Corni-Cormasa, Otis, Packard, Mic, la fábrica de productos plásticos D.P.H. y en la sección plásticos del complejo fabril Atma. A mediados de ese mes, el combativo proletariado de la autopartista Del Carlo, luego de 20 días de quite de colaboración obtuvo un sustancial aumento. En Sylvania, metalúrgica de Martínez, se repitió la secuencia de asambleas, quite de colaboración y paros rotativos por turno. Una situación parecida se presentaba en Fate, tanto en la sección electrónica como en neumáticos²³.

²²Cristina (2002/3), Frígoli (2003), Morelli (2005) y Girotti (2002).

²³AS, números de abril de 1975.

En todas las plantas fabriles del área se estaba produciendo, simultáneamente, un fenómeno de discusión interna que involucraba al personal de las mismas. Los militantes político-sindicales de izquierda iniciaban una ronda de charlas informales en cada sección, en algunos casos, luego de distribuir y leer un volante de su organización o simplemente un periódico comercial. Si este militante era a la vez delegado, la charla derivaba la mayoría de las veces en asamblea. La coyuntura crítica por la que se atravesaba hacía que hasta aquellos alineados con las conducciones gremiales burocratizadas participaran de esa discusión. Esto último ejemplifica como el proceso de intensa movilización estaba afectando las prácticas tradicionales, reconfigurando los roles, posturas y actitudes dentro del colectivo obrero. En este estado asambleario de carácter constante (reflejo del malestar y descontento obrero), los activistas de izquierda eran quienes estaban en mejores condiciones de hacer oír su voz y proponer medidas organizativas y de lucha. Entre marzo y agosto de 1975 en Zona Norte del Gran Buenos Aires se vivió un clima de reconocimiento, acompañamiento y simpatía hacia los núcleos de activistas fabriles por importantes sectores de la clase trabajadora que permite entender el éxito relativo de las acciones reivindicativas y la movilización obrera. El prestigio ganado por los militantes de izquierda era fruto de su compromiso y consecuencia en la tarea cotidiana y aunque fuese embrionariamente, también de las propuestas políticas que se veían confirmadas en la práctica²⁴. Las asambleas fabriles que iban preparando el más importante movimiento de masas de la segunda mitad del siglo XX en Buenos Aires, demostraban cuánto se había avanzado en materia organizativa y en materia de definición ideológica, pero también cuánto faltaba todavía para transformarse en una efectiva alternativa de poder. En esas asambleas, los distintos contingentes obreros decidieron utilizar un conjunto de recursos adecuados a las circunstancias que se estaban viviendo. Así, combinaron medidas como el quite de colaboración, la disminución de los ritmos de producción, el paro por secciones y la instancia de reunión permanente en un escalonamiento progresivo. Si aparentemente estas acciones no revestían la visibilidad y combatividad de las ocupaciones de fábricas de la etapa anterior, no eran menos eficaces que aquellas. Evitaban atraer sobre los conflictos la represión legal abierta o la violencia paraestatal, y al mismo tiempo presionaban sobre los empresarios paralizando la producción.

²⁴Esta visión es compartida en el presente por los militantes, tanto peronistas como marxistas, de organizaciones armadas y no armadas que hemos entrevistado.

En Zona Norte del Gran Buenos Aires, las organizaciones de izquierda tenían diseminados activistas y simpatizantes en diferentes fábricas, muchas de ellas además contiguas unas de otras. Esto les permitía no sólo compartir información sino también planificar tareas en común. Más allá de algunas polémicas, la multiforme militancia de izquierda tendía a cerrar filas ante la situación imperante, no haciendo diferencias por rama de actividad, como institucionalmente se fragmentaban las dirigencias gremiales peronistas ortodoxas. De esta forma, y aleccionados por la cercana y traumática experiencia de Villa Constitución, a comienzos de mayo de 1975 comenzaron a producirse los primeros encuentros entre núcleos de activistas en los que en un primer momento se organizaban de acuerdo a una lógica de afinidades (políticas, por rama de actividad, por cercanía física) pero que rápidamente se extenderá en forma de malla, que multiplicaba y potenciaba la efectividad de cada conflicto particular. El embrión de “Coordinadora” entraba así en escena.

En tanto, la acción de las bandas fascistas, combinada con la represión semilegal, seguía golpeando: el 13 de abril encuentran asesinado en Tigre al ex delegado de Astarsa, Ismael Lomez; el 7 de Mayo la “Triple A” mató en su domicilio de Villa Adelina (San Isidro) al obrero textil Juan Ricardo Casalonga y una comisión policial de civil, al no poder secuestrar al militante obrero Luis Navalesi de los talleres gráficos de Editorial Abril (Vicente López), se llevó de su domicilio a su esposa y dos hijos. Ante la denuncias formuladas a la justicia y a la prensa, días más tarde la policía reconoció que se encontraban detenidos por ella²⁵.

Organización y movilización obrera hasta la huelga general

El clamor de protesta que de inmediato se levantó entre la filas obreras al conocerse el contenido del nuevo plan económico forzó al gobierno, en la persona de la propia presidenta, a intentar calmar el descontento, concediendo un aumento del salario mínimo (de todas maneras, insuficiente ante la estampida inflacionaria), y la prórroga del plazo para la discusión paritaria, a los efectos de adecuar las mismas al nuevo plan económico. Estas dos medidas venían a reconocer de hecho lo que la realidad concreta imponía, aunque su adopción demostraba la debilidad relativa del gobierno, que debía mostrarse sensible ante las protestas que se multiplicaban. En ese mismo mensaje, María E. Martínez de Perón

²⁵Graham-Yooll (1989), página 345 y 347. ECC, 30/5/75.

advirtió que las medidas de lucha (paro, trabajo a desgano, etc) respondían a la subversión²⁶.

El gobierno pretendía imponer un techo al aumento de las remuneraciones. Éstas habían quedado claramente rezagadas por el impacto hiperinflacionario que tuvieron las medidas aplicadas por Rodrigo. La lucha por las paritarias sin tope se convertiría entonces en una reivindicación central de los trabajadores. A su vez, el gobierno pretendía con ese rígido esquema salarial transferir una mayor parte del producto social al capital y, al mismo tiempo, golpear económicamente a los sectores obreros más movilizados. La dirigencia gremial burocrática –que a duras penas venía reteniendo la conducción de los sindicatos nacionales– quedó bruscamente descolocada ante sus bases. La disyuntiva que debía enfrentar la burocracia era de difícil resolución, ya que enfrentarse con Rodrigo era también hacerlo con su mentor, López Rega y en última instancia con María E. Martínez de Perón, es decir no sólo con una parte del gobierno sino con su máxima conducción y heredera del liderazgo histórico del fundador del movimiento. Otro aspecto igualmente preocupante eran las líneas de fractura interna que atravesaban las primeras líneas de conducción del peronismo sindical ortodoxo. Hacia mayo de 1975 se podía observar a simple vista cómo a nivel nacional, se profundizaba el distanciamiento entre la máxima conducción de la CGT, al frente de la cual se encontraba Casildo Herreras (con un perfil más crítico para no afrontar los costos del ajuste) y el tradicional “brazo político sindical” del peronismo, las “62 Organizaciones”, comandadas por Lorenzo Miguel, quien apostaba hasta último momento a un cambio de rumbo sin tener que llegar a una ruptura con el gobierno. Lorenzo Miguel, debía afrontar, en su condición de secretario general del hasta entonces mayor sindicato industrial de la Argentina, la UOM, otros dos desafíos: hacia fuera, con la dirección del SMATA (José Rodríguez) que pretendía avanzar sobre la potencial masa de afiliados metalúrgicos de la estratégica rama automotriz, lo que le restaba presencia y captación de aportes económicos a la UOM en la rama que pagaba mayores salarios en el país. Hacia adentro, la confrontación era con Victorio Calabró, gobernador de la provincia de Buenos Aires y segundo hombre de importancia en la UOM. En este caso, como con Herreras y Rodríguez, no estaban en discusión proyectos político-ideológicos (todos eran peronistas ortodoxos) sino pujas por espacios de poder, que su condición de dirigentes sindicales les confería dentro de un gobierno justicialista. En particular Lorenzo Miguel rivalizaba con Calabró por la conducción de las decisivas seccionales del

²⁶LN, 7/6/75.

Gran Buenos Aires. En ellas, en especial la Zona Noroeste (Ciudadela, San Martín, Vicente López) estaba concentrada la mayor parte de los afiliados metalúrgicos. En nuestra área de estudio, Calabró disponía de uno de sus principales cuadros, Gregorio Minguito, quien conducía con mano de hierro los destinos de la seccional Vicente López.

Esta fragmentación en la cúpula de la dirigencia sindical favorecía indirectamente la acción de las organizaciones políticas de izquierda dentro del ámbito fabril. Pero también, paradójicamente, distorsionaba la percepción de alguna de estas organizaciones, llevándolas a sacar, por lo menos, dos conclusiones discutibles en términos de estrategia inmediata: por un lado el de creer que el frente reaccionario se podía atomizar, fruto de las contradicciones internas, licuándose el obstáculo que representaba la dirigencia burocrática para la recuperación de las estructuras gremiales; por otro lado, esperar que alguna de estas fracciones en crisis de la burocracia, pudiera ser permeable a la prédica y a la acción de los núcleos políticos combativos y, por lo tanto, se pusiera a la cabeza de la lucha contra los planes del gobierno. Ambas caían en el mismo error, al subestimar a la dirigencia tradicional y simplificar su estrategia. Dicho error, a su turno se articulaba con otro: sostener que se había abierto una crisis revolucionaria de curso ascendente e ininterrumpida y sólo bastaba redoblar los esfuerzos militantes para alcanzar el éxito. Creemos que estas concepciones reflejaban el todavía incipiente grado de inserción de la izquierda dentro de la clase obrera. Su propio crecimiento marchaba a un ritmo y velocidad más lento que los vertiginosos tiempos que se vivían en la sociedad. Al establecerse en las fracciones más concientes y combativas del proletariado perdían de vista la tendencia y comportamiento más conservador del resto de la clase, su relativa disposición a mantener un nivel de enfrentamiento permanente y hasta la consecución del objetivo máximo (la revolución). También esos sectores de izquierda evaluaban apresuradamente que se había producido, dentro de la clase obrera, la ruptura definitiva con la tradición reformista del peronismo tanto a nivel gremial como político.

La respuesta obrera registrada frente al más contundente y masivo ajuste económico neoliberal antes de marzo de 1976, comenzó como no podía ser de otra forma, en las fracciones obreras más desarrolladas y politizadas, asentadas en el cinturón fabril de la ribera del Paraná y en el anillo industrial que rodeaba a la ciudad capital de Córdoba²⁷.

²⁷Cotarelo y Fernández (1997) y Werner y Aguirre (2007) detallan y coinciden en la importancia de este proceso, pero difieren sustancialmente en lo referido a su alcance y consecuencias.

Desde comienzos del mes de junio y hasta el 27 de ese mes, en la región metropolitana, incluyendo Capital Federal y el Gran La Plata, se vivió un estado de aprestamiento, pero no pasivo. Los militantes dispersos, los delegados de sección, cuerpos de delegados, comisiones internas y todo otro organismo fabril creado al efecto, incrementaron la agitación al interior de la masa obrera, recibiendo como respuesta una voluntad de enfrentar el plan del gobierno. Los relatos de los participantes dan cuenta de una virtual paralización del trabajo pero que revestía la forma de organizarse para luchar. El “ausentismo” que había caracterizado como forma de resistencia la etapa previa, revirtió ahora en la presencia masiva en las fábricas. La dinámica seguía una secuencia inédita: cada turno fichaba la entrada y luego se dirigía a los playones o comedores de las plantas, iniciándose una asamblea donde se discutía e intercambiaban opiniones acerca de cómo seguir. Los activistas político-sindicales de izquierda se ponían a la cabeza de estas reuniones obreras, en las que los seguidores o integrantes de la dirigencia sindical ortodoxa a nivel planta participaban, en algunos casos plegándose a las propuestas más duras y combativas. La burocracia central no sólo no podía garantizar el apaciguamiento de las fracciones obreras, sino que tampoco podía “bajar” a los establecimientos (donde era repudiada) y en donde hasta sus cuadros o simpatizantes comenzaban a tomar distancia de ella.

El lunes 2 de junio, los operarios de la Ford (General Pacheco) iniciaron un movimiento de protesta consistente en asambleas por turno en el interior de la fábrica, paralizando las tareas en la misma por 48 horas. Tres días más tarde, retomaron la metodología de asamblea y huelga de brazos caídos dentro del establecimiento. El 6 de junio, este estado de asamblea permanente con cese de actividades se extendió, significativamente, a dos establecimientos vecinos: la fábrica de galletitas Terrabussi y la autopartista Wobron²⁸. En todos estos establecimientos activaban núcleos de militantes de izquierda con presencia en los respectivos cuerpos de delegados. También en las dos fábricas se habían producido anteriores medidas de fuerza, inclusive con toma de planta.

En forma inversamente proporcional a la parálisis y estupor en la que se había sumido la dirigencia gremial centralizada, la izquierda no cesaba de activar. En días que, en términos de los testimonios de protagonistas, parecían tener más de 24 horas, los militantes concluían su jornada en fábrica y proseguían su actividad política. Reuniones de “células”, “ámbitos” o “círculos” se sucedían sin solución de continuidad. En ellas se subían y bajaban novedades y planificaban las tareas futuras.

²⁸ECC, 7/6/75.

Pero además, a medida que avanzaba junio, esas reuniones se veían desplazadas por los primeros encuentros informales entre el activismo de distintas industrias de una zona para coordinar actividades en común. Esta dinámica ponía en la primera línea de enfrentamiento al activismo expresado en los organismos de base fabril, que se transformaba en una virtual conducción alternativa de las fracciones obreras de la zona. A falta de un reconocimiento “oficial” de ese liderazgo (o precisamente por eso) surgía el reconocimiento concreto de las bases. Se había producido un corte horizontal en el tradicional sistema sindical jerarquizado.

Hasta el 27 de junio las direcciones sindicales burocráticas intentaron descomprimir la situación criticando hacia fuera, en especial en mensajes dirigidos a las bases, las medidas económicas, pero sin concretar ninguna acción sistemática contra ellas. En ese marco, participaban en reuniones con legisladores nacionales y funcionarios de gobierno, alertándolos del peligro de desborde que se insinuaba. Al mismo tiempo, multiplicaron sus declaraciones periodísticas y solicitadas en los distintos medios, condenando por igual las medidas “desacertadas” del gobierno y las acciones “agitativas” del activismo de izquierda en las fábricas²⁹.

El 16 de junio se produce en el área de nuestro estudio uno de los más importantes actos de masas antes del inicio del ciclo de la huelga general de junio-julio de 1975, protagonizada por los trabajadores de la automotriz Ford de General Pacheco (Tigre). La empresa de capitales norteamericanos había instalado en la década de 1960, al igual que otras multinacionales, una nueva fábrica en ese partido del Norte bonaerense. En sus 4 plantas integradas (una pequeña ciudad), trabajaban 7.500 obreros a lo largo de cuatro turnos. Esta magnitud la convertía en el establecimiento industrial más importante de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, no sólo por su propio tamaño sino también porque demandaba un conjunto de autopartes producidas en fábricas más pequeñas de las cercanías.

Sus obreros se organizaban en un cuerpo de delegados de 130 miembros, que podía movilizar ese formidable contingente proletario, sin tener que subordinarse a otra estructura intermedia del SMATA, que hasta 1973 no poseía una seccional en la zona. Por otra parte, un elemento cualitativo destacado era la composición del colectivo obrero, donde se

²⁹Las primeras declaraciones condenando las acciones obreras iniciadas por fuera de los cuerpos orgánicos corresponden a las conducciones sindicales provinciales, pero a medida que avanzó junio, se fueron pronunciando de los máximos dirigentes de la CGT y las “62 Organizaciones”. Véase LN, 13 y 19/6/75; LO, 17 y 19/6/75.

combinaba la juventud de sus integrantes y un alto grado de politización. Si bien las fuerzas políticas de izquierda no tenían mayoría en el cuerpo de delegados ni en la comisión interna, disponían sí de una significativa presencia en forma de delegados por sección y activistas, abarcando un arco ideológico muy amplio (PC, PCR, la “Tendencia revolucionaria” del peronismo y PST). Todos los testimonios coinciden, no obstante, en afirmar que el PRT era la fuerza que mejor se había implantado en ese complejo fabril³⁰.

El colectivo obrero de esta fábrica registraba como antecedente de lucha, la de 1972 por las paritarias, en 1973 por la rotación de los turnos y en 1974 por el comedor. En todos ellos, tanto la masa trabajadora como el activismo fueron ganando experiencia, lo que se vio reflejado en la elección de algunos delegados de sección y por lo menos un representante combativo en la discusión paritaria iniciada a comienzos de 1975³¹.

El descontento por los efectos del “Plan Rodrigo” se expresó en la declaración de asamblea permanente, a partir del jueves 6 de junio, obligando a que el SMATA interviniera, destacando a su secretario adjunto Mercado, para tratar de convencer a los trabajadores de la conveniencia de aceptar el nuevo acuerdo paritario. En la asamblea de ese día, Mercado intentó denunciar al activismo opositor, catalogándolo como “subversivo”. Ante este hecho y la agresión de un grupo de matones que respondían a la burocracia contra un activista (que fue auxiliado por sus compañeros), la asamblea repudió al dirigente nacional, quien debió retirarse frente el rechazo masivo. A partir de allí, la asamblea reclamó a los delegados vacilantes ponerse a la cabeza de la lucha de los trabajadores. El 16 de junio, en medio de una nueva asamblea, el único representante paritario del activismo de izquierda denunció que la empresa había sobornado con prebendas económicas a los demás delegados. Esta última

³⁰Este éxito relativo se debía a una estrategia de dicho partido, que desde mediados de 1973 había decidido volcar los esfuerzos de sus militantes a trabajar en los establecimientos industriales más importantes. A comienzos de 1975 inclusive se comisionó al tercer cuadro en jerarquía del “buró político”, Benito Urteaga para que se encargase de coordinar las tareas de organización y agitación sobre la Ford, en el convencimiento que esta fábrica sería el centro desde donde irradiar su trabajo e influencia en Zona Norte, según la concepción del doble poder. Otro dato demostrativo de la importancia concedida a este trabajo es que el “círculo” de obreros organizados y su periferia editaba uno de los 42 “Boletines fabriles” con los que el PRT desarrollaba su labor sindical-partidaria en las plantas. Mattini (1990 y 2003) y “Petiso” (2003).

³¹Véase BCC, julio de 1975.

denuncia provocó una nueva reacción que empalmó con la propuesta de los militantes de izquierda de salir en manifestación de la fábrica, para dirigirse a reclamar al centro mismo del poder: la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno y la sede central del SMATA³².

La decisión de marchar sobre la Capital Federal, anticipando lo que luego será una práctica generalizada, demuestra el estado de discusión imperante dentro de ciertas fracciones obreras, las que comenzaban a visualizar la responsabilidad directa de las políticas del Estado sobre sus condiciones de vida y, al mismo tiempo, la complicidad de la dirigencia gremial ortodoxa con el gobierno. Dirigirse a la sede gremial parecía ser entonces una acción lógica en una estrategia de confrontación: era necesario recuperar una herramienta que se percibía como alienada, para luego emprender una lucha más profunda. Contrariando a ciertos análisis contemporáneos a los hechos y aun posteriores, esta intencionalidad (que se manifestaba simultáneamente también en los cordones fabriles de Córdoba y el Gran Rosario) demuestra que el activismo político-sindical de izquierda rechazaba el “paralelismo” sindical. Evaluando correctamente el estado de disposición de la masa obrera, encaminaba la segunda etapa de su reclamo (la primera, contra el capital se estaba cumpliendo con la paralización de tareas *dentro* de las fábricas) contra aquellos que obstaculizaban organizativamente sus esfuerzos: la burocracia sindical. Volviendo a la marcha de los obreros de la Ford, los distintos medios periodísticos de los que nos hemos valido para reconstruir ese acontecimiento difieren en la cantidad de participantes, variando entre 3.500 en la versión más conservadora hasta los 8.000 trabajadores³³. Las diferencias de cifras responderían a que se fueron incorporando en distintos momentos de la marcha, contingentes proletarios menores, pertenecientes a fábricas vecinas. Basándonos en distintas fuentes partidarias, estimamos que el número más aproximado fue la de 5.000 obreros, partiendo de la base que la marcha arrancó de la Ford luego de una asamblea en la que intervinieron la casi totalidad de los trabajadores de los turnos mañana y tarde, que estarían sumando ese número de operarios.

³²Véase los diarios del 17 de junio, como LO; ECC; LP; LR y LN. En la prensa político-partidaria, la cobertura más amplia la ofrece EC, 2/7/75, separata y la entrevista con “Petiso” (2003).

³³La versión más conservadora corresponde a LN, en el otro extremo LO. Por lo completo de su cobertura, nos hemos inclinado por seguir, en líneas generales, el relato de ECC.

A partir de las 16.30, la columna obrera partió del complejo fabril de General Pacheco. A lo largo de su recorrido, la marcha recibió adhesiones, muestras de simpatía y en algunos casos, la incorporación a la marcha de otros contingentes ocupados en fábricas vecinas como Alba, Wobron, Sylvapen y Editorial Abril. Luego de varios kilómetros, al llegar al cruce con el Camino de Cintura, varios oficiales de la policía bonaerense se apersonaron ante los dirigentes que encabezaban la columna, exhortándolos a disolverse, ya que si bien sus efectivos no reprimirían, tenían información que sí lo harían los policías federales. Se produjo entonces una primera asamblea sobre la ruta, en la que los trabajadores rechazaron la exhortación y decidieron seguir marchando. Cuando la marcha se encontraba a la altura de la avenida Yrigoyen (partido de San Isidro), a poca distancia de Vicente López y había recorrido aproximadamente 15 kilómetros, hubo una nueva intervención policial, estaba vez en la persona del jefe de la Unidad Regional San Martín y de un alto oficial de la Policía Federal sin identificar, quienes comunicaron a los manifestantes que tenían orden de impedir a toda costa la entrada de la columna a la Capital Federal. Esta intimidación venía materialmente sostenida con un importantísimo despliegue de efectivos policiales: más de 200 uniformados de Infantería, 21 patrulleros, 6 motos de la brigada antidisturbios, 4 carros de asalto, 2 camiones de traslado de detenidos y por lo menos una decena de vehículos sin identificación. Asimismo, en una segunda línea represiva, ubicada sobre la avenida General Paz (en el límite con Capital Federal), se comenzaban a ubicar tanquetas policiales y un numeroso contingente de efectivos uniformados y de civil. Sobre la columna sobrevolaban amenazantes dos helicópteros policiales.

En este punto, siendo las 21 horas, la conducción de la marcha convocó a los participantes a una nueva asamblea, que se realizó con los trabajadores sentados sobre la ruta. En su transcurso, uno de los dirigentes recordó que la marcha en sí ya había sido un éxito y que de seguir tendrían que enfrentarse con una severa represión. El PRT había dispuesto dos comandos armados que acompañaron la marcha para suministrar un refuerzo a los grupos de autodefensa improvisados por los trabajadores, pero la desproporción existente con las fuerzas represivas y su consigna de impedir a cualquier costo el avance obrero, desaconsejaban una confrontación directa. Finalmente, la asamblea de trabajadores acordó desconcentrarse pero programando para los días subsiguientes paro de actividades escalonado con asambleas dentro del complejo fabril, como forma de ajustar la organización para futuras acciones y recuperar energías. A lo largo de la jornada también se manifestaron una serie de señales que permiten entender el clima político dominante en nuestra zona de estudio,

que se repetía según constancias periodísticas, en otros áreas de concentración fabril: las direcciones gremiales ortodoxas habían sido sobrepasadas en la práctica; el activismo de izquierda logró ser reconocido como conducción alternativa y su propuesta de movilización vino a empalmar con la voluntad existente en la base obrera; se produjo una solidaridad activa de los contingentes de trabajadores de las fábricas cercanas; la metodología de la marcha incluía provisiones de autodefensa y asambleas para fijar el curso de acción a seguir; dentro de las fuerzas estatales se estaba produciendo una incipiente fisura en lo referente a como encarar la respuesta a este tipo de marchas, que incluía una actitud pasiva.

Los restantes días de esa semana, la inquietud obrera en todo el país fue en aumento. El clima de movilización y lucha se inició y difundió organizadamente desde la zona del Gran Rosario y en la ribera industrial del Paraná (a pesar de la represión gubernamental sobre Villa Constitución) y en el importante polo fabril de Córdoba, poniendo en jaque al propio interventor federal, el ultrafascista brigadier Lacabanne. Esta situación generalizada llevó a la dirigencia gremial ortodoxa a adoptar una actitud original: organizar movilizaciones obreras, convocadas bajo la consigna de discusión paritaria sin topes o límites, pronta homologación oficial de los acuerdos alcanzados y respaldo al “gobierno del pueblo”. Con estas movilizaciones, la burocracia sindical buscaba varios objetivos simultáneos: por una parte, descomprimir la situación, canalizando las acciones de las bases, que ya habían ganado las calles; transformar esos reclamos imponiendo una “institucionalización” de la protesta, que la alejara de las críticas al gobierno y a la propia dirigencia gremial y, finalmente, demostrar al mismo tiempo al gobierno la capacidad que todavía conservaba esa dirigencia para evitar que todo el movimiento se tornara incontrollable.

La coordinación organizativa del sindicalismo combativo se estaba imponiendo en varias concentraciones fabriles del país. En Zona Norte del Gran Buenos Aires, la agrupación de obreros navales orientada por la JTP declaró, por fuera del sindicato intervenido, la paralización de tareas en todos los astilleros de la zona y asambleas de personal, en vistas a una futura movilización. Lo propio hicieron los núcleos de activistas de izquierda en las metalúrgicas de San Isidro y San Fernando y los cuerpos de delegados y comisiones internas de las plantas fabriles del conurbano Norte de Buenos Aires. Como corolario de estas acciones coordinadas localmente, se produjeron una serie de reuniones informales en la zona, donde los militantes de izquierda comenzaron a organizar una estructura

que abarcara el vasto movimiento de protesta, esperando la oportunidad para emerger a la luz pública³⁴.

El clima de agitación alcanzó uno de sus picos máximos entre el 18 y 20 de junio. Al ya señalado proceso asambleario de los trabajadores navales de los astilleros en Tigre, se sumó la de la sección metalúrgica del astillero Astarsa: cerca de 300 operarios tomaron esa parte de la planta, reteniendo a 50 directivos como rehenes. El reclamo era la equiparación salarial con los nuevos índices alcanzados por los navales. Luego de una negociación en la que debió participar un alto ejecutivo venido de la Capital Federal y accederse a las exigencias planteadas, los obreros liberaron a los rehenes y levantaron la toma³⁵. A su vez, en todas las plantas automotrices del conurbano bonaerense, los trabajadores se declararon en huelga en forma indefinida, ocupando las plantas y realizando asambleas permanentes. En la General Motors de San Martín (Noroeste del Gran Buenos Aires), la reunión obrera repudió y echó al delegado regional del SMATA, mientras que en la Ford de General Pacheco la asamblea decidió comisionar una delegación a la sede nacional del gremio para imponer una reunión plenaria de delegados. La respuesta de la conducción nacional de ese sindicato descartaba la convocatoria a tal plenario, acusando a sus convocantes de formar parte de “minúsculos grupos (...) radicalizados”. La gravedad en la planta de la Ford quedó reflejada en la presencia de patrulleros policiales que circulaban dentro del establecimiento y el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Bonaerense sobre el mismo. El jueves 19 se conocía el asesinato del dirigente Fidel Quiroz, del combativo Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina. Este asesinato, responsabilidad de un comando fascista de la “Triple A”, venía a confirmar la política de eliminación sistemática de opositores y de terror que esta organización parapolicial llevaba adelante, con la complicidad del Estado³⁶.

En la semana que comenzó el lunes 23 de junio, por iniciativa de las comisiones internas y delegados de astillero Astarsa, Editorial Abril, laboratorios Squibb, Tensa, laboratorios Avon, Santini y la adhesión del Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, se convocó a la constitución formal de una Coordinadora Interfabril, para centralizar y organizar la lucha simultánea que se venía desarrollando en decenas de fábricas y talleres desde Vicente López hasta el límite norte de Tigre. Para garantizar este objetivo se constituyeron comisiones integradas por activistas

³⁴LO, 19/6/75; LR, 18/6/76; Girotti (2002), Benencio (2002) y Frigoli (2003).

³⁵LR, 21/6/75.

³⁶LN, 19/6/75; LP, 19/6/75. EC, 2/7/75, separata. “Petiso” (2003).

de los distintos establecimientos para recorrer la zona invitando a los distintos contingentes obreros a sumarse a este movimiento de coordinación proletaria³⁷.

Mientras tanto, el jueves 26 de junio, luego de muchas dilaciones y como resultado de la presión de los trabajadores de la Ford, el resistido secretario adjunto nacional del SMATA, Mercado, se apersonó en el complejo fabril de General Pacheco. En un clima de tensión por el malestar de los trabajadores, el dirigente nacional informó que el sindicato había logrado en las paritarias un aumento del 85% sobre el básico. La asamblea reaccionó indignada, exigiendo el 100%. Ante el rechazo, Mercado intentó poner varias veces a votación la propuesta, lo que aumentó la repulsa de los participantes quienes manifestaron su descontento arrojando tuercas, tornillos y zapatillas sobre el dirigente y los guardaespaldas que lo acompañaban. Finalmente, y ante la imposibilidad de imponerse a la asamblea, presionado por los trabajadores, el dirigente del SMATA se comprometió a lograr el 100% reclamado y convocar a una nueva asamblea para el lunes 30³⁸.

Las directivas nacionales de la CGT y de los principales sindicatos, ante el cariz ingobernable que tomaba el proceso en el área metropolitana, decidieron redoblar la apuesta: convocar una movilización obrera sobre la Plaza de Mayo, bajo el pretexto de agradecer a la presidente Martínez de Perón su supuesta intervención favorable en la discusión paritaria y además, de manera explícita, exigir la homologación inmediata del Estado de los convenios acordados, que superaban en mucho el techo del 50% que el propio gobierno aceptaba como máximo. El recurrir a la movilización por parte de las direcciones burocráticas era una decisión arriesgada: podía servir para descomprimir el clima de protesta generalizado y al mismo tiempo intentar cerrar cuanto antes la discusión que amenazaba tornarse interminable, al compás de la inflación desbocada. Pero al mismo tiempo podía desatar las últimas riendas que contenían hasta ese momento, a las masas obreras.

El modelo de movilización controlada que esas dirigencias burocráticas pusieron en práctica en los últimos días de junio, se puede ejemplificar con la convocada por la UOM nacional el martes 24. Ese día, a partir de las 10 de la mañana, nutridos grupos de trabajadores, provenientes de distintas fábricas metalúrgicas de Capital Federal y del Gran Buenos Aires se concentraron frente al Ministerio de Trabajo (a cargo del ex dirigente metalúrgico Ricardo Otero) y luego marcharon encabezados por

³⁷BCC, julio de 1975.

³⁸EC, 2/7/75, separata.

el ministro y Lorenzo Miguel hasta la cercana Casa de Gobierno. En ella, luego de entrevistarse con la presidente, salieron juntos a uno de los balcones, desde donde María E. Martínez de Perón agradeció la presencia de los trabajadores. La concurrencia obrera varió según las fuentes entre 20.000 y 25.000 asistentes, hasta allí, una de las más importantes de los últimos tiempos. Sin embargo, la historia poco conocida acerca de cómo se llegó a esta reunión nos puede alertar del carácter fluido de la situación. En efecto, si bien la convocatoria partió de la dirección nacional, quienes debían garantizarla eran las distintas seccionales. Pero los secretarios gremiales de éstas últimas no podían en muchos casos, acercarse a las principales fábricas, donde eran repudiados. Además, algunas de las seccionales suburbanas estratégicas por el número de afiliados, como por ejemplo Vicente López en Zona Norte con sus casi 30.000 afiliados, estaban en manos de un sector interno de la burocracia enfrentado con Lorenzo Miguel y alineado con el gobernador de Buenos Aires, el ex dirigente metalúrgico Victorio Calabró. Por todo lo dicho, se llegó al 24 de junio en una situación por demás original: las direcciones burocratizadas, a través de sus seguidores menos desprestigiados en las plantas llamaron a un diálogo al activismo de izquierda y las conducciones combativas de Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados, para establecer una “tregua” de hecho y “movilizar juntos”³⁹.

No obstante, dentro de la militancia obrera de izquierda en la rama metalúrgica como en las organizaciones políticas que la encuadraba, no existía unanimidad al momento de hacer el balance vertiginoso que imponían los tiempos. Así, algunos partidos como el PST evaluaban que la burocracia se estaba quebrando, ofreciendo una oportunidad para presionarla y radicalizar sus posiciones. Por el contrario, otras organizaciones como el PRT desconfiaban de la “súbita” combatividad de reconocidos dirigentes burocráticos y discutían la conveniencia de sumarse a convocatorias, prestando masa de maniobras a las conducciones peronistas ortodoxas, quienes en última instancia capitalizarían el rédito político de estas acciones.

El viernes 27 de junio sería la CGT nacional quien apelaría, como último recurso, a la movilización de los trabajadores sobre Plaza de Mayo. Al igual que había hecho la directiva de la UOM tres días antes, la idea era, según comentarios que los dirigentes hicieron trascender extraoficialmente, mostrar el descontento por la demora en la homologación de los convenios colectivos, expresar críticas a un sector del gobierno (los ministros Rodrigo y López Rega) y ratificar el respaldo a la presidente.

³⁹Ver testimonio de “Oscar”, op. cit.; Girotti (2002) y Frigoli (2003).

En las principales zonas fabriles del interior e inclusive en el Gran La Plata, las direcciones sindicales habían sido desbordadas por la movilización obrera, conducida por las direcciones clasistas y combativas. Multitudinarias marchas se concentraron frente a la sede de los gobiernos provinciales y a los edificios de las regionales de la CGT, exigiendo a la burocracia sindical una actitud firme frente al gobierno. En alguna de estas marchas y concentraciones, la dirigencia peronista ortodoxa había tenido que refugiarse precipitadamente en las sedes respectivas para escapar a la ira de los manifestantes. También se empezaban a producir situaciones de tensión o enfrentamientos parciales con las fuerzas policiales, cuando las mismas intentaban disuadir o reprimir a las columnas obreras⁴⁰.

El jueves 26 de junio las máximas autoridades de la CGT y las “62 Organizaciones” decidieron la convocatoria a un acto en la Plaza de Mayo para el día siguiente. Al dar a conocer el comunicado, varios dirigentes agregaron que la única consigna de los manifestantes sería “*Isabel, homologación*”⁴¹.

La planificación y hasta la consigna (excluyente) que los convocantes dieron a conocer demostraba la intención del peronismo ortodoxo sindical de proceder a un quirúrgico recorte de la acción de masas, para circunscribirla a una demanda de tipo estrictamente económica, soslayando cualquier cuestionamiento político. En términos organizativos, ni siquiera en momentos donde todo el país estaba recorrido por un movimiento huelguístico sin precedentes, con movilizaciones multitudinarias, esos dirigentes podían o querían proponer más que un “cese de actividades” por sólo unas horas y con el único propósito de reunirse frente a la Casa de Gobierno pidiendo homologación de los convenios y en apoyo a la Presidente. Esta era una manera de desconocer todo el proceso de huelga general *ya declarada* por fuera y a pesar de su intervención. El momento en que se da a conocer el comunicado (menos de 18 horas del inicio de la concentración), la vaguedad de la convocatoria y los medios que se emplearían para garantizarla, apostaban todos a un acto chico, limitado al aparato que pudiera mover cada dirección sindical e impedir por la falta de previsiones, la concurrencia masiva de los combativos contingentes obreros del Gran Buenos Aires y La Plata.

⁴⁰Cotarelo y Fernández (1998), página 48.

⁴¹*Cla*, 27/6/75. Los destacados son del original.

En nuestra área de estudio, según los testimonios consultados⁴², la situación se presentó con contornos idénticos a la ya reseñada concentración de los metalúrgicos. Una vez más, la seccional Vicente López de ese gremio fue la entidad convocante más importante. Pero también, la situación fue similar a la presentada en el acto de los metalúrgicos, esta vez extendida al conjunto de activistas, cuerpos de delegados y comisiones internas de las distintas fábricas, quienes sostuvieron con su esfuerzo el mayor peso en la organización de la concentración⁴³. El mismo 27 muy temprano en la mañana se encontraron en una reunión interfábrica (en rigor, la futura Coordinadora) los principales núcleos de activistas y organismos de base. En ella, resurgió la discusión acerca del carácter de la convocatoria de la CGT y la conveniencia de concurrir. Algunos planteaban que no había que hacerle el juego a la burocracia, mientras que otros sostenían que en esa actividad lo que estaba en juego era la defensa de la ley de paritarias y manifestar contra el plan económico. Finalmente, ante la falta de unanimidad, se organizaron los grupos dispuestos a concurrir, procediendo así a sumarse al acto central, aunque esa presencia fue parcial, debido a las diferencias existentes en la reunión. Si bien no contamos con otras precisiones acerca de la composición del contingente de Zona Norte (número de trabajadores y procedencia fabril), según una crónica periodística, fue uno de los primeros y más importantes⁴⁴.

⁴²Ver el testimonio de “Oscar”, op. cit. Frigoli (2003), Cristina (2002/3) y “Petiso” (2003).

⁴³El término “organización” suele ser minimizado en tanto esfuerzo militante. En efecto, no se trataba de “ir”, lo que como tendencia era compartida por gran número de trabajadores, sino el “como ir”. En ese sentido no era lo mismo, como acostumbraba la burocracia, sumar individuos en actitud pasiva que, por el contrario, estructurar contingentes obreros desde cada fábrica, constituyendo una columna proletaria integrada por otros grupos de establecimientos vecinos. Esta última modalidad apuntaba a una práctica colectiva y de clase. Para garantizarla era necesario realizar una serie de complejas actividades: formar piquetes en puerta de fábrica para convencer a los obreros remisos a marchar o disuadir a aquellos que pretendían ingresar a trabajar, conseguir los estratégicos colectivos para movilizarse, establecer grupos de autodefensa para proteger la marcha, recorrer las plantas vecinas invitando a sus operarios a sumarse, establecer comisiones de enlace permanentes y elaborar boletines y volantes. Estas importantes tareas debieron ser asumidas por trabajadores que no contaban con permiso o licencia gremial, restándole horas al descanso y la vida familiar y expuestos permanentemente a los ataques criminales de las bandas fascistas.

⁴⁴Véase BCC, julio de 1975 y *Cla*, 28/6/75.

El desarrollo del acto en Plaza de Mayo quedó teñido por las contradicciones de lo que sería la última actividad de masas convocada y pautada por la cúpula sindical burocrática. A partir de allí, las siguientes marchas y concentraciones quedarían a cargo exclusivamente de los sectores gremiales combativos y en especial de las Coordinadoras.

Un balance del acto arroja algunos elementos significativos. En cuanto al origen y composición de los participantes, se puede decir que los entre 50.000 y 70.000 asistentes no lo hacían encolumnados sólo bajo las banderas del activismo combativo de izquierda. Muy probablemente, este sector aportó un número menor de manifestantes de lo que realmente podía movilizar, debido a la polémica que internamente dividía al sindicalismo opositor respecto a las expectativas cifradas en la conducción burocráticas. Un porcentaje no menor de la concurrencia posiblemente haya respondido a la convocatoria de la dirección de la CGT, ya sea en forma organizada o a título individual. Por último, otros sectores burocráticos rivales de la conducción oficial, pudieron igualmente aportar una porción imprecisa de manifestantes, integrada por aquellos trabajadores que no podían discernir con claridad las diferencias entre el discurso súbitamente “endurecido” del “antiverticalismo”, de la posición consecuente de la izquierda política-sindical⁴⁵.

Una segunda cuestión es el contenido y carácter en sí del acto. La dirigencia burocrática planeó una demostración pasiva frente a Casa de Gobierno, limitada en el tiempo (sólo 4 horas) y precedida por un “cese de tareas” para facilitar la llegada a Plaza de Mayo. No se tomó ninguna previsión para garantizar la asistencia masiva, como podía haber sido organizar el traslado y desconcentración de los manifestantes con los gremios de transporte. Tampoco se estableció la posibilidad de oradores durante la concentración y ni siquiera se elaboró un documento para ser leído frente a los manifestantes. Por último, la cúpula sindical no explicaba qué curso futuro tendría el proceso si no se alcanzaba una respuesta positiva a la demanda que, recordemos, era únicamente la homologación de los acuerdos paritarios sin tope de aumento salarial. Estas deficiencias no nos deberían sorprender ya que formaban parte de una tradicional estrategia seguida por las direcciones sindicales del peronismo ortodoxo desde la época de Vandor: presionar, con una demostración teatralizada y controlada de fuerza, para luego negociar. La diferencia central es que a mediados de 1975, la burocracia gremial se veía forzada a este juego ritualizado de presión frente a un gobierno

⁴⁵Los seguidores de Calabró eran identificados como “antiverticalistas”, por desconocer la conducción político-partidaria de la presidente Martínez de Perón.

peronista, desempeñado ni más ni menos que por la heredera política del fundador y líder del movimiento. Además, la situación de esa cúpula burocrática estaba seriamente cuestionada por un incipiente movimiento de dirección alternativa que ya se encontraba conduciendo de hecho los cordones fabriles que rodeaban la capital del país.

A pesar de las exhortaciones formuladas por la presidente de la Nación a no abandonar sus lugares de trabajo para demostrar el apoyo a su gestión, los trabajadores organizados en distintas columnas comenzaron a llegar a la Plaza de Mayo desde distintos puntos del conurbano bonaerense a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. Teniendo en cuenta las distancias y la situación de virtual parálisis que se registraba en los medios de transporte (ferrocarriles y ómnibus), esa afluencia de manifestantes demuestra que los contingentes obreros ya se encontraban “acuartelados” en sus fábricas y preparados para marchar. Esta disposición facilitó objetivamente la organización de los distintos cuerpos de base fabril y de los activistas de izquierda, quienes, como queda dicho, en Zona Norte ya venían preparando la posibilidad de marchar sobre Capital varios días antes. Los trabajadores, una vez en el lugar de concentración, se encontraron que no había prevista ninguna actividad organizada. Sólo varios cordones de efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Federal se interponían entre la Casa de Gobierno y las primeras filas de manifestantes. La red de altavoces se mantuvo enmudecida hasta cerca de las 17 horas. A pesar de la inclemencia del tiempo (fue una jornada de intenso frío y lluvias) los concurrentes se mantenían en el lugar⁴⁶. El activismo de izquierda aprovechó la oportunidad para establecer contactos informales, en especial con los contingentes que provenían de una zona en donde se tenía militancia. De estos contactos se alimentarían también en los próximos días las flamantes Coordinadoras Interfabriles.

No obstante lo desorganizado del acto, atribuible a la voluntad explícita de la cúpula sindical de no forzar las circunstancias, el descontento creciente no tardó en manifestarse. Si las consignas propuestas por la dirigencia burocrática se limitaban exclusivamente a brindar el agradecimiento a la Presidente y pedidos para una pronta homologación de los convenios paritarios, la dinámica del acto las fue transformando. Así, durante toda la concentración se escucharon gruesos insultos, amenazas y reclamos para que abandonen el gobierno los muy odiados ministros de Economía y de Bienestar Social: el uno (Rodrigo) responsable del plan que catalizó la protesta obrera, el otro (López Rega) jefe principal

⁴⁶Véase en especial *LN* y *LP*, 28/7/75.

del terror fascista de la “Triple A”. Aun la consigna radicalizada respaldando la ley de convocatoria a paritarias (“14.250 o paro nacional”) nos indica al mismo tiempo, que se percibía el acto del 27 de junio como un “cese de tareas” claramente insuficiente. A su vez, nos permite medir la disposición de la mayoría de los manifestantes y el curso que podían tomar los acontecimientos. Todos los protagonistas y espectadores pudieron observar cómo el escenario político, con sus contradicciones, se desbordaba ideológicamente por izquierda⁴⁷.

Aproximadamente a las 17 horas, en forma simultánea con una transmisión en cadena oficial por radio y televisión, el dirigente a cargo de la CGT nacional, Adalberto Wimer (por ausencia de Casildo Herreras), convocó a los manifestantes que seguían ocupando la plaza a “desconcentrarse en orden” por la red de altavoces⁴⁸. Con este simbólico gesto (por el medio empleado, el momento y la consigna) la dirección sindical burocrática ponía fin unilateralmente a la demostración en Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, y para descomprimir, se informaba a la clase trabajadora que la cúpula gremial se reuniría con la presidente Martínez de Perón en la quinta residencial de Olivos, para obtener los puntos solicitados. Los activistas y conducciones fabriles opositoras decidieron entonces, no sin antes manifestar su repudio por la resolución que tuvo la concentración, optar por el retorno a las distintas zonas industriales del Gran Buenos Aires. Antes de este repliegue, los militantes de izquierda convocaron a los trabajadores a mantenerse en alerta durante el fin de semana y concurrir el lunes 30 a las fábricas para resolver en asamblea como seguir. Al mismo tiempo, y como resultado de las actividades y conversaciones previas y durante el acto, se informó la constitución de “mesas de enlace y coordinación” inter-rama integradas por delegados y activistas de los distintos establecimientos vecinos, con el objetivo de garantizar en los próximos días la presencia obrera organizada.

Éste es, creemos, el bautismo en acción de las “Coordinadoras Interfabriles”. Un poco más tarde, aprovechando la casi total desconcentración de las columnas obreras, la policía cargó contra los últimos grupos de trabajadores remisos, reprimiendo con gases lacrimógenos y demorando a varias decenas de activistas, significativamente integrantes de las combativas agrupaciones del SMATA de Zona Norte⁴⁹.

⁴⁷Ver Frigoli (2003), Cristina (2002/3), “Petiso” (2003), Girotti (2002) y Pérez (2002).

⁴⁸Kandel y Monteverde (1976), página 74.

⁴⁹Girotti (2002). Este tipo de acción disuasiva (“demorar” y no encarcelar) expresaría el temor de las fuerzas policiales de provocar una reacción obrera de mayor magni-

El acto del 27, visto en su conjunto, refleja tal vez el estado de disposición promedio que recorría a la clase obrera argentina, y como tal no se asimilaba necesariamente con la dinámica que se registraba en las fracciones de vanguardia del proletariado. Sectores importantes de la clase trabajadora por su inserción en el corazón del capitalismo argentino estaban iniciando un camino incipiente que los podría llevar a jugar un papel político protagónico, en perspectiva de una transformación profunda del sistema. Pero ese camino recién se estaba empezando a recorrer y las limitaciones que expresaban actos como los del 27 de junio indicaban que el grueso de la clase no se encontraba todavía procesando en términos masivos esa discusión. Probablemente este desfase parcial entre la estructura social en su conjunto y algunas fracciones más adelantadas, reflejan en nuestro ámbito de estudio otras contradicciones similares que se podían estar operando en el resto de la sociedad argentina hacia mediados de 1975. De ser así, podríamos equiparar los datos que arroja este estudio con el nivel de desarrollo de una fuerza política orgánica, esto es, un partido. Su ausencia o escaso desarrollo habría privado a los sectores de la vanguardia obrera del eje de referencia organizativa con el que orientar el rumbo y encaminar de manera efectiva la lucha por un proyecto revolucionario.

La respuesta al acto del 27 de junio por parte del gobierno nacional no se hizo esperar: al día siguiente por la red de radio y televisión se anunció la suspensión de las paritarias y en su reemplazo y por decreto un aumento de salarios general del 50% vigente a partir del 30 de junio y dos tandas más de 15% en septiembre y diciembre. Ese mismo día sábado se daba a conocer la renuncia del ministro de Trabajo, Ricardo Otero. Esta renuncia lo convertía en la primera víctima política de la crisis. La salida de Otero del gabinete era doblemente significativa: por un lado mostraba la impotencia de la cúpula gremial para incidir desde adentro del gobierno en las políticas públicas; pero también marcaba el progresivo distanciamiento de esa dirigencia gremial del proyecto oficial que no hacía más que encrespar las luchas obreras.

tud. Un activista político-sindical de la zona de La Plata, refiere como, días después, protagonizó un episodio parecido, siendo sus compañeros de fábrica quienes con su contundente presencia lo “rescataron” de un operativo de detención. De Santis (2005), página 149 y 150.

Las “Coordinadoras Interfabriles” de Buenos Aires al centro de la escena

El sábado 28 de junio de 1975 se inició en la región metropolitana la etapa pública de las Coordinadoras Interfabriles. Emergían de esta manera una de las formas organizativas que se había ido probando en el largo proceso de experimentación durante los tres años anteriores, al calor de innumerables luchas fabriles aisladas. Justamente su aparición venía a resolver el dilema de cómo reunir en un solo haz las fuerzas de los contingentes obreros dispersos, ante la claudicación evidente adoptada por la dirigencia sindical tradicional, funcional a la perpetuación del sistema de dominación.

El principal obstáculo para documentar todo este proceso es la dificultad para acceder a documentos y fuentes escritas de primera mano que narren esos acontecimientos. Esta dificultad se basa centralmente en tres factores: 1) la sistemática destrucción y la desaparición física (desde 1976) de archivos donde pudieran encontrarse conservados materiales elaborados o referidos al fenómeno a estudiar; 2) la escasa o nula producción sistemática de publicaciones de todo tipo (volantes, boletines, comunicados⁵⁰) por parte de las propias Coordinadoras, atribuible no sólo a lo precario de su organización sino también a las divergencias políticas o ideológicas entre sus componentes y 3) porque las corrientes de izquierda que militaban dentro de las Coordinadoras trataban de limitar, al igual que en su prensa partidaria, la información pública que pudiera servir a las fuerzas represivas para identificar a sus miembros o acciones .

⁵⁰Hemos podido consultar 4 *Boletines* (n° 2, 3, 5 y 6) publicados por la Coordinadora Intefabril metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires), entre mediados de julio a octubre de 1975, en el período de mayor actividad y visibilidad pública de este organismo. El n° 1 probablemente haya sido repartido como volante-declaración en las marchas y actos del 3 de julio. Respecto al n° 4, según la publicación del PST (AS, 30/8/75), el mismo fue dedicado íntegramente a transcribir el Programa aprobado por el Segundo Plenario de la Coordinadora metropolitana (Beccar, 20 de julio de 1975). También pudimos consultar otras declaraciones, invitaciones a Plenarios y proyectos de discusión, alguno de los cuales eran específicos de Zona Norte del Gran Buenos Aires. Nuestro especial y permanente agradecimiento a la historiadora Yolanda Colom, quien nos facilitó desinteresadamente copias de todos estos materiales.

Un segundo obstáculo es la dificultad de localizar protagonistas que hubiesen tenido participación directa en las distintas instancias organizativas de las Coordinadoras y que pudieran brindar su testimonio en clave de “historia oral”. Si bien hemos podido entrevistar a un cierto número de activistas político-sindicales de las distintas vertientes de la izquierda, la mayoría tuvo un contacto indirecto con la estructura organizativa objeto de nuestro estudio. Por estas razones, en la reconstrucción de los acontecimientos combinaremos aportes escritos y orales contemporáneos y posteriores a los sucesos, los comentarios y crónicas periodísticas aparecidos en la prensa comercial y en los artículos que con intención polémica le dedicaban algunas organizaciones de izquierda.

El encuentro del 28 de junio, del cual hasta el momento no hemos podido localizar o tener referencia fehaciente acerca del lugar físico donde se realizó, pasará a conocerse como Primer Plenario de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires⁵¹.

Un primer señalamiento es que a pesar de lo que sugiere su título, por lo menos hasta el 2º Plenario Regional (realizado en la última quincena de julio de 1975), la presencia formal de gremios no fue más que una indicación de cuán amplio pretendía ser el espacio recién formado. En ese sentido, contrastaba con la Mesa Coordinadora de Gremios en Lucha en Córdoba Capital, que estaba integrada –además de cuerpos de delegados y comisiones internas de plantas– por seccionales y gremios locales y aun por conducciones “paralelas” (como Luz y Fuerza y SMATA).

La aparición tardía en el área metropolitana de la Coordinadora, estaría dando cuenta de un doble retraso madurativo: el de la recuperación antiburocrática de los organismos de base fabril y también de las seccionales o sindicatos. Al conjugarse este doble retraso habría impedido contar con otro tipo de participación institucional, teniendo en cuenta además que la legislación gremial pudo bloquear los intentos del activismo combativo en Buenos Aires. Por tal motivo, en las cuatro regionales metropolitanas (Capital Federal, Oeste, Norte y Sur) fueron las comisiones internas, los cuerpos de delegados y también los comités de lucha y aun núcleos aislados de activistas los que asumieron casi en exclusividad el peso de todas las acciones de las flamantes Coordinadoras.

La convocatoria y la organización de la reunión del 28 de junio nos permite también distinguir en parte la estructura que tendrá la

Coordinadora de la Regional Buenos Aires. Se trata de un doble movimiento convergente: por un lado, las conducciones político-sindicales de las distintas fuerzas de izquierda con vínculos superestructurales entre sí, formalizaban el encuentro de sus principales cuadros, quienes cumplían el papel de polo de referencia y nucleamiento. Por otro lado, los organismos de base fabril zonal, mayoritariamente conducidos por activistas de aquellas fuerzas de izquierda, impulsaban un nivel de articulación que buscaba ampliar y profundizar el espacio de convergencia cotidiano, elevando a un escalón organizativo más estructurado las prácticas de coordinación que venían desarrollando en los hechos desde tiempo atrás.

Esta originalidad organizativa reviste características sorprendentes, sólo entendibles a la luz del formidable auge de movilización de masas que conmovía los principales centros industriales de todo el país y en particular la región metropolitana. Como vimos en Zona Norte, el embrión de Coordinadora o “comisión interfabril” (como se la conocía por aquella fecha), había jugado un destacado papel al poner en discusión qué hacer ante el curso de los acontecimientos, en especial la convocatoria al acto de la CGT del 27 de junio. Si bien no hubo unanimidad en torno a la actitud a asumir, los lazos no se disolvieron sino que, por el contrario, se hicieron más necesarios. La concurrencia organizada a Plaza de Mayo y los resultados decepcionantes de la misma, demandaban no sólo un balance teórico, sino una toma de decisión a futuro.

Los redactores de la crónica del primer Plenario recordaban que se llegó al mismo con los siguientes antecedentes prácticos: el acercamiento a las luchas de las empresas en conflicto, la solidaridad con los trabajadores de Villa Constitución y la experiencia zonal de movilizaciones y asambleas zonales en torno a la discusión paritaria. Destacaban también que la convocatoria fue amplia y democrática a todos los sectores, sin distinciones políticas e ideológicas “con la única condición de ser representativos y leales a los intereses de la clase trabajadora. También quedaba claro en esa convocatoria que *no se pretendía montar un organismo gremial paralelo a los ya existentes*. El objetivo primordial fue unificar las luchas del Movimiento Obrero, sobre la base de una COORDINACIÓN asentada zonalmente y centralizada en una regional”⁵². La lista de participantes mencionados en el *Boletín* incluye un importante número de comisiones internas, comisiones directivas de sindicatos docentes (todos adheridos como entidades de base a la flamante Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina [CTERA]) y cuerpos de delegados de distintos establecimientos.

⁵¹BCoord, n° 2, 19/7/75 y la solicitada titulada “El triunfo de la movilización”, en UH del 17/7/75.

⁵²BCoord, op. cit. Los destacados son nuestros. Las mayúsculas del original.

Como elemento significativo, podemos destacar la presencia de las delegaciones más representativas de cada zona (de nuestra área de estudio, la del astillero Astarsa y de los laboratorios Squibb). Además, la constitución de la Coordinadora Regional surgía con una fuerte impronta basística y no sólo superestructural. El hecho que participaran abrumadoramente como protagonistas centrales de ese Plenario organismos fabriles, nos está indicando cómo las fuerzas políticas de izquierda habían procesado correctamente la polémica sobre la oportunidad y el carácter de esta instancia de coordinación, postergada por lo menos desde un año atrás en el encuentro de Villa Constitución. El lugar central asignado a los organismos fabriles estaría dando cuenta también de la crisis por la que atravesaba la burocracia.

El orden del día del Plenario, igualmente significativo del rumbo que seguían los acontecimientos, giraba sobre tres puntos centrales: 1) análisis de las paritarias por gremio; 2) defensa del salario y 3) recuperación de los gremios para los trabajadores. Los elementos de la coyuntura imponían (por lo menos a priori) una agenda que la dinámica social obligaba a readecuar permanentemente. La difusión de la respuesta gubernamental mientras se desarrollaba el plenario llevó a discutir un plan de lucha que quedó sintetizado en once puntos:

“1) Realizar asambleas en los lugares de trabajo para informar sobre la formación de la COORDINADORA y el Plan de Lucha. 2) Exigir la realización de asambleas generales a los respectivos gremios y plantear el plan de lucha. 3) Exigir a la CGT la convocatoria de un paro general. 4) Pedir la renuncia de todos los dirigentes que apoyen el decretazo. 5) Por la defensa de la ley 14.250. 6) Contra el decretazo. 7) Por la defensa de lo acordado por las paritarias y por un aumento de salarios a los gremios que quedaron postergados. 8) Por un sueldo mínimo de 650.000 pesos. 9) Por la defensa y recuperación de los sindicatos y la CGT, para los trabajadores. 10) Por la plena vigencia de la democracia sindical. 11) Por la libertad de Piccinini, Ongaro y todos los presos políticos, gremiales y estudiantiles”⁵³.

El ambicioso Plan de Lucha, trabajaba sobre cuatro ejes reivindicativos simultáneos: el económico (defensa de las paritarias y exigencia de un piso mínimo salarial); el organizativo interno (difundir la existencia de la Coordinadora y extender su construcción); el organizativo externo (condicionar a la CGT y luchar por la recuperación sindical) y el político-democrático (poniendo límite al decisionismo del Poder

⁵³Ibid.

Ejecutivo [“decretazo”], exigiendo la democracia sindical y la libertad de todos los presos políticos, a esa altura, cercanos a los dos millares en todo el país).

De esta manera se demostraba su intención de escalar de manera gradual sus medidas, marcando a fuego a los que se interponían y obstaculizaban la movilización obrera y al mismo tiempo promoviendo su desplazamiento valiéndose de la misma movilización. Estas prácticas vienen a dejar sin fundamento alguna de las críticas que se formularon al activismo de izquierda con posterioridad, en el sentido de no haber adecuado su accionar al nivel de discusión y conciencia de las masas obreras⁵⁴. En la discusión del Plenario resurgió la discusión nunca saldada acerca de cómo reaccionar ante la posible manipulación de sus consignas de lucha por parte de la cúpula sindical. En ese caso se afirmó “...no nos íbamos a oponer [que levantaran las mismas] pero alertamos: *No íbamos a ser instrumento de la ambición de nadie*”⁵⁵.

En Zona Norte, entre el sábado 28 y el mismo lunes 30 de junio se sucedieron distintas reuniones del activismo, en las que los participantes del Primer Plenario de la Coordinadora Regional Buenos Aires, actuaron a la vez como miembros informantes de la misma y organizadores de los seis primeros puntos del Plan de Lucha. Precisamente esos puntos cumplían un papel multiplicador del clima de movilización en curso, al proponer una estrategia no sólo agitativa sino también de acciones concretas.

La mañana del 30 se concretó un encuentro con representantes de más de 60 establecimientos de la zona, para trazar un balance de los sucesos de los últimos días. Allí, se llegó por unanimidad, al acuerdo de marchar sobre el edificio central de la CGT en Capital Federal. Esta decisión vino a ratificar la necesidad imperiosa de organizar de manera definitiva la Coordinadora Norte. Cuando delegaciones de activistas comenzaron a recorrer fábricas -entregando volantes e invitando a los trabajadores a sumarse a dicha marcha-, se encontraron que en todas ellas la inactividad era total. Los contingentes obreros habían procedido a tomar virtualmente los establecimientos y en muchos casos esperaban ordenadamente para iniciar la marcha hacia la CGT. De esta manera empieza a escribirse y no sólo en nuestra área de estudio, la historia de la primera actividad de masas de las Coordinadoras Interfabriles metropolitanas.

⁵⁴Abós (1986).

⁵⁵BCoord, n° 2, op. cit. El destacado es del original.

Hacia las 11 de la mañana y luego que concluyera la recorrida por las principales plantas de la zona, comenzó a formarse una columna de colectivos, muchos de ellos requisados por piquetes y otros directamente manejados por sus conductores que participaban de la demostración⁵⁶. La marcha partió desde el extremo norte de la ruta Panamericana, en las cercanías de la localidad de General Pacheco. La caravana estaba formada por más de 70 colectivos, ómnibus y camiones, ocupados por contingentes obreros de la Ford, Alba, Siemens, Tensa, Cartonex, Productex, Lozadur, Coca-Cola, Editorial Abril, La Hidrófila, Paty, Del Carlo, Fundiciones Santini y los astilleros de San Fernando y Tigre. Al llegar a la avenida General Paz, un cordón de efectivos de la Policía Federal con cascos, armas largas, tanquetas antidisturbios y patrulleros procedió a detener a la columna obrera, que ya a esta altura sumaba cerca de 5.000 manifestantes. No obstante, la policía (luego de hacer un control de armas) accedió a franquear el paso a la columna.

Pasado el mediodía, los periodistas apostados en las inmediaciones pudieron conocer la formación de una comisión integrada por un delegado de cada una de las empresas presentes en el acto. Esta comisión tenía como objetivo entrevistar a la directiva de la CGT. Según declararon, su intención era *“reclamarles que asuman la lucha que los trabajadores estamos dispuestos a sostener hasta las últimas consecuencias”*. Este propósito quedó finalmente frustrado, ya que en el edificio se informó que todos los dirigentes habían concurrido a una reunión con la cúpula de las *“62 Organizaciones”*. Cuando trascendió este hecho por altoparlantes, la multitud reunida comenzó a gritar: *“siempre lo mismo”* y *“que se vayan”*, críticas claramente destinadas a la dirigencia gremial. Al caer la tarde se dio a conocer una declaración conjunta firmada por el Consejo Directivo de la CGT y de las *“62 Organizaciones”* en la que se llamaba a los trabajadores *“a mantener la calma”* y no prestarse a *“maniobras confusionistas”*, siendo una vez más, objeto del repudio de los manifestantes. Más tarde, procedieron a hablar con los precarios medios que contaban, dos delegados obreros. Uno del personal de Propulsora Siderúrgica (La Plata) y otro del astillero Astarsa. Ambos, en vista de lo avanzada de la jornada, invitaron a desconcentrarse a los concurrentes para no desgastarse y continuar organizándose⁵⁷.

⁵⁶LR, 30/6/75; LP, LO, LN y ECC, todos ellos del 1/7/75. BCC, julio de 1975; el testimonio de “Oscar” (2000), páginas 439 a 442. También, “Petiso” (2003), Cristina (2002/3), Gastón (2002) y Frigoli (2003).

⁵⁷LP, 1/7/75. Los destacados son nuestros. El delegado de Propulsora Siderúrgica, al que se refiere la crónica era el activista político-sindical Daniel De Santis, del PRT.

El balance de la jornada del lunes 30 de junio, tomada en su recorte meramente metropolitano (ya que en magnitudes igualmente significativas se expresó la movilización obrera en el Gran Córdoba y el Litoral), arroja una comprobación poco tenida en cuenta hasta nuestros días en términos analíticos. En primer lugar, la dirección nacional de la CGT se había replegado de la escena, abandonando simbólicamente hasta su edificio en la Capital Federal, a pocas cuadras de Casa de Gobierno. Su comunicación con las bases obreras se limitaba a una exhortación para que esperaran con confianza, llamándolas a no alinearse detrás de las direcciones alternativas y de izquierda. Había perdido por completo la iniciativa, y dependía como nunca del reconocimiento del gobierno peronista que le siguiera adjudicando su rol de vocero de los trabajadores. Ante ese gobierno, y con reserva, sólo le quedaba como carta de negociación la amenaza del abismo que se abriría si quedaran al frente de la protesta obrera los sectores clasistas.

La movilización del 30 de junio, es en nuestra perspectiva, mucho más importante que la del 27 y probablemente sólo menor que la frustrada ofensiva obrera sobre Capital Federal, dirigida por las Coordinadoras, del 3 de julio. Desnudó, en su simplicidad, el grado de deterioro del sistema político-institucional en nuestro país y cuán cerca se estaba del advenimiento de una situación revolucionaria. Esta última opinión, tomando como referencia el sentido leninista que se le adjudicaba a la categoría *“situación revolucionaria”*, era sostenida abiertamente por una de las principales fuerzas de izquierda actuantes en todo el proceso, PO⁵⁸.

Cuantitativamente se trató de una demostración protagonizada por un par de decenas de miles de trabajadores. No obstante su número (que pudiera parecer exiguuo), éste se veía cualitativamente compensado por la fracción obrera que representaba: la surgida en el corazón fabril del capitalismo argentino. Su decisión se asentaba en la práctica de agitación y organización de incontables núcleos de activistas de izquierda. El estado de ebullición de los contingentes obreros derivó en un proceso asambleario masivo y simultáneo, imponiéndose el abandono de tareas, luego de haber ocupado de manera transitoria las fábricas. Los métodos que se pusieron en marcha marcaban también una profundización de las prácticas hasta ese momento corrientes: generalización de piquetes,

De Santis (2005), página 149. El del astillero Astarsa, sería un cuadro de la agrupación *“José María Alessio”* (JTP-Montoneros), que conducía la Comisión Interna.

⁵⁸PO, 4/7/75. También otras organizaciones de izquierda coincidían con este diagnóstico.

enlace entre establecimientos, requisita de vehículos y la marcha en columnas organizadas con preparación de autodefensa.

El clima de conmoción social que recorría el país, del cual los hechos aquí narrados son sólo una confirmación, despertaban asimismo la preocupación en otros factores de poder. Esto se reflejaba en notas periodísticas aparecidas esos días. Así, se hacía saber que “los tres comandantes [de las Fuerzas Armadas] tienen noticias coincidentes brindadas por los respectivos servicios de información, en el sentido que las movilizaciones obreras que se produjeron en las principales ciudades y zonas fabriles del país denotaron una fuerte y creciente influencia de sectores ultra de la izquierda. Obviamente esta tendencia produce una gran preocupación en las tres fuerzas”⁵⁹. A su vez, uno de los principales voceros de la gran burguesía señalaba su inquietud en la editorial del 30 de junio: “Los dirigentes [de la cúpula sindical] deben precaverse de un peligro inminente: el avance de la izquierda subversiva que puede aprovechar el descontento de los trabajadores”⁶⁰.

En la Zona Norte del Gran Buenos Aires, desde el 30 de junio hasta el 3 de julio, se sucedieron días de intenso trabajo para el activismo político-sindical de izquierda. En las plantas metalúrgicas, textiles, gráficas, ceramistas, papeleras y en los astilleros se generalizó el cese de tareas. Acompañando este proceso de paro “no declarado” en las plantas y el estado de asamblea permanente, se multiplicaron las tareas de enlace. Esta función fue ahora abiertamente asumida por la Coordinadora Interfabril del área. Las fábricas referentes en Zona Norte como Del Carlo, funcionaban prácticamente como un centro de organización y difusión de las tareas agitativas de cara a una nueva y masiva movilización hacia el centro de la Capital Federal⁶¹. En una de estas recorridas, un delegado paritario de la automotriz Ford, activista de izquierda, fue sorprendido por un grupo de matones del SMATA, que intentó secuestrarlo cuando se dirigía a participar en una asamblea obrera en la planta de la General Motors del partido de San Martín. En esas circunstancias, un grupo de operarios de la automotriz salió en su ayuda, poniendo en fuga a los agresores. Además, en repudio a la agresión, la asamblea decidió paralizar las tareas hasta el turno noche⁶².

El miércoles 2 de julio, la Coordinadora Interfabril de Zona Norte procedió a repartir un volante en todo el área industrial y las barriadas

⁵⁹LO, 1/7/76.

⁶⁰LN, 30/6/75.

⁶¹Testimonio de “Oscar”, op. cit., páginas 441 a 442. BCC, julio de 1975.

⁶²“Petiso” (2003); LP, 2/7/75.

obreras convocando a una gran marcha sobre la Capital Federal con la intención de concentrarse, esta vez en Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno Nacional. La protesta ascendía desde un escalón estrictamente económico a uno político: vista la inacción de la dirigencia nacional de la CGT (en una cada vez más abierta complicidad con el gobierno) se pasaba ahora a reclamar directamente al propio Estado. Las reivindicaciones consistían en la homologación de los convenios paritarios, la anulación del “Plan Rodrigo” y la remoción de varios ministros del gabinete nacional. Esta iniciativa no se circunscribió a la Zona Norte, ya que las Coordinadoras Oeste, Sur, Capital Federal y La Plata, procedían por esos días a organizar simultáneamente una marcha convergente sobre el corazón político y económico de la Argentina, en la primera manifestación multitudinaria conducida por el activismo político-sindical de izquierda, a escala metropolitana⁶³.

Ante el panorama que presentaba no sólo la región metropolitana sino todo el país, el gobierno nacional montó un gigantesco despliegue represivo con fuerzas de la Policía Federal, que pasaron a custodiar los más importantes edificios públicos y plazas y acordonó el perímetro de la Capital Federal, ocupando los puentes y avenidas principales que la conectaban con los partidos suburbanos para impedir el desplazamiento de manifestantes. También, a través de la Secretaría de Prensa y Difusión, la presidente de la Nación exhortaba a “a los trabajadores para que no abandonen sus ocupaciones, por los considerables perjuicios que su actitud ocasiona a la economía del país”. La Subsecretaría de Seguridad Interior, por su parte, advertía que “se encuentran en plena vigencia las disposiciones de la Ley de Seguridad y del decreto que establece el Estado de Sitio. Por lo tanto, no se permitirán concentraciones ni manifestaciones o actos en lugares públicos.”⁶⁴

En la mañana del jueves 3 de julio, en el paralizado cordón fabril de Zona Norte comenzaban a observarse los aprestos de importantes contingentes obreros preparados para marchar⁶⁵. En las fábricas más importantes ya se había previsto la movilidad, consistente en colectivos y micros de empresas locales manejados por sus propios conductores,

⁶³BCC, julio de 1975.

⁶⁴UH, 3/7/75.

⁶⁵UH, Cla, LN, LP, LO, ECC, todos del 4/7/75 y LR, 3/7/75. “Petiso” (2003), Rufina (2002) y Cristina (2002/3).

quienes estaban desde varias semanas atrás participando también de medidas de lucha⁶⁶.

Un elemento común en todos los contingentes obreros fue la discusión y toma de decisión en asamblea acerca de cómo intervenir. Este método marca una diferencia sustancial con la organización impuesta por las dirigencias burocráticas, que restaban iniciativa y protagonismo a los propios trabajadores, convirtiendo a las demostraciones obreras (aún las de protesta) en un pacífico desfile de operarios. A media mañana, en la Plaza del Canal San Fernando, se concentraron los trabajadores de los astilleros de Tigre y San Fernando, como así también de otras empresas de la zona como madereras y metalúrgicas. Acudieron también algunas maestras de escuelas de la zona, acompañadas por madres y alumnos. Esta composición “familiar” es un dato que permite comprender la decisión de no llegar al enfrentamiento en el momento en que la marcha se viese detenida al momento de ingresar a la Capital Federal. En los laboratorios Squibb de Martínez, donde su cuerpo de delegados y comisión interna respondía a fuerzas de izquierda (centralmente a la JTP y en segundo término a OCPO), la asamblea de obreros y empleados decidió que en caso de una intransigencia de las autoridades, se replegarían para evitar un choque directo. Esta resolución, tomada como compromiso por la conducción obrera de este establecimiento, será cumplida y respetada aun por los miembros más radicalizados.

En la automotriz Ford de General Pacheco, el complejo fabril más importante de la zona, el grueso de los trabajadores venía sosteniendo una puja contra los miembros del cuerpo de delegados y comisión interna alineados con la conducción nacional del SMATA. Los delegados oficialistas, demostrando cuán fluida era la situación en fábrica, dudaban respecto a la actitud a seguir: no sólo estaba en juego su propio prestigio y credibilidad si se oponían a participar de las acciones de protesta. Se replanteaban también hasta qué punto no tendrían razón los militantes de izquierda que los cuestionaban y por su situación objetiva se sentían

⁶⁶Esta participación organizada de los conductores de medios públicos de transporte, por su magnitud, fue uno de los rasgos más destacados del proceso de movilización de los trabajadores de 1975. Prueba de ello es la conformación de la Coordinadora Interlíneas de Subtes “5 de Abril”, que luego incluiría Cuerpos de Delegados de líneas de colectivos en Capital Federal, por fuera de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). También se constituyeron Coordinadoras de conductores de colectivos de Zona Norte, Oeste, Sur, Capital Federal y la Plata (*BCoord*, n° 2, op. cit.)

atraídos por el campo de fuerza de la radicalización obrera⁶⁷. La posición que se iba imponiendo en la fábrica era la de llegar “como sea” hasta frente mismo de la Casa de Gobierno. Esta postura, compartida por una parte importante de los trabajadores, era impulsada principalmente por el núcleo de activistas del PRT, quienes habían ganado en las últimas semanas protagonismo por la intensa actividad desplegada. Este núcleo, a instancias de su dirección partidaria, se preparó para enfrentarse a la muy probable represión policial. La preparación de lo que solía denominarse “autodefensa” (hondas, bulones y recortes de chapa, clavos “miguelito” y hasta bombas incendiarias) era una práctica relativamente común en las manifestaciones obreras en la década de 1970, impulsada sobre todo por las organizaciones de izquierda más radicalizadas⁶⁸. No obstante, el activismo no hacía uso de estos medios salvo en situaciones extremas, prefiriendo, en las acciones de masas, imponer la presencia de los numerosos trabajadores movilizados. De todas formas, en el episodio que narramos las dos organizaciones político-militares más importantes (el PRT-ERP y Montoneros) destinaron sendas escuadras que acompañaron a distancia el desplazamiento de la columna obrera, dispuestas a intervenir de ser necesario. Esta presencia en la marcha, que no implicaba desplegar pancartas identificatorias, se hizo sentir a través de “pintadas” en los puentes y paredones de la ruta y la distribución de volantes de ambas organizaciones al paso de la marcha, tal cual registran los medios periodísticos de la época.

A todo esto y para tratar de descomprimir el clima de protesta, la Secretaría de Prensa de la CGT nacional dio a conocer un comunicado

⁶⁷Esta disyuntiva política y moral puede ser ejemplificado con la suerte corrida por los delegados y miembros de la Comisión Directiva del establecimiento, cercanos o simpatizantes de la “Lista Verde” (que respondía a la conducción burocrática de José Rodríguez en el SMATA nacional). Los mismos participaron en distintos conflictos hasta las primeras semanas después del golpe de Estado 1976. Ante esto, la empresa los denunciará ante las fuerzas represivas y la totalidad de sus miembros será objeto de secuestro, integrando una parte la larga lista de trabajadores y activistas “detenidos-desaparecidos” de Zona Norte. Testimonio de Pedro Troiani en el Juicio por la Verdad, publicado en *Razón y Revolución*, n° 10, Bs. As., Primavera de 2002.

⁶⁸Sin embargo, no eran solamente los militantes de organizaciones armadas quienes recurrían a estas prácticas. Lo mismo sostenía el GOR y PO la proponía en plena huelga general ratificándola como estrategia durante su Primer Congreso Nacional. Ver *BCC*, diciembre de 1975. *PO*, 4/7/75; I° Congreso Nacional del PO, Documento político de base, publicado en *RPO*, n° 1, enero-febrero de 1976, páginas 33 a 36.

público, exhortando “a todos los compañeros trabajadores a mantenerse férreamente unidos, solidarios y disciplinados a sus legítimos organismos de conducción gremial y no dejarse utilizar por elementos que aprovechando la difícil situación por la que atraviesa el país quieren llevar a éste a una perturbación que impide resolver los grandes problemas”⁶⁹. Según versiones posteriores, la cúpula sindical negociaba con el gobierno un aumento de salarios inmediato por decreto del 50%, homologación de las paritarias a partir del mes de septiembre, aplicar las nuevas escalas salariales surgidas de las paritarias a partir de octubre y “donar” al Estado como esfuerzo obrero a la reconstrucción económica, la primera quincena de aumento⁷⁰.

A las 12, la columna obrera que venía marchando desde General Pacheco, engrosada por los contingentes obreros de Tigre, San Fernando, Beccar y San Isidro, arribó a la avenida Hipólito Yrigoyen y Panamericana. Algunas columnas menores habían sido ya obligadas a dispersarse antes de llegar al punto de encuentro por la policía bonaerense, a pesar de lo cual, aproximadamente 70 colectivos y ómnibus lograron llegar frente a la planta fabril de Fanacoa. Allí, mientras se desarrollaba una multitudinaria asamblea obrera que ratificaba la intención de continuar hasta Plaza de Mayo, un delegado de Matarazzo (improvisado vocero ante los medios), informaba que el propósito era reclamar la plena vigencia de las paritarias y “evitar que los dirigentes de la CGT firmen cualquier cosa”⁷¹. La concentración contaba con cerca de 10.000 obreros de empresas como Ford, astilleros de San Fernando y Tigre, Terrabussi, Matarazzo, laboratorios Squibb, Alba, Editorial Abril, Fanacoa, Carrocerías El Detalle, IBM y las principales metalúrgicas de la zona. Los manifestantes, luego de prender fuego una efigie que representaba al ministro López Rega, se pusieron nuevamente en movimiento, llegando hasta el borde mismo de la avenida General Paz. En ese lugar los esperaba un fuerte operativo de contención de la Policía Federal, que se extendía también en los demás puntos de ingreso a la Capital Federal. Llegado a este punto, se produjo el momento de máxima tensión con la columna de Zona Norte. A la cabeza de la movilización se encontraba el núcleo de activistas de la Ford, orientado mayoritariamente por el PRT, que pretendía forzar el paso alentado por el carácter combativo y multitudinario de la marcha. Sin embargo, otros grupos como el representado por la comisión interna de los laboratorios Squibb (con mayoría de la

⁶⁹Cla, 4/7/75.

⁷⁰PO, 11/7/75.

⁷¹Cla, 4/7/75.

JTP), se oponían a esa pretensión, debido a la composición de la marcha (muchas mujeres e inclusive niños), a la falta de una voluntad unánime de los manifestantes de llegar a esa instancia y la magnitud del operativo represivo.

Esta discusión pone en evidencia una vez más la heterogeneidad que presentaban los participantes de este proceso. En ese momento, los responsables políticos de Montoneros del ámbito sindical en Zona Norte discutían con sus propios militantes que conducían la Comisión Interna de Squibb, acerca de la actitud a seguir. Aparentemente, la dirección de la “Columna Norte” de Montoneros temía perder la iniciativa ante las posturas más radicalizadas que adoptaban los militantes del PRT. Finalmente, la situación se resolvió en una multitudinaria asamblea, donde se impuso la decisión de replegarse hacia Martínez y decidir también en asamblea, el curso a seguir.

Este hecho nos viene a demostrar como los grupos de militantes de izquierda podían analizar y procesar los datos objetivos que surgían del estado de disposición de los trabajadores, aun de aquellos más combativos. Esa capacidad surgía del contacto diario con el colectivo obrero y permitía que delegados y activistas de planta pudieran imponer sus puntos de vista a sus propias direcciones partidarias, a pesar de la tensión que generaban tales contradicciones al interior de las organizaciones políticas⁷². También es revelador de cómo los sectores más radicalizados aceptaban las decisiones adoptadas en ámbitos democráticos como las asambleas obreras, reflejo de un interesante proceso de maduración política de sus militantes.

La nueva asamblea multitudinaria que se realizó sobre la ruta Panamericana, cerca de las 18 horas, antes de la desconcentración votó mantener el estado organizativo que impuso la flamante Coordinadora Interfabril y así “conservar fuerzas y mantenerse frescos para la lucha de mañana, prosiguiendo con el paro general”⁷³. Parecidas circunstancias se repitieron contemporáneamente en otros puntos estratégicos de entrada a la Capital, protagonizados por columnas de las Coordinadoras Oeste (cerca de 10.000 trabajadores) y Sur (aproximadamente 5.000), quienes chocaron con la policía en las inmediaciones del Puente Pueyrredón al intentar ingresar a la ciudad de Buenos Aires. Un enfrentamiento violento se registraba, en tanto, en el centro de la ciudad de La

⁷²Cristina (2002/3) y “Petiso” (2003).

⁷³Intervención de un delegado anónimo, recogida por Cla, 4/7/75.

Plata cuando columnas obreras de los establecimientos de la zona se concentraron frente a la sede local de la CGT⁷⁴.

Antes estos hechos, la cúpula sindical en pleno (ahora con la presencia de Casildo Herrerías y Lorenzo Miguel, que debieron regresar con urgencia de Europa) se reunió en un Comité Central Confederal, junto con la máxima conducción de las “62 Organizaciones”, acordando endurecer sus posiciones frente a la intransigencia del gobierno⁷⁵. La declaración formal de un paro general para el lunes 7 y el martes 8 de julio marcaba las contradicciones en las que se debatía la cúpula gremial. Al convocar a la medida el viernes 4 por la noche, la CGT nacional declaraba que el mismo buscaba la homologación de los convenios paritarios y la rectificación de la política económica, haciendo una indirecta crítica a los sectores lopezreguistas. Sin embargo, sus vacilaciones quedaron expuestas al no exigir su remoción del gobierno. La salida de López Rega era, por el contrario, una de las dos reivindicaciones centrales que habían formulado los manifestantes en las calles y rutas el día anterior. La defensa del “gobierno de la compañera Isabel”, al cual se pretendía salvar de las críticas, demuestra una vez más el rol que jugaba en la oportunidad esa capa dirigencial burocrática dentro del movimiento obrero. Como admitían en privado esos dirigentes, ir un paso más allá implicaba resquebrajar el mecanismo estatal, en el cual los dirigentes gremiales jugaban el papel de disciplinadores de las masas obreras. La convocatoria y la misma medida era así tardía y limitada: dos días de cese de actividad sin concentraciones ni actos públicos. El paro se extendería hasta enlazar con el feriado nacional del 9 de julio. En total, incluyendo la pausa del fin de semana, cinco días de tregua, en los que se buscaba descomprimir la tensión social en aumento y lograr otros acuerdos institucionales dentro del Congreso Nacional, que cerraran la crisis política.

Haciendo un repaso de las acciones y declaraciones de los sectores empresarios, políticos y de la conducción de las Fuerzas Armadas, la

⁷⁴De Santis (2005), páginas 147 a 156. Allí se narran de manera completa los hechos en La Plata, contados por uno de sus protagonistas.

⁷⁵Un ejemplo es la declaración de un paro por tiempo indeterminado por parte de la CGT de Zona Norte de Buenos Aires (que abarcaba a 200.000 trabajadores de las distintas ramas de la zona), como apoyo a los reclamos de la CGT nacional. En el interior del país, las seccionales de la CGT habían tenido que recurrir a este tipo de pronunciamientos para no verse totalmente superadas por el movimiento huelguístico de hecho protagonizado por las bases.

izquierda elaboraba en forma contemporánea un cuadro de situación⁷⁶. Según éste, la gran burguesía (en sus expresiones corporativas y partidarias) y las Fuerzas Armadas habían optado (hasta ese momento) por tomar una actitud prescindente, jugando al desgaste del gobierno. Sin embargo, la dinámica impuesta por los trabajadores en las calles, reclamando el centro del escenario, alteraba por completo esos planes. De allí la necesidad de recomponer la legalidad formal puesta en riesgo por la intransigencia del personal político a cargo del Estado. La convocatoria al paro por parte de la CGT era también funcional a ese proyecto contrarrevolucionario: se intentaba demostrar que la dirigencia gremial seguía siendo sensible a las demandas de sus bases y era todavía el canal institucional más eficaz para encauzar los reclamos sectoriales. Las bases obreras que venían parando, ocupando fábricas y movilizándose desde varias semanas atrás (aún contra las exhortaciones de la cúpula sindical) “saludaron” esta tardía declaración, sintetizada en una frase ingeniosa que recorrió el país: “La CGT adhirió al paro”⁷⁷.

El martes 8, cuando se cumplían aproximadamente 36 horas de uno de los paros generales más masivos y contundentes de la historia argentina reciente, el Gobierno admitió tácitamente su derrota. Convocó a la máxima dirigencia de la CGT nacional y las “62 Organizaciones”, para informarles que admitía la homologación sin tope de las paritarias. Además prorrogaba hasta fines de julio el período de negociación para permitir reajustar aquellos convenios que habían quedado desactualizados ante la escalada imparable de los precios de bienes y servicios.

En materia política y para descomprimir la situación, María E. Martínez de Perón aceptó la sanción de una ley de Acefalía que impedía que un ministro quedase en línea sucesoria ante una eventual vacante en el Poder Ejecutivo Nacional. Esta última medida es indicativa del agravamiento de la crisis: se especulaba sobre la probable renuncia de la presidente. El Senado, en tanto, designó como presidente provisional al legislador Ítalo Luder, quien de acuerdo a la nueva ley se convertía en el primer reemplazante institucional en caso de una transitoria licencia de la presidente. Días más tarde se dio a conocer la noticia sobre la renuncia del gabinete de ministros en pleno, siendo aceptadas en primer término las dimisiones de Alberto Rocamora (Interior), Adolfo Sabino (Defensa, principal organizador del operativo represivo sobre Villa Constitución en el pasado mes de marzo), Antonio Benítez (Justicia) y el propio José

⁷⁶PO, 11/7/75. En este análisis coincidían todas las fuerzas de la izquierda con participación en las Coordinadoras.

⁷⁷Kandel y Monteverde (1976), página 77.

López Rega (Bienestar Social). Por fin, el 18 de julio presentó su renuncia el muy cuestionado Celestino Rodrigo (Economía), a quien se le aceptó la misma días después. Para completar el cuadro de relevos, producto de la crisis política y la Huelga general, el 23 de julio fue obligado a renunciar a su cargo de presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, el principal lugarteniente político de López Rega.

No resulta sencillo trazar un balance definitivo sobre la jornada del 3 de julio. De ninguna manera pretendemos afirmar que las consecuencias mencionadas más arriba fueron resultado de las acciones localizadas que narramos. Tampoco perdemos de vista el impacto que tuvo el proceso en tanto masividad, profundidad y simultaneidad en todo el país⁷⁸. Este carácter múltiple y complejo fue lo que le confirió una importancia mayor no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos, respecto a procesos similares anteriores.

En ese punto surge una de las cuestiones centrales que a nuestro juicio condiciona el análisis tradicional que se hace del proceso de la huelga general de junio-julio de 1975. La interpretación historiográfica hasta ahora más aceptada para explicar los hechos afirma que un movimiento de esa magnitud y extensión sólo pudo ser fruto de una planificación y conducción centralizada en el orden nacional. Al descartar la existencia de una dirección alternativa, se deduce que únicamente la dirigencia nacional de la CGT y de cada uno de los sindicatos podía impulsar y encaminar la acción obrera. Con una mirada cerradamente institucional, ciertas interpretaciones sostienen la premisa de que las negociaciones con el Estado y el capital recaen necesariamente, en las instituciones corporativas reconocidas (los sindicatos y la CGT)⁷⁹. Por lo tanto, señalan que los resultados del proceso fueron obtenidos exclusivamente por la gestión de las cúpulas gremiales. Inclusive, y aun admitiendo que tal intervención fue tardía, acreditan el rédito político a dicha dirigencia, ya que habría sabido aprovechar todo el esfuerzo y desgaste de los sectores sindicales combativos, hipótesis que ratificaría la impotencia de estos últimos. Llevado al extremo este razonamiento, se desvaloriza o se suprime así el papel jugado por cualquier instancia organizativa que actuara al margen del sistema institucional formal. Nuestra impresión en este punto es divergente: sin negar la intervención de la conducción burocrática, sostenemos que, centralmente, se estaba produciendo un singular proceso de conducción alternativa “de hecho” de las acciones

⁷⁸Torre (1983); Cotarelo y Fernández (1998); Werner y Aguirre (2007).

⁷⁹En esta perspectiva, excesivamente enfocada en sus manifestaciones superestructurales, coinciden Torre (1983) y Cotarelo y Fernández (1998).

obreras, encarnado en las Coordinadoras Interfabriles, con actuación y presencia hasta el golpe militar de 1976.

Desde el 3 al 10 de julio, en la Zona Norte se siguieron registrando distintos acontecimientos que ejemplifican el grado de movilización y organización que se estaban dando algunas de las fracciones más avanzadas de la clase trabajadora industrial. El viernes 4 de julio se realizó la primera reunión de lo que será la Mesa de Enlace de la Coordinadora Interfabril de la Zona Norte, con delegaciones de 50 establecimientos industriales, acordando organizarse en cuatro sub-zonas: San Martín; Florida (Vicente López); San Isidro y San Fernando, lo que finalmente será presentado formalmente cinco días más tarde⁸⁰. El lunes 7, mientras se cumplía el paro general, un conjunto de 500 trabajadores de los laboratorios Squibb (Martínez) procedió a tomar la planta, logrando que al día siguiente, la patronal accediese a todos los puntos reclamados: 100% de aumento, pago de todos los días de huelga y no tomar represalias con los organizadores de la misma. Esta modalidad, que profundizaba y superaba objetivamente los planes de la cúpula sindical, se repitió los días posteriores en otros establecimientos de la zona como las alimenticias Terrabussi, Matarazzo y Pradymar; la fábrica de pinturas Alba; la metalúrgica Tensa; el astillero Astarsa y posiblemente el más importante por su magnitud, en la Ford Motor en General Pacheco⁸¹.

En este último complejo fabril, la vanguardia obrera integrada por células de activistas de izquierda venía protagonizando con éxito una lucha en un doble frente simultáneo: frente a la patronal y a la dirección nacional del SMATA. Asimismo, la presencia del activismo estaba poniendo en jaque a los representantes del SMATA dentro del personal, a quienes les resultaba cada vez más difícil seguir contando con el respaldo de los trabajadores. En medio de la huelga general, la oposición antiburocrática impulsó la renovación del cuerpo de delegados, recurriendo a la asamblea. Se lograron imponer algunos nuevos miembros de ese cuerpo fabril, provocando la alarma de la dirección nacional del sindicato. El rechazo que la dirigencia nacional recibía en varias plantas automotrices motivó algunas acciones desesperadas contra la oposición, como la agresión sufrida por un delegado de izquierda en la puerta de la General

⁸⁰PO, 11/7/75. BCC, julio de 1975. Sobre la delimitación y extensión territorial no pudimos encontrar otras referencias. Es muy probable que San Martín se haya diluido por el Oeste, en la muy activa Coordinadora de dicha zona y por el Norte, en Vicente López. De igual manera, San Fernando y Tigre debieron quedar unidas en una única zona, por una muy lógica economía de recursos humanos y materiales.

⁸¹BCC, julio de 1975.

Motors, que ya narramos. A todo esto, el 10 de julio los militantes de izquierda impulsaron asambleas en los distintos turnos para evaluar y decidir sobre la nueva situación planteada con los anuncios gubernamentales. En ese marco, las distintas asambleas resolvieron convalidar la remoción de los delegados del SMATA, reemplazándolos por un comité de lucha. El objetivo era obtener un aumento del 100% para toda la escala salarial, un incremento de emergencia de las remuneraciones, el pago de los salarios caídos, y que no se cumpliera la controvertida donación de un día de salario mensual para reactivar la economía del país, propuesta por la CGT. Este “caso testigo”, de ser seguido en otras automotrices, abriría un nuevo escenario de conflicto masivo. La decisión de la asamblea obrera rompía objetivamente el intento de la patronal y del gobierno expresado en las paritarias y era más grave aún cuando se la acompañó con un paro de actividades que, con todo vigor, se reinició desde ese mismo día⁸².

La respuesta del frente gobierno-burocracia-empresa se expresó en una reunión a la que concurrieron el presidente de la Ford Motor Argentina, Juan M. Courad; el comisario Héctor García Rey (conocido como “el chacal” y denunciado como organizador de la Triple A por un integrante de ese grupo terrorista para-policial) en su condición de Subsecretario de Seguridad y José Rodríguez, secretario general del SMATA. Los asistentes a dicho encuentro acordaron declarar ilegal la huelga, proceder a despedir a más de 300 trabajadores (entre los que se destacaban los miembros más activos de la oposición antiburocrática) e instaurar un régimen de control policial al ingreso y dentro de la planta, lo que se transformó en parte del ensayo general de la ocupación por tropas del Ejército de la fábrica, a partir del 24 de marzo de 1976⁸³.

Asimismo, la empresa y el sindicato iniciaron una campaña de declaraciones para preparar a la opinión pública de cara a una ofensiva contra el activismo de izquierda. La Ford publicó una solicitada el día 13 de julio, en el que acusaba a “un pequeño grupo, que invocando la falta de acuerdo respecto al convenio de trabajo, incita y promueve las medidas de fuerza. Paros ilegales, abandono de trabajo y asambleas sin recaudos legales ni comunicación al sindicato, producción deficiente, indisciplina y amenazas (...) las medidas en consideración no pueden en manera alguna enmarcarse dentro del concepto del legítimo ejercicio del

⁸²BCC, agosto de 1975; PO, 25/7/75; EC, 30/7/75; AS, 19/7/75. Dentro de los periódicos comerciales, la cobertura más completa es la de LP, 15/7/75. “Petiso” (2003).

⁸³Ver el testimonio ya citado de Pedro Troiani (2002).

derecho de huelga al punto tal, que la propia entidad sindical que nuclea al personal en cuestión, no vacila en calificarlas de ilegales”.

Este último argumento pretendía justificar la declaración de ilegalidad de dichas medidas por resolución N° 32/75 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo. A su turno, en una solicitada publicada al día siguiente, el SMATA emitía su propia opinión en donde denunciaba a “los grupos minoritarios provocadores (...) que han llevado a los trabajadores a una huelga sin razón y fundada exclusivamente en los designios subversivos y golpistas de los agentes del caos y la anarquía”⁸⁴, reconociendo de manera explícita la tarea militante de los activistas político-sindicales que lideraban todo el proceso de lucha.

El día lunes 14 de julio, en medio de un importante despliegue policial, la empresa procedió a impedir la entrada de los trabajadores cesanteados. La vanguardia clasista que se expresaba a través de la acción de la recientemente creada Coordinadora Interfabril metropolitana, salió inmediatamente a denunciar la maniobra de la burocracia y la empresa, convocando el martes 15 de julio a un paro de 15 minutos por turno en todos los establecimientos de la zona en una destacable manifestación de solidaridad proletaria. Esta solidaridad activa sería de allí en más un rasgo característico de la Coordinadora, tanto metropolitana como de la Zona Norte. La cúpula del SMATA (encabezada por José Rodríguez) por medio de una declaración pública criticó la medida de solidaridad y puso en duda la representatividad del organismo convocante, al calificarlo como “seudo coordinadora”⁸⁵.

La efectividad de la acción combinada de la Ford y la burocracia implicó una paralización de la iniciativa obrera, marcado por un repliegue y una paulatina vuelta al trabajo. En términos organizativos, las cesantías de gran parte de los militantes de izquierda no pudo ser fácilmente remontado debido a la instalación del control represivo al interior de la planta. De todas maneras, el activismo que no fue detectado reinició medidas reivindicativas, pero en condiciones de semi-clandestinidad, manteniendo además presencia activa en la Coordinadora zonal y participando como “Comisión de Lucha” en el Segundo Plenario de

⁸⁴UH, 13 y 14/7/75. Los destacados son nuestros.

⁸⁵LR, 16 y 17/7/75. Rodríguez es el mismo dirigente que en la oportunidad de la intervención a la seccional Villa Constitución de la UOM, se jactó que el SMATA había solucionado de otra manera sus diferencias con el opositor líder cordobés René Salamanca: “a Salamanca no lo sacó la policía, lo echó el gremio”. ECC, 7/5/75. Una semblanza de Rodríguez y su actitud ante la oposición anti-burocrática entre 1975 y 1976 se puede consultar en nuestros artículos, Löbbe (2004 a y b).

la Coordinadora metropolitana, el 20 de julio de 1975. Las diferencias existentes entre las distintas fuerzas de izquierda se reflejaron de manera abierta o velada en los balances críticos, algunos de los cuales reprochaban al activismo de ese establecimiento (claramente al PRT) por no haberse sabido organizar adecuadamente o por radicalizar al extremo la protesta obrera⁸⁶.

El acontecimiento que acabamos de señalar marca el fin del envión más fuerte que el activismo de izquierda y los distintos contingentes obreros llevaron a cabo durante el primer semestre de 1975, en el área de nuestro estudio. Su resolución marca también la respuesta del frente burgués, que de allí en más escalaría en profundidad y violencia.

El Segundo Plenario de las "Coordinadoras Interfabriles" de Buenos Aires

El jueves 17 de julio se publicó en forma de solicitada el primer documento público de la Coordinadora metropolitana, bajo el título de "El triunfo de la movilización"⁸⁷. Se explicaba en el mismo que la Coordinadora fue creada para *"reunir el esfuerzo activo de cada compañero, de cada empresa, de cada zona industrial, para movilizarse en su conjunto"*. La mayor parte de la solicitada, estaba dedicada a denunciar la actitud de la cúpula burocrática de la CGT y sindicatos nacionales en el sentido de actuar como freno a los reclamos obreros. Luego justificaba la continuidad de la Coordinadora que no sólo servía para motorizar organizadamente a los trabajadores en esa coyuntura sino que se planteaba proyectarse al futuro. Esa proyección se concebía en torno a lo que definían como "bases (...) amplias y concisas: queremos defender y ampliar las conquistas del Movimiento Obrero en el camino definido por el pueblo el 11 de Marzo [de 1973]: optando por la Liberación en contra de la dependencia". A continuación pasaban a enumerar

"NUESTRA PROPUESTA DE LUCHA:

- 1) Pago de los salarios de los días de paro.
- 2) Un mínimo de 650.000 pesos para los docentes, estatales y otros gremios sumergidos.
- 3) Defensa del salario real mediante un estricto control popular de precios.
- 4) Rechazar el descuento inconsulto de un jornal por mes, en tanto va en beneficio de intereses ajenos al pueblo.
- 5) Rechazar todo tipo de descuento compulsivo.
- 6) Exigir la renuncia de los dirigentes gremiales que apoyaron el aumento por decreto.
- 7) Defensa de las estructuras gremiales y recuperación de los sindicatos y la CGT para los trabajadores.
- 8) Exigir la renuncia de los funcionarios responsables de la situación política y económica, y de quienes traicionaron el mandato de liberación, votado el 11 de marzo por el 80% de los argentinos y repudiados en el paro y las manifestaciones de los últimos días.
- 9) La libertad de los compañeros Ongaro, Piccinini, Collazo y demás presos gremiales, políticos y estudiantiles."

Para finalizar, convocaban a todos los organismos gremiales de masa que se identificaran con esa propuesta, sin distinciones políticas e ideológicas y con la sola condición de ser representativos y leales a los intereses de la clase trabajadora, al Segundo Plenario metropolitano a realizarse el domingo 20 de julio. Como dato significativo acotemos que dentro de la Mesa Provisoria Regional, que actuaría como ámbito de enlace y que firmaba esta declaración, figura el Cuerpo de Delegados del astillero Astarsa, orientado por la JTP.

Del análisis de este documento surgen algunas cuestiones que seguirán presentes a lo largo de toda la existencia práctica de la Coordinadora metropolitana y también por extensión de las Coordinadoras locales, como la de Zona Norte. En principio, no se define con claridad un eje político ante la coyuntura más allá de levantar el programa preelectoral del FreJuLi. A esa altura de los acontecimientos esto implicaba una clara ruptura con el curso seguido por el peronismo gobernante y daba cuenta de otras tres posibles razones: la necesidad de no excluir a priori a diferentes corrientes políticas e ideológicas enfrentadas objetivamente con la burocracia; la falta de una consigna que marcara una línea política precisa (carencia que poco más tarde reconocerían autocríticamente varias organizaciones de izquierda) y la imposibilidad de sintetizar más allá de la fórmula citada la disparidad de criterios que separaba a los destacamentos políticos con presencia en la Coordinadora.

Una segunda cuestión es el peso que se le concede a cada grupo de reivindicaciones dentro de la propuesta inmediata. Así, se puede apreciar que más de la mitad de los puntos era de carácter económico coyuntural, incluyendo en ellos la preocupación por los sectores más

⁸⁶BCC, agosto de 1975. En AS, 19/7/75, podemos leer fuertes cuestionamientos a los activistas "que actúan irreflexivamente". El PST venía sosteniendo una polémica con las organizaciones revolucionarias por sus acciones armadas y buscaba un acercamiento con sectores de la burocracia. En el número citado un reportaje a miembros de la derechista Juventud Sindical Peronista, que descalificaban como "ultras" a los activistas de la Ford. Una visión diferente es la que aporta PO, 25/7/75. También se refiere a los sucesos EC, 30/7/75.

⁸⁷UH, 17/7/75. Los destacados son del original.

retrasados salarialmente, la defensa de la capacidad adquisitiva obrera por el control popular de los precios y el rechazo a los descuentos que, como “contribución patriótica”, planteaba la cúpula sindical. Un segundo nivel es la defensa de las estructuras sindicales, para recuperarlas como instrumentos de lucha para los trabajadores, exigiendo la renuncia de los dirigentes conciliadores.

Finalmente, los dos últimos puntos están destinados a la cuestión estrictamente política. En el octavo ítem se exigía la renuncia de los funcionarios responsables de la situación política y económica y de aquellos que traicionaron el programa de marzo de 1973. Este reclamo buscaba concretar en una fórmula de compromiso no sólo el sentimiento generalizado de la mayoría de los trabajadores y otros sectores de la sociedad hacia el gobierno sino también la intención de las organizaciones de izquierda. La renuncia de todo el elenco gubernamental implicaba producir una crisis política dentro del sistema. La caída del gobierno de María E. Martínez de Perón podía abrir una etapa de democratización parcial a nivel nacional, en tanto se recurriera a instrumentos tales como elecciones generales o convocatoria a asamblea constituyente⁸⁸. La idea implícita era evitar una más profunda derechización del proceso político y al mismo tiempo, frenar el progresivo avance de las Fuerzas Armadas en responsabilidades de gobierno, como sucedía contemporáneamente en el Uruguay. En el mismo sentido iba el reclamo de libertad para todos los presos políticos; cuestionando toda la legislación represiva (por ejemplo, el Estado de Sitio) y se pretendía volver a fojas cero, es decir, mayo de 1973. Más allá de lo utópicas que pudieran parecer estas pretensiones, vienen a desmentir una visión esquemática muy difundida sobre la izquierda revolucionaria argentina de la década de 1970. A diferencia de lo que sostenían los partidos políticos tradicionales (muchos de los cuales abierta o tácitamente ya pensaban en el golpe militar), la respuesta a la crisis, aun confusa e insuficiente, que intentaba bosquejar la izquierda no era únicamente la vía armada.

⁸⁸Montoneros se inclinaba por la convocatoria a nuevas elecciones. El PRT, agregaba a esa propuesta, la convocatoria a Asamblea Constituyente soberana. El resto de la izquierda marxista (con matices) por un gobierno de transición: a cargo de algún legislador (OCPO), sindicalista (“senador obrero”, según el PST) o una CGT “condicionada” por la movilización de las bases obreras (PO). Sólo (y paradójicamente) el PCR y el PC se oponían a la caída del gobierno. El primero al denunciar esa pretensión como parte de una conspiración “pro-rusa”. El segundo, proponía mantener ese elenco gubernamental pero abriéndolo a una “amplia coalición democrática cívico-militar”.

El único y más significativo cambio entre la convocatoria al Primero y Segundo Plenario es la incorporación de la perspectiva político-institucional, lo que demuestra que en el seno de las fracciones de vanguardia del proletariado comenzaba a discutirse abiertamente la participación política independiente, marcando un punto de ruptura con la estrategia tradicionalmente reformista del peronismo. Esta tendencia no era fruto de la casualidad, teniendo en cuenta las fuerzas políticas de izquierda que actuaban dentro de las Coordinadoras y la gravedad de la crisis que se había abierto (sin terminar de resolverse) a partir de fines de junio. La propia realización de ese Segundo Plenario metropolitano marcaba indirectamente la discusión acerca del carácter y continuidad que debía tener la Coordinadora. En la invitación-convocatoria cursada a los obreros de las distintas fábricas⁸⁹, la Mesa Provisoria Regional sostenía que se trataba de un encuentro que pretendía mantener la acción organizativa de la Coordinadora, como instrumento de defensa de las estructuras sindicales existentes (a las que caracterizan como insuficientes) y recuperar los gremios y la CGT para los trabajadores. Se ratifica en ese sentido que no se intentaba convertir la Coordinadora en una dirección paralela, proponiendo como orden del día de la reunión un informe sobre lo hasta allí actuado, una discusión sobre la situación del movimiento obrero, un análisis de las paritarias y otro de tipo político-sindical, finalizando con un debate y resoluciones a tomar.

Este 2° Plenario metropolitano de la Coordinadora (realizado a menos de un mes del primero) daba cuenta del acelerado proceso de movilización social en la Argentina, en tanto similares experiencias organizativas se estaban registrando en el Gran Córdoba y el área del Litoral del Paraná.

El domingo 20 de julio en el Club Social Beccar, en la localidad de ese mismo nombre del Norte del Gran Buenos Aires, se reunieron cerca de 400 activistas político-sindicales, representando 116 comisiones internas, 11 sindicatos y seccionales y un número impreciso de militantes obreros, todos ellos de la Región Metropolitana (Capital Federal, Gran Buenos Aires Norte, Sur y Oeste), más algunos activistas invitados de Villa Constitución. La importancia de este Segundo Plenario se puede medir en la cobertura que del mismo hicieron las organizaciones políticas de izquierda, aunque lamentablemente muchos de esos materiales no se han conservado. De los consultados, la crónica y análisis más

⁸⁹Se trata de una hoja mimeografiada que lleva como encabezamiento el rótulo “MESA PROVISORIA REGIONAL” y más abajo una línea punteada para completar con los datos del establecimiento que se invitaba. 15/7/75.

completos surgen de tres de ellos⁹⁰: los de PO, del GOR y de un agrupamiento de lo que se conocía como “izquierda socialista”, conformado por Orientación Socialista, el Movimiento de Activistas Socialistas 29 de Mayo y Espartaco. Además de las publicaciones nombradas, la principal fuente de información es el propio *Boletín de la Coordinadora* del 22 de julio de 1975 (número 3).

Una de las cuestiones centrales a discutir en el Plenario era el sentido que debía tener a futuro la existencia de la Coordinadora Interfabril. Si, como se afirmaba, la Coordinadora no tenía que transformarse en una dirección sindical paralela, ¿cuál sería su rol y hasta donde debía avanzar en un objetivo enfrentamiento con la cúpula sindical ortodoxa? Esta no era una pregunta retórica, en tanto algunas fuerzas políticas habían apostado (y lo seguirían haciendo) por un acercamiento a sectores de la burocracia sindical, pensando que la nueva etapa abierta a partir de junio-julio permitía un giro “laborista” de aquellos sectores, en los que la izquierda jugaría un papel orientador. Por el contrario, quienes sostenían posturas más intransigentes se encontraban en figurillas a la hora de explicar cómo asumir de hecho la conducción de la movilización obrera sin arrogarse el título formal de dirección. Por otra parte, la propia dinámica de la coordinación inter-ramas por abajo rompía el molde tradicional y superestructural que la legalidad sindical imponía como modelo organizativo.

Una segunda cuestión estaba dada por la organización formal del nuevo espacio. Si se concebía a la Coordinadora como un foro de discusión o debate, el alcance de las participaciones sería sustancialmente distinto al que alcanzaría si se disponía a tomar resoluciones que comprometieran de manera vinculante a las representaciones obreras que integraran el organismo.

En tercer lugar, es el alcance que le asignaba cada organización política a la Coordinadora dentro de su estrategia. De la lectura de la prensa partidaria surge la existencia de una desconfianza mutua acerca del aprovechamiento o de la utilización de este organismo de coordinación sindical como “frente gremial de masas” subordinado a un partido específico. Esto abría lo que se denominaba “lucha tendencial”⁹¹, es decir el esfuerzo de cada organización para imponer su propia línea a la Coordinadora y, por añadidura, al conjunto de fuerzas actuantes dentro de ella.

⁹⁰Publicados, respectivamente en: PO, 25/7/75; BCC, agosto de 1975; MOS, agosto de 1975. También EO, julio de 1975 y AS, 24/7/75.

⁹¹Ver el testimonio “Oscar”, op. cit., páginas 443 y 444.

Otro punto era la caracterización de la clase obrera argentina en esos momentos, lo que condicionaba el rumbo a asumir. La pregunta implícita era: ¿la clase obrera seguía anclada en la estrategia reformista del peronismo ortodoxo, la estaba superando o ya había terminado por abandonar esa perspectiva? En cualquiera de las dos últimas posibilidades, ¿se trataba de una ruptura parcial o definitiva? ¿Abarcaba a una fracción avanzada o a toda la clase?

La discusión de fondo (aunque no asumida de manera abierta) era si la Coordinadora debía ser sólo la expresión organizada de la vanguardia obrera metropolitana o por el contrario de todo el conjunto. Estas disyuntivas y polémicas se presentaban también en otros núcleos industriales del Interior y eran producto del particular proceso de industrialización desigual y combinado que produjo una clase trabajadora de características heterogéneas.

En la invitación al Segundo Plenario metropolitano sus organizadores (concientes de la diversidad de criterios), trataron de compatibilizarlos sin desvirtuar el sentido que presidía la construcción de ese organismo coordinador. Así, en la convocatoria al encuentro se sostiene “que la difusión de esta invitación y el orden del día son para que en los establecimientos se discuta y profundicen los temas apuntados para que en las discusiones que se hagan en el plenario, las conclusiones sean el reflejo de lo propuesto por las bases. Por eso entendemos que es necesario que los delegados *asistan con mandato de asamblea*. Pueden concurrir observadores con voz pero sin voto”⁹².

En suma, se intentaba articular, de manera jerarquizada, tanto el mandato surgido del debate en la base de los establecimientos, como la presencia de activistas sin delegación explícita y aun observadores, con un criterio flexible. Salvo el señalamiento acerca de la necesidad de contar con el mandato de la fábrica, la invitación no define la metodología a seguir al momento de tener que adoptar resoluciones, lo que habla indirectamente de la ya señalada disparidad de opiniones entre las distintas organizaciones.

Las prevenciones que tenían algunas fuerzas políticas acerca del rumbo que podía seguir la Coordinadora, se reflejaba en las notas aparecidas en su prensa. Uno de estos ejemplos es el del GOR⁹³. En un artículo en el que se pasaba revista a los últimos acontecimientos y el surgimiento

⁹²“Invitación de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha”, 15 de julio de 1975. El subrayado es del original.

⁹³BCC, julio de 1975. Por las referencias, su publicación fue anterior al Segundo Plenario metropolitano.

de las Coordinadoras (zonales y metropolitana), establecían tres aspectos prioritarios a garantizar: la lucha contra el sectarismo (evitando el excesivo debate teórico); impedir la transformación del nuevo organismo en un mero instrumento de política partidaria y, finalmente, asegurar la democracia interna en su funcionamiento. Esta democracia se la concebía como una combinación de la participación amplia de los activistas pero en su calidad de representantes de sus compañeros y no en nombre de tendencias o grupos políticos. Así se garantizaría la más absoluta y rigurosa libertad de expresión, sin convertirlas en foros estrictamente partidarios: “Los militantes podrán llevar a ella [la Coordinadora] sus propuestas, pero a través de los delegados elegidos en cada lugar de trabajo, y en la medida en que sean aceptadas por el conjunto serán las propuestas de la base”⁹⁴.

El PST, también expresaba sus prevenciones. En este caso, la principal crítica era dirigida hacia los agrupamientos políticos con mayor influencia en las Coordinadoras, a los que genéricamente nombra como “ultraizquierda”. La crítica apuntaba a la orientación de la JTP y PRT de atacar centralmente a la dirigencia de la CGT, en lugar de intentar presionarla para que se pusiera al frente de los reclamos. Luego de analizar sendos programas de la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha de Córdoba (instancia de coordinación en aquella provincia) y de una Coordinadora de Quilmes (Zona Sur del Gran Buenos Aires), resaltaba la falta de condena explícita al grupo López Rega y el reclamo por su expulsión del gobierno. Según el PST, esta actitud colocaba a las direcciones de aquellos organismos “a la cola de la última retaguardia del movimiento obrero y popular que también grita las consignas contra el lopezreguismo. Así resta fuerzas haciéndole el juego al gobierno”⁹⁵. Estas críticas, en realidad, parecen tener origen en la disputa que se estaba registrando por la dirección del movimiento de lucha y la conducción de la vanguardia, en especial con la JTP-Montoneros. Se acusaba a este sector, claramente mayoritario en muchas de las jóvenes Coordinadoras, de despreciar la lucha política, limitándose a levantar consignas sindicales y económicas. En realidad, esas cuestionadas direcciones “ultras” (como insistían en calificarlas desde el PST) impulsaban la discusión en fábrica y el aval expresado con mandato de un programa a ser adoptado y promulgado por el Plenario del 20 de julio. En ese programa tentativo (expresado en la solicitada “El triunfo de la movilización”), se incluía una explícita exigencia de renuncia de todos los funcionarios del gobierno

⁹⁴Ibid. Los destacados son nuestros.

⁹⁵AS, 12/7/75.

responsables de la situación política y económica, como así también una firme voluntad de defensa y recuperación de los organismos gremiales, depurándolos de la dirigencia burocrática.

Para analizar el desarrollo del Segundo Plenario, además de los materiales partidarios ya citados, pudimos recabar los testimonios de dos participantes directos, que aportaron su recuerdo sobre el mismo. Si bien esos testimonios adolecen de cierta imprecisión motivada por la distancia temporal de los sucesos, siguen siendo valiosos ya que confirman algunas de las crónicas del encuentro publicadas en la prensa partidaria⁹⁶. El primer elemento muy significativo es la alta participación de delegaciones obreras de Zona Norte⁹⁷. Además en términos cualitativos, esas delegaciones lo hacían en su condición de Comisiones Internas, en algunos casos, de composición plural por formar parte de las mismas distintas corrientes políticas. Vale aclarar que la lista de asistentes publicada en el tercer número del *Boletín de la Coordinadora* nos parece incompleta, a la luz de otros testimonios indirectos acerca de la participación de otras delegaciones de fábricas no citadas en dicha publicación. Entre las más destacadas (y hasta aquí confirmadas) se incluye a: comisiones internas de Del Carlo (metalúrgicos); Productex (textiles); Editorial Abril (gráficas), Miluz (pinturas); Astarsa (navales); Packard (papeleros); Avon (perfumistas) y Comité de Lucha de Ford (mecánicos, en pleno conflicto por la reincorporación de más de dos centenares de cesanteados). En cuanto al rubro sindicatos, seccionales y gremios, resalta el Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, único organismo de ese nivel e importancia en materia fabril, ya que también participaban otras estructuras pero del sector servicios, como médicos, enfermeros, periodistas, bancarios, docentes y mercantiles, todos ellos de otras zonas del ámbito metropolitano. Una mención especial es el denominado Congreso de Delegados del Sindicato de Obreros de la Industria Naval de Zona Norte. Esta instancia organizativa (que se había constituido por fuera del SOIN) ejercía en la práctica la conducción del personal obrero de esa industria, luego

⁹⁶Cristina (2002/3) y Lucita (2003). La primera concurría en su condición de Secretaria General de la Comisión Interna de laboratorios Squibb, el segundo lo hacía como delegado ferroviario de la dependencia “Organismos Centrales” (Capital Federal) de esa empresa de transportes.

⁹⁷BCoord, n° 3, 22 de julio de 1975. Este número consta de sólo dos hojas, en las que además del listado de asistentes, se informa sobre el orden del día y se anuncia: “el programa elaborado por la Mesa Provisoria [órgano convocante], que fue aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular se le introdujeron modificaciones (...) será impreso y dado a conocer en forma masiva”.

del frustrado intento por parte de la agrupación de la JTP de recuperar en proceso electoral la conducción del gremio.

El desarrollo del Plenario se dividió en tres momentos: el primero dedicado a la intervención de las distintas delegaciones. Nos inclinamos a pensar que en esta instancia hicieron uso de la palabra sólo las delegaciones de los establecimientos más importantes y probablemente los responsables de alguna de las organizaciones políticas asistentes (aunque no se tratara de representantes con mandato de fábrica), habida cuenta que de lo contrario la extensión del encuentro hubiera insumido más de una jornada. El semanario de PO incluyó en su crónica fragmentos de las intervenciones de las delegaciones obreras de Zona Norte como las de la papelería Packard (en conflicto); laboratorio Squibb; Comité de Lucha de la Ford; las metalúrgicas Santini (no mencionada en el *Boletín* de la Coordinadora) y Del Carlo y la Intersindical de Editorial Abril (gráficos, periodistas y publicidad). De este último establecimiento se rescataba el discurso íntegro de dicha delegación, lo que indicaría que era la que expresaba la posición oficial de PO. Uno de los principales ejes del debate posterior fue el tema de la llamada “unidad nacional”, llevado como planteo por la JTP-Montoneros al encuentro, impulsando una suerte de Frente Popular. Esta pretensión, sumada a la de incluir dentro del programa de la Coordinadora una propuesta de créditos para las pequeñas y medianas empresas, fueron fuertemente resistidas.

En el segundo momento se abrió la discusión sobre las distintas posiciones y estrategias. Las diferencias emergentes se expresaron en la conformación de dos agrupamientos informales e inestables, en el interior de los cuales se presentaban distintos matices al momento de establecer la caracterización de la etapa, la política frente al gobierno, la CGT y las posibles alianzas sociales y partidarias.

El peronismo de izquierda (a través de su expresión sindical la JTP), habría conseguido nuclear a su alrededor a un minúsculo sector del trotskismo (el Partido Obrero Revolucionario Trotskista, PORT “posadista”) y a la incipiente OCPO. Sobre esta última organización cabe señalar que su coincidencia parece haber sido táctica, en el marco del encuentro, ya que en realidad se encontraba mucho más cercana al PRT⁹⁸.

Frente a este agrupamiento se encontraba otro integrado por PO, GOR, una parte de la “izquierda socialista” y presumiblemente también

⁹⁸La publicación de OCPO, por ejemplo, apoyaba el rechazo a la idea de subsidiar a la pequeña y mediana empresa. *EO*, julio de 1975.

por el PST⁹⁹. Respecto al PRT, no queda clara su posición en este plenario aunque puede ser que oscilara, según los puntos en debate, entre ambos bloques. El PC, por el contrario, parece que optó por dar la espalda a este encuentro o a lo sumo concurrió con delegaciones de no mucho peso¹⁰⁰.

Las orientaciones que se debatían parecen haber estado sujetas a múltiples realineamientos. En primer lugar, el contradictorio juego de atracción-repulsión entre organizaciones de acuerdo a variables tales como igual perspectiva ideológica, diferencias teóricas o coincidencias metodológicas, todo esto inmerso en un cuadro de fuerte competencia por hegemonizar el movimiento de masas. Por ejemplo, era clara la disputa al interior del espacio ocupado por las organizaciones trotskistas o filo-trotskistas. Algo similar ocurría con todas ellas y el PC, el maoísmo y las organizaciones guevaristas. Otra línea de conflicto se presentaba entre las vertientes de la izquierda marxista y la peronista. Por último, en términos de metodología, las organizaciones que practicaban la lucha armada se enfrentaban con aquellas que rechazaban ese camino, en sus distintas variantes insurreccionales.

Una segunda cuestión estaba íntimamente relacionada con la dinámica del proceso político. Cada organización política tenía elaborada una estrategia que contemplaba el corto, mediano y largo plazo, pero la velocidad e intensidad de los cambios a mediados del año 1975 obligaban a una readecuación casi semanal, cuando no diaria, en especial desde fines de junio. Como más tarde admitirán militantes político-sindicales con responsabilidades de conducción de organismos fabriles, no era extraño encontrarse con que su organización se quedaba “sin línea”, es decir sin una orientación que diera una respuesta adecuada a la coyuntura cambiante. En otros casos, esta incertidumbre se basaba en una formulación incorrecta de consignas, que debían ser modificadas sobre la marcha, ante el riesgo que una orientación equivocada generara confusión y desconcierto al interior del movimiento obrero. Por ejemplo, PO en una declaración publicada el 4 de julio había levantado

⁹⁹Ver la cobertura en *BCC*, agosto de 1975. *MOS*, agosto de 1975. *AS*, 24/7/75. En esta última crónica se confirma los alineamientos y las posiciones en debate. Igualmente, la entrevista con Lucita (2003).

¹⁰⁰Según la denuncia de PO y del GOR, el PC habría apostado por boicotear el Plenario con su inasistencia. Esta actitud, indicaría un giro a la derecha buscando un acercamiento con la dirigencia burocratizada de la CGT. Ver *PO*, 25/7/75; *BCC*, agosto de 1975. Según Lucita (2003), un pequeño contingente del PC durante las deliberaciones habría hecho causa común con el bloque liderado por la JTP.

como consigna “por un gobierno de la CGT”, si bien con la aclaración que aquella organización debía ser condicionada mediante la movilización obrera, estructurada y conducida por medio de un Congreso de Delegados con mandato de fábrica. Una postura similar era sostenida por el PST¹⁰¹. Apenas dos semanas más tarde, al hacer el balance del Plenario de la Coordinadora, PO reconocía abiertamente que esa consigna no tenía ya sentido. Al mismo tiempo, destacaba como un logro del Plenario, la reformulación que exigiera el rompimiento explícito de la CGT con el gobierno y todo recambio patronal y que por lo tanto, se debía “poner en primerísimo plano la lucha por una nueva dirección, auténtica, de la CGT, impulsando las coordinadoras interfabrilas, las agrupaciones clasistas, como base de la dirección alternativa”¹⁰². Si a fines de junio una consigna amplia (y como reconoce autocríticamente PO, en cierto modo abstracta) servía para acercar a dos organizaciones trotskistas, promediando julio una rectificación parcial de esa consigna por parte de una de las organizaciones producía un distanciamiento entre los dos grupos.

Un tercer factor que permitiría explicar lo fluida que pudo ser la situación en ese Plenario, en términos de discusión ideológica, lo constituye la actitud asumida por los delegados de fábrica y, al mismo tiempo, militantes políticos. Éstos se encontraban en una posición extremadamente delicada: su base de sustentación surgía del mandato de sus compañeros y en ese sentido no podían, por disciplina partidaria, acordar posiciones que implicaran un divorcio de la voluntad de los trabajadores de su establecimiento. Además, muchos de esos delegados-militantes estaban adoptando una creciente actitud crítica respecto a la orientación de su propia organización¹⁰³.

Si bien las distintas delegaciones obreras coincidían en su condena a la dirigencia burocrática de la CGT, sus diferencias aparecían respecto

¹⁰¹PO, 4/7/75; suplemento de AS, 30/6/75. La consigna concreta del PST era “¡Que el Parlamento elija a un senador gremial como vicepresidente!”

¹⁰²PO, 25/7/75. PO realizó una autocrítica profunda acerca de su caracterización de fines de junio de 1975 durante su Primer Congreso Nacional de mediados de diciembre de ese mismo año. “Resolución sobre la situación política”, publicada en la RPO, n° 1, enero-febrero de 1976. En rigor, de las dos organizaciones nombradas, el PST mantuvo hasta casi el golpe de Estado de marzo de 1976 la contradictoria y prácticamente insostenible posición de denunciar a la dirigencia burocrática de la CGT pero apostando a la posibilidad de “radicalizarla” hacia la izquierda.

¹⁰³Particularmente esta situación se presentaba con los militantes de la JTP. Cristina (2002/3), Benecio (2002). Para la OCPO, Castro (2002/3).

a la política de alianzas del movimiento obrero y la llamada “unidad nacional”. Respecto al gobierno, algunas planteaban “fuera la camarilla de López Rega”, mientras que otras consideraban que la responsabilidad era del elenco gubernamental en su conjunto y reclamaban la salida de la propia Presidenta. Por último, las coincidencias volvían a surgir al momento de pronunciarse acerca de la continuidad y profundización de la experiencia organizativa que venía recorriendo el movimiento de las Coordinadoras.

Estas cuestiones reflejaban la discusión política que atravesaba a la vanguardia obrera y revolucionaria en la Argentina, condicionando la visión de las organizaciones políticas y de sus militantes. Ese estado de discusión y disposición no era necesariamente compatible con la opinión y voluntad promedio del conjunto de la clase obrera, la que (luego del esfuerzo realizado en el período junio-julio), iniciaba un lento repliegue después de la obtención parcial de sus reivindicaciones¹⁰⁴. Lo acertado o no de las resoluciones cobraban en ese momento un valor más alto que las adoptadas en el plenario de 1974. La crisis económica había potenciado la crisis política y se estaba al borde de una situación revolucionaria, con un gobierno apenas sostenido por el resto de las instituciones del Estado burgués, en medio de una reconfiguración del propio bloque de poder.

Finalmente, la redacción del programa, ocupó la tercera y última parte del plenario. La gravedad de la hora y la falta de una fuerza política claramente hegemónica parecen haber sido las dos principales razones para que el encuentro aprobara un programa deliberadamente amplio. En defensa del carácter ambiguo de dicho Programa, todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo en que se avanzara de manera explícita, siempre y cuando fuera en el sentido que cada una consideraba apropiado, adelantando también su recelo (si no se cumplía la antedicha condición) por actitudes “sectarias”, “divisionistas” u “oportunistas”.

En suma, el salto cualitativo que este plenario expresa se puede medir en la voluntad de llevarlo a cabo en medio de una situación política donde el ala más reaccionaria del gobierno no había sido batida por completo, con un estado de sitio y una legislación represiva nunca antes vista. En tanto, la reunión de casi medio millar de los más destacados organizadores de la huelga general, está indicando el alto compromiso de los militantes político-sindicales.

Según nuestros registros, este fue el último gran plenario en donde pudieron confluír las direcciones y activistas de las principales fábricas

¹⁰⁴Lucita (2003).

y empresas del área metropolitana. A pesar del clima tumultuoso y de su heterogénea composición, ninguna organización denunció actitudes violentas o coercitivas. El mejor ejemplo de esa tensa convivencia sea el propio programa acordado, que como tal, debía ser ratificado por las bases de cada establecimiento. El mismo se basaba en cuatro núcleos temáticos: organizativo, reivindicativo gremial, económico y político¹⁰⁵. Creemos que el nivel organizativo es el que mejor expresa los avances y limitaciones de las discusiones existentes en ese aspecto y además esclarece lo que se iba a implementar a futuro en la materia:

“1) La Coordinadora está integrada por Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados, con mandato de sus bases. 2) La norma principal de funcionamiento es que todas las propuestas deben contar con la aprobación de las bases. 3) El mecanismo para tomar resoluciones es mediante el acuerdo por unanimidad. 4) La Coordinadora se estructura en zonas: Oeste, Norte, Sur y Capital Federal, con sub-zonas en cada una de ellas. 5) Propiciamos la formación de Coordinadoras por rama de producción, para unificar las propuestas de cada gremio. 6) Apoyar el accionar de todos los militantes y activistas del movimiento obrero en sus luchas reivindicativas y antiburocráticas, haciendo un llamado para que fortalezcan a la Coordinadora participando de sus organismos de masas. 7) Apoyar activa y solidariamente las luchas de los compañeros de Ford, UTA y docentes. 8) Propiciar la creación de una Coordinadora Nacional. 9) Tomar contacto con otras organizaciones populares, gremiales, políticas y estudiantiles para dar a conocer los objetivos de la Coordinadora.”

En el apartado reivindicativo gremial, se destacaba: el pago de salarios caídos, la reapertura de paritarias, la aplicación de ese mecanismo para los gremios estatales, el rechazo a los descuentos compulsivos y defensa de las estructuras gremiales. Además, se ampliaba el carácter antiburocrático: por la plena vigencia de la democracia sindical, con la devolución de los sindicatos y Comisiones Internas intervenidas; desconocimiento de las entidades fantasmas como la Unión Docentes Argentinos (UDA); la amnistía gremial y reincorporación inmediata de todos los cesantes por causas gremiales y/o políticas y la renuncia de los dirigentes gremiales que apoyaron el aumento por decreto. En materia económica, las propuestas estaban basadas en tres ejes principales: salario

¹⁰⁵MOS, n° 6, agosto de 1975. Véase el texto completo en el Anexo del presente libro.

y poder adquisitivo; intervención regulatoria del Estado y ruptura de los compromisos económicos con agentes multinacionales.

Respecto al primer eje, se llamaba al congelamiento de precios y tarifas que afectaban al consumo masivo, con control popular de precios y costos, mediante la intervención de las comisiones internas. A su vez, impulsar la aplicación plena de la ley de Salario, Mínimo, Vital y Móvil, con actualización automática del mismo de acuerdo a las variaciones del costo de vida. Acerca del rol del Estado, se proponía que ante la desocupación creciente, aquel interviniera en defensa de las fuentes de trabajo, aplicando un impuesto especial a las ganancias del gran capital industrial y terrateniente. Asimismo, la estatización y puesta en marcha bajo control obrero de la producción y la comercialización de las 170 empresas intervenidas por el Estado, ante el vaciamiento empresario. Finalmente, acerca del tercer eje, se planteaba la denuncia de deuda externa (contraída a espaldas del pueblo) y del convenio que favorecía ampliamente a las multinacionales automotrices.

En el rubro político, el debate parece haberse saldado, con una consigna explícita: “Renuncia de todo el gobierno, encabezado por Isabel Martínez, que traicionaron el mandato popular del 11 de Marzo”. Se reiteraba la exigencia de inmediata libertad de todos los presos gremiales, políticos y estudiantiles; la derogación del Estado de Sitio y el resto de la legislación represiva y antiobrera; la investigación de la “Triple A” y el castigo a sus integrantes; el pleno respeto a la soberanía popular y asegurar las libertades democráticas para todos los sectores populares.

Más allá de las evidentes diferencias de caracterización que este programa no podía resolver, se puede descubrir el intento de ir avanzando en un eje político, que giraba alrededor de la renuncia del gobierno y un proceso de democratización, que retornara la situación a mayo de 1973. De cumplirse este proceso, hubiese aportado una dosis de oxígeno al clima político, a esa altura asfixiado por la violencia paraestatal protegida y la directa intervención de las Fuerzas Armadas con una creciente responsabilidad “contrainsurgente”.

En términos organizativos, el primer elemento destacado es el criterio de representatividad, tanto en lo relativo a la integración de las delegaciones como al de las propuestas que se pusieran en consideración. Al exigir la expresa convalidación de las bases, se buscaba evitar el “manijeo” o imposición por parte de algunos activistas, de una pseudo delegación o voluntad de los trabajadores de un establecimiento. En un momento donde, al decir de una participante¹⁰⁶, “todo el mundo

¹⁰⁶Cristina (2002/3).

se conocía y conocía la realidad de cada lugar”, estas prevenciones, en tanto ratificación de dicha realidad, eran operativas. Las organizaciones más grandes las aceptaban, concientes y seguras de su peso en las fábricas y al mismo tiempo, controlaban que nadie se arrogara una representación inexistente. Los grupos políticos más chicos, además de sostener un principio doctrinario muy fuerte y tradicional (el “basismo” o la “voluntad de la Asamblea”) se aseguraban voz y voto, por parte de sus delegaciones realmente representativas, algo a lo que los opositores gremiales (tanto los más fuertes como los más débiles) no podían ni remotamente acceder dentro de los organismos burocratizados.

La segunda cuestión importante era el acuerdo por unanimidad, como criterio efectivo de toma de resoluciones. Este mecanismo era efectivo porque, por un lado, resolvía el dilema de cómo deberían contabilizarse los votos de delegaciones obreras tan heterogéneas en número. Por otro lado, permitía acercar posiciones sin riesgo de rupturas y posibles distanciamientos. En base al ya señalado conocimiento recíproco del grado de representatividad de cada fuerza, las posiciones mayoritarias se imponían por el peso propio que contaban detrás de cada delegación.

En principio, en cantidad y calidad de sus participantes, el encuentro se proyectaba como un fruto prometedor del proceso de movilización de junio-julio y de la recuperación exitosa de decenas de organismos de base fabril, a condición que se mantuviera también el clima de movilización obrera. En la medida que fuera expresión de las fracciones más avanzadas de la clase trabajadora, esta última condición se convertía en una muestra del grado de desarrollo de una conciencia socialista en sectores de la clase, pero también de lo incipiente y precario en términos de extensión cuantitativa. Sólo una visión muy aguda podía afirmar que las características del encuentro era un recorte muy acotado de la realidad, sobredimensionado por la militancia de izquierda. Por otra parte, las denuncias de manera intencionada acerca del grado de influencia del sindicalismo combativo, formuladas por la dirigencia gremial burocrática, el gobierno y la propia burguesía no hacían más que agigantar esa impresión.

*El balance de las fuerzas políticas de izquierda del Segundo
Plenario de las “Coordinadoras Interfabriles” de Buenos Aires*

El GOR, con fuerte presencia en la Coordinadora Oeste, en la nota dedicada al Plenario reconocía que dentro de la Mesa Provisoria convocante existía una clara hegemonía de la JTP, la que intentaba imponer su

línea política (el llamado a la “unidad nacional”) al Programa a debatir en el encuentro. Ese intento, sin embargo, pudo ser bloqueado por el resto de las organizaciones. Igualmente criticaban a esa organización la intención, al momento de historiar las luchas del movimiento obrero, de fijar como fecha iniciática el 17 de Octubre de 1945, subestimando todas las experiencias previas. También, al plantear como se debía luchar contra las “tendencias divisionistas”, criticaban al PC por su negativa a participar en las Coordinadoras con el pretexto que las mismas buscaban crear una CGT paralela. Otro cuestionamiento se dirigía a las dos organizaciones trotskistas más importantes: al PST, porque sin cuestionar a las Coordinadoras no les prestaban un apoyo decidido, y a PO, por intentar convertir el Plenario en una tribuna para exponer su línea partidaria. En este último caso, además denunciaban que en forma inmediatamente posterior al encuentro, intentaron crear Coordinadoras paralelas en Zona Norte, en una actitud divisionista. En síntesis, la Corriente Clasista (expresión sindical del GOR) reconocía la existencia de tres sectores dentro de la Coordinadora: los que compartían el criterio de la Mesa, los que intentaban convertir ese ámbito en un foro de discusión partidaria con una errónea posición sectaria y la de los sectores clasistas, que con posiciones unitarias y de clase intentaban elevar el contenido de la propuesta y fortalecer al organismo. En cuanto a las tareas prioritarias proponía dividir las en dos niveles: *por abajo*, garantizar el funcionamiento orgánico y permanente, con eje en las sub-zonas, articulando de manera fluida la relación con las bases de cada establecimiento, las direcciones zonales y la Mesa Regional. En tanto *por arriba*, la necesidad era consolidar la representación cuantitativa y cualitativa de la Mesa Regional. En ese punto, se debería asegurar la presencia de las distintas tendencias que se expresaron en el Plenario. Por Zona Norte, el GOR alentaba la incorporación a la conducción ejecutiva de la delegación de los laboratorios Squibb. En materia de acciones inmediatas, proponía que las resoluciones del Plenario sirvieran como eje de discusión en las zonas, impulsando asimismo la realización de un nuevo encuentro general. Sugería la creación de una comisión de solidaridad con los distintos conflictos, de un fondo de huelga y la implementación de un Boletín de Informaciones Obreras, de aparición regular para romper el silencio de prensa impuesto por el régimen. Finalmente, llamaba a poner en marcha un Plan de Acción urgente con una campaña de agitación. La misma debía desembocar en una movilización al Congreso Nacional, reclamando cinco puntos: contra los despidos y cesantías; por la reincorporación de los despedidos; contra los descuentos compulsivos; enfrentar el alza

del costo de la vida y exigir la libertad de todos los presos políticos, estudiantiles y gremiales¹⁰⁷.

El agrupamiento de la llamada “izquierda socialista” (Orientación Socialista, MAS 29 y Espartaco) también realizó en su publicación (*Manifiesto obrero por el socialismo*) un balance de la experiencia de las Coordinadoras. Luego de trazar una crónica del surgimiento de las Coordinadoras, el artículo planteaba como uno de los problemas centrales la necesidad de compatibilizar la discusión de carácter político dentro de dicho organismo, sin permitir que dicha discusión derivase en actitudes sectarias. Ese sectarismo impediría seguir avanzando en la organización, al poner por delante las intenciones hegemónicas de las fuerzas políticas, provocando una confusión en el interior de la clase obrera. A la hora de las críticas, cuestionaban en primer lugar a la JTP por proponer un programa que subordinaba las luchas a la dirección de un sector de la burguesía. También, el abandono de las tareas urgentes, en especial en las Coordinadoras Norte y Oeste, coincidiendo con el descenso relativo de las luchas obreras. La crítica siguiente se dirigía a los militantes y activistas obreros del PRT, quienes por su falta de “línea” no podían dar una respuesta política coherente, siendo su accionar en las Coordinadoras metropolitanas casi nulo. Igualmente duro era su cuestionamiento al PST y PO. Según la publicación analizada, la actitud de ambas organizaciones caía abiertamente en la provocación, al exigir por ejemplo, la subordinación de las Coordinadoras a las tácticas del “vandarismo”. Luego, por desaparecer para organizar núcleos paralelos, que objetivamente favorecían la división y, finalmente, por su “irrupción” en las asambleas zonales de las Coordinadoras, exigiendo puestos en las direcciones de las mismas. La propuesta de este agrupamiento era la de construir una Coordinadora Nacional de Lucha, como alternativa de dirección obrera frente al aparato burocrático y pro-burgués de la CGT. Alentaba, además, la formación de Comités de Lucha y de Coordinadoras que organizaran las demandas obreras en barrios y villas, de acuerdo a los distintos problemas sociales y políticos: control de precios, salud, vivienda, educación, autodefensa y represión del matonaje y los fascistas. Concluía rechazando cualquiera de las salidas políticas frente a la crisis del gobierno. Esa Coordinadora Nacional debía pronunciarse contra el gobierno y todo intento de recambio burgués (golpe militar u otra variante). Como eje central proponía la adopción de un Programa Obrero ante la crisis, enfrentando los despidos, la suba creciente de los

precios, la pérdida del valor del salario y en contra de la represión y a favor de la libertad de todos los presos políticos¹⁰⁸.

El PST venía antes del Plenario denunciando la acción de la “ultra” (JTP-Montoneros y PRT), por dirigir sus ataques a la burocracia sindical identificando mal el enemigo a enfrentar. Respecto al encuentro de Beccar, reiteró esas críticas, pero también introducía un elemento distinto, al considerar que luego de la retirada de López Rega se abría una nueva situación. Señalaba así la inconveniencia de salir a luchar de manera imprudente, lo que provocaría derrotas, poniendo como ejemplo la propuesta incorrecta de declarar una huelga en defensa de los despedidos de la Ford. Proponía evitar el vanguardismo que podía dejar aislado al organismo, ante la actitud reflexiva de la mayoría de los trabajadores y saludaba la decisión de no reemplazar la CGT con la Coordinadora. Los redactores del semanario del PST estimaban que los puntos prioritarios a encarar eran la defensa “contra los despidos, las suspensiones, los cierres de las fuentes de trabajo, la negativa patronal a pagar lo que fijan los convenios y todas las demás necesidades obreras”. Sin embargo, seguían sosteniendo “la exigencia permanente de que las direcciones burocráticas se pongan a la cabeza para contar con la cobertura de las organizaciones gremiales”¹⁰⁹.

La otra organización trotskista importante, PO, al referirse al encuentro, avanzaba en ciertas definiciones que más tarde replanteará en forma autocrítica. Por ejemplo, al afirmar que la Coordinadora ya presentaba características soviéticas, como un organismo netamente político de las masas sin distinción, si bien acordando que todavía era una expresión muy minoritaria. Su propuesta partía de no desconocer a los sindicatos y a la CGT sino combinar esas dos tareas: “Extenderse como órgano político de masas en cada zona, y formar tendencias internas por sindicato para disputar la dirección gremial”. Al igual que otras fuerzas, su principal crítica era dirigida contra la JTP por levantar un programa de coincidencia con sectores de la burguesía nacional, provocando una desviación de la Coordinadora de futuros choques y luchas. También denunciaba el boicot del PC a la Coordinadora, su no asistencia al Plenario y su acercamiento a los sectores de la burocracia sindical. PO estimaba negativa la poca atención concedida al proceso incipiente de cierre de empresas y despidos, al descartar en las resoluciones una vigorosa agitación que preparase las ocupaciones de fábricas de manera centralizada, como medida defensiva. Organizativamente, proponía constituir “comités unitarios”

¹⁰⁷BCC, agosto de 1975.

¹⁰⁸MOS, n° 6, agosto de 1975.

¹⁰⁹AS, 24/7/75.

en cada fábrica, los que debían actuar como célula básica, fijando un programa especial y adaptado al lugar; un plan de trabajo de crecimiento y asegurar también la edición de un boletín de propaganda fabril. A su turno, los responsables de cada comité se debían articular en una conducción ejecutiva a nivel zonal, otorgándole así mayor dinamismo y agilidad a las acciones de las Coordinadoras zonales. Se podría reemplazar de esta manera el funcionamiento en plenarios, que por la extrema rigidez que implicaba conciliar horarios y temas generales a tratar, retardaba la toma de decisiones y su eficacia operativa. Saludaba la convocatoria a una Conferencia Nacional (que debería realizarse en un plazo de 30 a 45 días) a la que deberían concurrir un delegado de cada comité. Este planteo estaba claramente relacionado con la consigna central de PO durante las jornadas de junio-julio: el Congreso de Delegados con mandato de Asamblea¹¹⁰.

Otra fuerza política que evaluó el resultado del Plenario de Beccar fue la OCPO. La publicación oficial del núcleo organizador (Poder Obrero, El Obrero, MIR), *El Obrero*, le dedicó una nota especial. Bajo el sugestivo título de “El despertar de un gigante”, se pasaba revista al movimiento de movilización obrera de junio-julio como principal antecedente a la formación de la Coordinadora metropolitana y su Plenario del 20 de julio. El artículo destacaba el nivel de discusión, proponiendo adoptar para el futuro un programa de reivindicaciones comunes a la clase obrera, quien debía acaudillar al resto de los sectores populares ante la evidente descomposición del gobierno peronista. La tarea prioritaria para ampliar su influencia a todo el país sería la constitución de una Mesa Nacional. Dicha Mesa debería impulsar un Congreso Obrero y Popular con todas las fuerzas políticas afines para definir un Programa de acción unitaria. Este análisis se complementaba con otra nota en la misma publicación donde se desarrollaba de manera pormenorizada la línea sindical de la organización, planteando una doble estrategia: no sólo desarrollar y fortalecer las coordinadoras sino también redoblar los esfuerzos para recuperar los sindicatos, con la movilización de las masas obreras. Consideraba el artículo que se debían propagandizar consignas políticas que apuntaran a la destitución de la presidente y la exigencia de elecciones, para que los organismos de masas no se quedaran sin un eje de orientación concreto cuando se produjera un nuevo auge. Este agrupamiento ratificaba el principalísimo papel que se le concedía a la Coordinadora como embrión de un movimiento más amplio, proponiéndola como organismo de conducción de tipo soviético, en

¹¹⁰PO, 25/7/75.

la concepción de “doble poder”. En ese sentido, y al igual que otras organizaciones de la izquierda revolucionaria, se pretendía extender la influencia de la organización fabril al ámbito territorial. Esta propuesta tomaba claramente como principal ejemplo la experiencia de Villa Constitución, en donde la OCPO codirigió junto al PRT el movimiento de lucha y movilización¹¹¹.

Respecto al PC, la lectura de su semanario partidario nos permite observar un súbito cambio de rumbo, promediando julio, justamente cuando estaban emergiendo las Coordinadoras bonaerenses. Hasta allí, brindaba cobertura a distintos conflictos, algunos de ellos muy importantes como los de Ford y Rigolleau, planteando veladas críticas a las conducciones oficiales de los gremios. Esta postura fue sostenida hasta mediados de julio, donde saludaban las movilizaciones obreras de comienzos de mes. Sin embargo, en el número del 16 de julio, bajo el sugerente título de “Unidad obrera para vencer”, pasa a describir de manera contemporizadora la actitud de la CGT y si bien reconoce que las coordinadoras (a la que un mes antes llamaba a formar) se presentaban como una propuesta novedosa, cuestionaba lo que podía ser su evolución futura. Así, criticaban “las ‘Coordinadoras’ por arriba, de tendencias, que desdibujan la representatividad real”. Postulaban como solución que en ellas “participen [sólo] delegados con mandato de los personales de cada empresa”, advirtiendo “en todo caso, el futuro de las Coordinadoras de fábrica dependerá también de la derrota de las posiciones sectarias que pretenden ver en aquellas a organizaciones paralelas y opuestas a los sindicatos y Cegetes, sólo que nuevas, incontaminadas, para la revolución”. A partir de allí, el PC ignorará hasta fines de 1975, al momento de hacer un balance del año en materia sindical, cualquier mención o referencia puntual a las Coordinadoras. A la vez, desarrolló un acercamiento muy evidente hacia las direcciones sindicales oficiales, lo que se refleja en las notas gremiales aparecidas en ese semanario. Esta última orientación se inscribe en el marco de su también explícita campaña en pos del “gabinete cívico-militar de amplia coalición democrática”, en la

¹¹¹EO, julio de 1975. En el Gran Buenos Aires, la experiencia más avanzada en ese sentido parece haber sido la del Barrio Las Antenas, barriada obrera y popular lindera con el Hospital Posadas y en las cercanías de grandes metalúrgicas del Oeste bonaerense. Esa zona, asiento de una importante Coordinadora, contaba con la presencia de una muy fuerte presencia de militantes de distintas fuerzas de izquierda. Pérez (2002). Otro modelo de organización territorial que se tomaba como ejemplo, en cuanto expresión del “poder popular”, eran los “cordones fabriles” chilenos anteriores a 1973. Véase Colom (1995).

que buscaba agrupar a la mayor cantidad de sectores para defender la institucionalidad¹¹².

De las dos organizaciones revolucionarias más importantes que desarrollaban la lucha armada (la JTP-Montoneros y el PRT), no hemos podido hasta el momento consultar materiales escritos específicos referidos al Segundo Plenario de la Coordinadora metropolitana. No obstante, de manera indirecta conseguimos algunas referencias que servirían para conocer el lugar que estas fuerzas políticas le concedían a las Coordinadoras.

El PRT venía sosteniendo por lo menos desde comienzos de 1974 la necesidad de coordinar las luchas dispersas y a tal fin había implementado el Movimiento Sindical de Base, que si bien no tenía mucho peso en Buenos Aires, conducía al más amplio Movimiento Sindical Combativo de Córdoba y a través de él, la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha. En la primera quincena de junio de 1975 adelantaba la posibilidad cercana de hacer converger los distintos conflictos en una serie de jornadas de movilización y lucha, alrededor de medidas económicas de emergencia, en repudio al Estado de Sitio y por las libertades democráticas. El principal problema era la falta de un organismo nacional que pudiera convocar y centralizar esas jornadas. Reconocía la existencia de distintas corrientes político-gremiales, dirigentes reconocidos, comisiones internas, cuerpos de delegados y agrupaciones de base, que podían impulsar y asumir las tareas organizativas necesarias, llamándolos a concretar una reunión nacional. En ella se debía elaborar un plan de lucha y resolver un paro nacional combativo. Según el testimonio de su máximo dirigente en la Mesa Sindical Nacional, al hablar de esa coordinación el PRT estaba pensando en la exitosa experiencia cordobesa o aun en la cercana de Villa Constitución, no pudiendo prever que esta consigna se hiciera realidad en el Gran Buenos Aires en junio-julio. Admite, sin embargo, que una vez iniciado el proceso el PRT se lanzó a militar con todo en esa dirección. En lo relativo a las Coordinadoras, en su semanario de la última semana de agosto, el PRT le dedica una parte sustancial de una nota titulada precisamente “Combinar y coordinar las luchas obreras y populares”. El artículo sostiene la necesidad de asegurar la obtención de las más urgentes y sentidas reivindicaciones obreras y al mismo tiempo encarar una resuelta y enérgica lucha por la vigencia de las libertades democráticas. Como ejemplo exitoso señala la experiencia de la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha de Córdoba, la forma que en esa provincia se manifestó la coordinación obrera. Esta tarea indispensable se hará “a partir de la creación de organismos de carácter

¹¹²NP, 16/7/75.

permanente –comités, asambleas populares, etc [que] encuentren marco propicio para su expresión y canalización hacia ejes concretos de movilización y lucha”. Luego de apuntar que experiencias similares se estaban desarrollando en forma embrionaria en Santa Fe y en Presidencia R. Sáenz Peña (Chaco), volvía su atención a la región metropolitana para destacar que “en Capital Federal y el Gran Buenos Aires existen coordinadoras intersindicales y barriales, cuya capacidad de convocatoria y movilización crece día a día”. Al analizar cual era el papel que deberían jugar dichos organismos, sostenía que el auge de masas y la profundidad de la crisis económica y política “ensanchan el horizonte de las luchas reivindicativas y democráticas del pueblo argentino, tornan posible la multiplicación de coordinadoras, comités y asambleas populares en los que el proletariado y el pueblo discutan con amplitud y profundidad sus más acuciantes problemas, acometan con iniciativa las soluciones justas, aúnen voluntades y sumen energías frente al enemigo común”. El artículo finaliza enumerando las reivindicaciones por las que luchar: “Salario justo, contra el hambre y la desocupación, por las libertades democráticas y el desmantelamiento de las bandas asesinas, por la libertad de los prisioneros políticos”¹¹³.

Respecto a la JTP-Montoneros, hemos podido localizar un largo artículo que caracteriza la coyuntura a mediados de julio de 1975 aparecido en la publicación *El Montonero*, firmado por la Conducción Nacional de Montoneros. En este caso los redactores de la nota se dedicaban a estudiar las circunstancias que llevaron al desemboque en las jornadas de junio-julio y la caída parcial del elenco gubernamental. Alertando sobre una maniobra de las fuerzas del Estado para retomar la iniciativa, proponían la urgente construcción de tres herramientas básicas: el Movimiento Peronista Auténtico (como núcleo del Movimiento de Liberación Nacional); el Frente de Liberación Nacional, más amplio por definición y espacio de acuerdos políticos con otras fuerzas; y, finalmente el Ejército Montonero. En esa estrategia, los objetivos se alcanzarían trabajando sobre cinco planos organizativos, el primero de los cuales sería la movilización de los trabajadores.

Luego de destacar las reivindicaciones prioritarias que deberían alcanzarse en forma sectorial (aumento de sueldo, negativa a los descuentos compulsivos impulsados por los sindicatos, exigencia de mantener

¹¹³EC, 11/6/75, en De Santis (2000), páginas 432 a 435. El dirigente de la Mesa Sindical es Luis Mattini. La referencia al escaso peso del MSB en Buenos Aires (salvo en La Plata donde era protagónico), en Pozzi (2001), página 369. El artículo donde se explicita la idea de la coordinación en EC, 27/8/75.

las fuentes de trabajo, libertad de todos los presos políticos y gremiales), señalaba la imperiosa necesidad de “pelear por la devolución de los Sindicatos intervenidos y el reconocimiento de nuestros delegados y comisiones internas”. Esta última actividad era concebida como parte de una estrategia más amplia en la que la clase trabajadora se constituyera en una pieza esencial para imponer el proyecto de liberación nacional que sostenía esa organización política. Todos esos objetivos, eran enmarcados en una tarea de mayor aliento: “La construcción de nuestras ‘Coordinadoras’ por fábrica y zona, a las que ahora debemos extender, en algunos casos a ‘Coordinadoras regionales’, mientras vamos preparando las condiciones para formar una ‘Coordinadora Nacional de Sindicatos, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados’. Dentro de estas agrupaciones debemos ir construyendo la agrupación del *Bloque Sindical del Peronismo Auténtico*, para garantizar la organización, presencia y en lo posible, hegemonía del peronismo dentro de las diferentes ‘coordinadoras’”¹¹⁴.

El lugar que la JTP-Montoneros le asignaban a las coordinadoras no era diferente al que las otras organizaciones le reconocían, es decir una herramienta fundamental de lucha de los trabajadores, en momentos en que resultaba casi imposible disponer de las instituciones tradicionales (sindicatos y CGT) y a las que se pretendía hegemonizar para asegurarse su conducción, como apéndice del Peronismo Auténtico.

Días más tarde, la propia CGT nacional presentó un proyecto económico social alternativo¹¹⁵, respondiendo tácitamente a los cuestionamientos que se le formulaban por su inacción durante junio y su tardía reacción en los primeros días de julio. Ese programa (sobre el cual no nos extenderemos) parecía querer retomar los postulados del FreJuLi de marzo de 1973. Descreemos de la sinceridad de esa declaración tardía, expresada por dirigencias gremiales que avalaron el “Pacto Social” y mantuvieron su adhesión al gobierno hasta que percibieron el incipiente e incontenible descontento de sus bases. No obstante, y como señalará una de las fuerzas actuantes¹¹⁶, sirvió de excusa para aquellos que buscaban un acercamiento con sectores de la burocracia sindical.

El riesgo que aparecía en el horizonte no era tanto despertar expectativas en un gobierno a esa altura totalmente desprestigiado, sino en el cambio de actitud de sus hasta ayer socios sindicales. Este programa de la CGT, amenazaba con dejar en la práctica sin argumentos a los

¹¹⁴El Montonero, 18/7/75. Citado en Baschetti (1999), páginas 516 y 517. Los destacados son del original.

¹¹⁵UH, 22/7/75.

¹¹⁶Primer Congreso Nacional de Política Obrera. RPO, n° 1, enero-febrero de 1976.

sectores de la oposición sindical. Inclusive a los ojos de las fracciones menos politizadas de la clase obrera, este “volver a las fuentes” de un peronismo distribucionista y populista, podía confundirse con el llamado a recuperar el programa de liberación votado el 11 de marzo, como la propia Coordinadora, con otra intencionalidad, reclamaba en su balance de las jornadas de junio-julio.

La tarea de la hora para las organizaciones de izquierda era desenmascarar las posiciones oportunistas de la dirigencia sindical nacional y combatir la mistificación que, sobre una (imposible) “vuelta al ‘73”, podían propagar otras fuerzas hasta ese momento participantes de la Coordinadora. Luego de la victoria parcial que había significado la lucha por las paritarias sin tope, la suspensión transitoria del programa de ajuste neoliberal salvaje de Rodrigo y la caída de los ministros más odiados del gabinete nacional, el nivel de movilización de las masas obreras había entrado en una fase de reflujo. Esta tendencia, observada por las propias organizaciones de izquierda, se veía ahora alimentada por el cambio de perfil que dificultosamente ensayaba la dirigencia co-responsable de la crisis económica.

Lo que estaba en juego era la propia continuidad de la Coordinadora y del movimiento sindical antiburocrático y combativo. Visto a la distancia, las maniobras para “volver al Pacto Social” de las capas dirigentes burocráticas dentro del movimiento obrero, no tenían margen de realización. La realidad y los planes de los sectores más concentrados de la burguesía imponían una dinámica que se encaminaba a un cambio de régimen, abriendo paso a la solución coercitiva extrema de la dictadura militar. Pero también porque quienes se habían postulado en marzo de 1973 como carta de recambio dentro del sistema, no estaban dispuestos a cumplir aquellas promesas. La pregunta era: ¿percibía la clase trabajadora con claridad esta doble determinación? Si lo hacía, ¿estaba en condiciones organizativas de enfrentarlas?

La consigna pues, era trabajar cada vez más intensamente en la base, es decir, las fábricas, para arrebatar una vez más la dirección de los contingentes obreros a la burocracia. Pero ahora (y debido a la experiencia acumulada y la gravedad de la coyuntura), no alcanzaba con liderar a los sectores más concientes y politizados, sino sobre todo al obrero medio, quien todavía podía cifrar expectativas en las conducciones del peronismo ortodoxo. Para esta doble tarea, la Coordinadora debería haber contado con un eje político claro, como reclamaba alguna de las fuerzas políticas participantes¹¹⁷, pero la propia juventud de los destacamentos

¹¹⁷PO, 25/7/75.

políticos de izquierda, su dispersión y debilidad, impedía dotar a ese organismo coordinador de la herramienta política-ideológica requerida.

Cuando todo parecía marcar el fin de la experiencia de las Coordinadoras, reapareció un elemento que serviría para poder garantizar la continuidad del movimiento en la zona metropolitana: la decisión política y el compromiso militante de cientos de activistas obreros, delegados y militantes para mantener en pie no sólo la organización fabril, sino también su coordinación zonal, a pesar de las dificultades que la nueva situación presentaba y sus propias indecisiones y desaciertos, compartidos asimismo con las organizaciones políticas donde militaban.

Hacia una nueva fase organizativa:

la organización zonal y el resurgir de la acción en las plantas

En la consideración general del proceso, algunos autores que se refieren a la experiencia protagonizada por las coordinadoras, plantean en forma coincidente lo tardío de su aparición. Para James (1999), esto sería resultado de la incapacidad de la izquierda (tanto peronista como marxista) para capitalizar la crisis del gobierno peronista a mediados de 1975. Pozzi y Schneider (2000), aunque menos terminantes, destacan el desfase entre el avance de la izquierda, el movimiento obrero (en reflujos) y el golpe militar en ciernes. Gillespie (1998), finalmente, afirma que las coordinadoras fueron una creación exclusiva de Montoneros, ante la imposibilidad de intervenir sobre la realidad política a mediados de 1975, símbolo de su aislamiento y, por extensión, de la impotencia de toda la izquierda revolucionaria. Al no estudiar en detalle los hechos protagonizados por las coordinadoras ni sus documentos, terminan concluyendo que como experiencia fue un intento fallido, sin posibilidad de trascender. Por nuestra parte, rechazamos esas conclusiones por esquemáticas. A diferencia de aquellos que, basados en las hasta ahora exiguas declaraciones y acciones posteriores relevadas, clausuran definitivamente esa experiencia después de las movilizaciones de junio-julio, nosotros nos inclinamos por una interpretación diferente. La dirección posterior que adquirió el movimiento sólo es apreciable en la medida que volvamos nuestra mirada al ámbito geográfico más acotado, es decir las zonas propiamente dichas.

La vuelta a la organización zonal después del 20 de julio parece ser fruto de una realidad que le imponía a las organizaciones de izquierda concentrar sus relativas fuerzas en aquellos lugares donde tenían

presencia más arraigada. Cualquiera sea la combinación de factores que dieron por resultado el cambio de orientación y mayor protagonismo de las coordinadoras zonales, lo cierto es que en el segundo semestre de 1975 y hasta el mismo golpe de Estado de 1976, la actividad organizativa y reivindicativa recayó centralmente en esos organismos, en tanto la Coordinadora Metropolitana mantuvo su existencia formal, pero claramente reducida a una referencia más superestructural. Su función parece haberse concentrado en canalizar las denuncias sobre conflictos puntuales o procesos más generales (como la creciente desocupación) y al mismo tiempo seguir impulsando la constitución de una Coordinadora Nacional.

Este desarrollo debía seguir un rumbo independiente en cada una de las cuatro zonas metropolitanas (más allá de algunas similitudes) debido a cuestiones tales como implantación industrial, presencia de fuerzas políticas de izquierda, grado de control que podían ejercer las direcciones centrales o locales de los sindicatos e importancia de los organismos de base recuperados por el activismo combativo.

Hasta el 20 de julio, el particular curso seguido en la constitución de la Coordinadora Metropolitana parece indicar un recorrido signado por un doble movimiento convergente y simultáneo. Por una parte, la acción (que podríamos denominar “superestructural”) de los dirigentes de las mesas, frentes o células sindicales de cada fuerza política, referentes y responsables tanto hacia adentro de las mismas como hacia los ámbitos públicos. Estos cuadros de conducción, además de responsabilizarse de convocar a sus pares de otras organizaciones, acercaban los recursos materiales y aportaban los contactos para concretar el encuentro. Pero esta acción “desde arriba” se tornaba insuficiente. En ocasiones anteriores, similares intentos habían naufragado en medio de críticas que cuestionaban precisamente su carácter superestructural.

Por otra parte, allí aparece el movimiento “desde abajo”, es decir la coordinación efectiva que en cada zona venían desarrollando con desigual éxito los distintos núcleos de militantes y contingentes obreros, tanto para rodear de solidaridad los conflictos localizados como también para evitar su aislamiento, llegando a movilizarse contra la represión o los atentados que sufrían los activistas. Este movimiento desde las bases de los establecimientos, como venimos demostrando, no era fruto de la acción espontánea de los trabajadores de cada fábrica, aunque el estado de movilización de los mismos era el terreno fértil fundamental que explica la efectividad y extensión de la acción militante de los activistas político-sindicales. Solamente este estado de disposición obrera, alimentada por la situación objetiva que presentaba el país, permite

comprender por qué el esfuerzo organizativo de la izquierda encontraba receptividad y acompañamiento de fracciones significativas del proletariado fabril. En tanto los militantes de fábrica, insertos en la masa, actuaban no sólo como “levadura” sino también como termómetro de lo que sucedía en ella, su presencia y opinión era tan importante o más que la de los cuadros de dirección de sus propias organizaciones. Se abría así un espacio de competencia y tensión en el cual las orientaciones bajadas desde cada fuerza política se debía compatibilizar con la realidad que sus propios activistas sindicales enfrentaban cotidianamente en el día a día de la fábrica.

El peso de los organismos de base se reafirma al observar como la inmensa mayoría de las delegaciones al Plenario de Beccar estaba integrada por comisiones internas, cuerpos de delegados, comités de lucha y delegados¹¹⁸. Esta composición marca el importante lugar que los cuadros medios o inferiores tenían dentro de la Coordinadora, tanto a nivel zonal como de la regional metropolitana. Esos dirigentes de base estaban obligados a rendir examen permanente en cuanto a su papel de representantes de la misma, para diferenciarse nítidamente de los cuestionados miembros de la burocracia. Por otra parte, el intenso nivel de politización en las plantas abría una rivalidad muy fuerte no sólo con los integrantes del peronismo ortodoxo sino también con aquellos de las distintas agrupaciones de izquierda.

Los dos niveles organizativos que hemos señalado deberían necesariamente articularse y darse una regularidad que potenciara los esfuerzos de cada uno de ellos. Ese sería el papel jugado por los plenarios, tanto a nivel zonal como metropolitana. Sin embargo, las condiciones políticas de la Argentina no permitían un despliegue público de un número tan elevado de activistas de izquierda, muchos de ellos semi-clandestinos o amenazados por los comandos fascistas de la “Triple A”. Tampoco parecía sencillo encontrar un lugar físico que albergara a cientos de militantes, abocados a largas y complejas deliberaciones. Todas estas razones imponían espaciar en el tiempo la realización de plenarios multitudinarios, conforme también a la necesidad de darle a la Coordinadora una práctica ágil de funcionamiento.

Estos factores negativos imprimieron una original dinámica al funcionamiento de la coordinadora: cada sub-zona elegía una representación de acuerdo al peso y grado de organización de cada contingente obrero fabril. Estos a su vez, se articulaban en una Mesa de Conducción, que centralizaba y complementaba las actividades en toda la

¹¹⁸BCoord, n° 3, 22/7/75.

zona hacia “abajo” y designaba a un número impreciso de representantes hacia “arriba”, es decir el ámbito más abarcativo en el que confluían con similares delegaciones de las restantes 3 zonas de Capital y Gran Buenos Aires, conformando una Mesa Ejecutiva a nivel regional metropolitana. Los encuentros ampliados a todas las delegaciones de establecimientos quedaban circunscriptos a cada sub-zona, que funcionaban de manera mucho más fluida por la cercanía física entre empresas organizadas.

En este punto, la cohesión misma de cada coordinadora zonal y la vigencia de la metropolitana, parecía estar basada en la necesidad de cada fuerza política de recurrir a sus aliados y competidores en el campo gremial opositor para evitar ser triturada por la acción crecientemente convergente del sector empresario, la dirigencia burocrática y el gobierno.

La militancia cotidiana en las fábricas

Siguiendo a Torre¹¹⁹, podemos afirmar que en el período estudiado se daba una particular convergencia entre las organizaciones políticas que intentaban insertarse en las fábricas (lo que se conoce vulgarmente como “proletarización”) y los trabajadores con desiguales inquietudes políticas y sociales que buscaban una estructura partidaria que diera respuesta a esas inquietudes y ayudara a sistematizar su práctica cotidiana.

En el primer caso, el militante o cuadro que “bajaba” a la fábrica podía, en un primer momento, responder mucho más disciplinada y verticalmente a la orientación general que le daba su organización. Sin embargo, no pasaba mucho tiempo para que reconociera (e inclusive se lo hiciera saber a su organización) que la línea que buscaba implementarse no era necesariamente compartida ni asumida automáticamente por la base obrera, corriendo el riesgo de quedar aislado en el ámbito concreto de su actividad. No se trata aquí de sostener la caricatura descalificadora del activista pragmático que buscaba mimetizarse en un ambiente ajeno a su extracción social¹²⁰. Si reconocer en cambio que los militantes que se proponían convertirse en orientadores de sus compañeros, debían eliminar actitudes soberbias o autosuficientes ya que las mismas podían alejarlos objetivamente del resto de los trabajadores,

¹¹⁹Torre (1983), páginas 93 y 94.

¹²⁰La supuesta actitud del militante que hablaba mal adrede o compartía ciertos gustos o inclinaciones “típicas” de los obreros, para relacionarse mejor con ellos. En última instancia, no cualquier trabajador “típico” se convertía en referente, delegado o dirigente de sus compañeros. Es interesante la opinión que en ese sentido aporta De Santis (2005), página 150.

prestando atención a la experiencia que le podría aportar el colectivo obrero de la fábrica donde activaba. Esto último a su turno implicaba un riesgo de signo contrario: adoptar un criterio de carácter economista, rebajando la propuesta socialista a una versión reformista de tipo “trade-unionista”. Los militantes debían extremar sus cuidados para evitar la tentación de caer en un anti-intelectualismo, en un momento donde la politización de la base trabajadora demandaba más que nunca profundizar dicha discusión teórica¹²¹. Esta situación era un primer foco de tensión a la que se veía sometido el militante “proletarizado”, toda vez que en él siguieran pesando los prejuicios sobre lo que querían en verdad los trabajadores y comprobara el real estado de conciencia sobre la condición de explotados y el grado de compromiso dispuesto a asumir para luchar contra esa condición por parte de los mismos obreros.

No muy distinta era la disyuntiva que debía afrontar el obrero “militante”, es decir aquél que se incorporaba por propia voluntad y convencimiento a una organización política. Ya el mismo hecho de la elección en donde militar, en un panorama político-ideológico extremadamente variado, era en sí misma toda una definición¹²². Pero si bien “iba” hacia la organización en busca de una interpretación más clara de su sentimiento de rebeldía y de recursos para hacerla efectiva, no por ello perdía el punto de vista del colectivo obrero del cual había surgido. Era, al mismo tiempo, un “obrero conciente”, politizado, pero también un “obrero de vanguardia”, es decir no necesariamente reflejaba el nivel promedio alcanzado por el resto de sus compañeros. En ese sentido, también se encontraba tironeado entre sus aspiraciones (que lo llevaban a involucrarse políticamente) y la realidad que le imponía el día a día en la fábrica. Este obrero “militante”, al igual y quizás más que el militante “obrero”, aportaba a la organización el reflejo directo de lo que pasaba por la base, marcando la temperatura política y disposición a luchar de la fracción obrera a la que pertenecía, la que no siempre coincidía con la imagen que de la misma tenían y deseaban las organizaciones de izquierda.

La problemática surgida por el desfasaje entre la línea partidaria y el real estado de conciencia de la mayoría de la clase obrera, presenta varias aristas. En primer término, el carácter del vínculo entre los activistas

¹²¹Girotti (2002) y Cristina (2002/3).

¹²²Desde militar en el peronismo “porque allí estaba el pueblo y la clase obrera”, hasta las distintas vertientes del socialismo. Otra opción importante parecía ser la de los medios: incorporarse a la JTP, OCPO o PRT era un reconocimiento implícito o explícito de acordar con la lucha armada. En este último punto pesaba también la impronta “guevarista”. Benencio (2002) y “Petiso” (2003).

de base y la estructura partidaria. Para 1975, todos los testimonios recabados coinciden en que cada fuerza política volcaba ingentes recursos o aumentaba el porcentaje de trabajo en el frente sindical, al compás del auge de la movilización obrera. En las organizaciones de pequeño tamaño como el GOR, que contaba con apenas algunos cientos de militantes, incidía mucho el origen de los mismos. La Corriente Clasista, que había migrado desde otra experiencia partidaria en bloque, representaba en ese entonces aproximadamente la mitad de la estructura de la organización madre. Por eso, el frente gremial (que coincidía casi por completo con la Corriente) podía disponer de mayor autonomía al momento de fijar la línea respectiva en materia fabril¹²³.

El PST y PO estaban integrados mayoritariamente por militantes provenientes de la pequeña burguesía que se habían “proletarizado”. Esta última condición debió aminorar la distancia entre la militancia y las direcciones, tornando más fluida las relaciones entre ambas, aunque sin suprimir la tensión dialéctica al confrontar las orientaciones bajadas desde la dirección y la opinión de la base¹²⁴.

Al PRT, según la opinión del responsable nacional de la Mesa Sindical¹²⁵ (máximo organismo de conducción de ese frente partidario), le resultaba más sencillo extraer militantes de las fábricas que insertar el Partido en los establecimientos. Esa cuestión tendría que ver con la inclinación que tenían aquellos trabajadores que se acercaban a la organización por su línea combativa, quienes no necesariamente reflejaban la posición más conservadora del colectivo obrero de la planta. Sin embargo (de acuerdo a ese mismo testimonio), el PRT, a diferencia del PC, reconocía esas diferencias, dejando a las células fabriles autonomía para fijar la línea concreta más adecuada para aplicar en cada caso. La controvertida cuestión acerca del perfil del obrero que se acercaba al PRT, parece encontrar respuesta en la opinión de otro entrevistado: “se captaba a los obreros más ‘fierros’ [quienes en muchos casos] pedían pasar a la estructura armada”¹²⁶. Este comentario debe ponerse en el contexto de una época donde la violencia encontraba un grado de legitimidad

¹²³Lucita (2003).

¹²⁴Coggiola (2006), páginas 205 a 211; Pozzi y Schneider (2000), páginas 151 a 184.

¹²⁵Mattini (2003).

¹²⁶“Petiso” (2003). Un ejemplo fue la propuesta de Luis Segovia de replicar “ojo por ojo y diente por diente” a los atentados fascistas de la “Triple A”. El caso es significativo por tratarse del máximo dirigente del Comité de Lucha de Villa Constitución que quedaba libre y en la clandestinidad, después de marzo de 1975. Mattini (1990), página 462.

relativamente extendido. El obrero “militante” a quien citamos recién, nos aporta otros datos interesantes para comprender parcialmente la dinámica de esa organización. Por ejemplo, el intercambio que tenían con importantes cuadros de origen obrero con responsabilidad en conflictos de magnitud como Villa Constitución. Así, recuerda la manera humilde y sencilla con la que Luis Segovia se dirigía a la célula obrera de la Ford (“yo te cuento mi experiencia”, “a mí me parece”), sin pretender imponer su opinión. Esta actitud era extensiva a los cuadros de dirección del Partido aunque no fuesen de extracción obrera. Un ejemplo es el de Benito Urteaga, quien como responsable del frente en la Ford, “nunca vino a decirme ‘nosotros tenemos que sacar a los obreros, armarlos y crear los soviets’, no eso no. Él se fijaba en abarcar la mayor cantidad de gente posible, crear la conciencia”. Esto, según el entrevistado, despertaba respeto hacia esos dirigentes, aunque admite que a veces se presentaban discusiones, teniendo en cuenta que “en la fábrica el que está al frente del trabajo sos vos”. Por último, reconoce autocríticamente que en muchos casos no era posible implementar las propuestas partidarias o que “se hacía lo que se podía dentro de las posibilidades”¹²⁷.

En la JTP (organización hegemónica en la Coordinadora zonal), esta tensión parece haber alcanzado su punto máximo. En el astillero Astarsa, la agrupación “José María Alessio” (JTP) ejercía hacia mediados de 1975 la conducción real de los contingentes obreros de ese astillero y de otros de la zona de Tigre. La misma magnitud de la influencia alcanzada por la agrupación entre los trabajadores navales desató una discusión entre los activistas que la crearon y la conducción de Montoneros, en especial luego del paso a la clandestinidad de esta última organización en septiembre de 1974. Montoneros pretendía que los militantes del astillero se volcaran al accionar armado como forma de irlos “fogueando”, en perspectiva de un enfrentamiento generalizado. Si a mediados de 1973, la agrupación de base de la JTP se vio beneficiada por el respaldo de una organización político-militar, dos años después esa condición transformaba a sus activistas en un “blanco móvil”. La orientación creciente militarista no sólo implicaba un recargo de las responsabilidades de los militantes, también los obligaba a descuidar o reducir su trabajo

¹²⁷“Petiso” (2003). El respeto de los militantes hacia la conducción se alimentaba en la consecuencia entre discurso y acción y en una moral de hierro que demostraban de manera práctica los miembros de la dirección. Así, una “sugerencia” se tornaba en casi una orden, que cumplían, convencidos, los militantes.

específicamente gremial, aquel por el cual habían alcanzado reconocimiento entre sus compañeros¹²⁸.

Una situación similar se presentaba a mediados de 1975 en los laboratorios Squibb. Allí la secretaria general de la comisión interna recaía en una activista de JTP, apoyada por una agrupación no abiertamente identificada como rama gremial de Montoneros y formada por una casi decena de militantes¹²⁹. En este caso, la discusión tenía que ver con un acentuado “verticalismo” de la conducción superior que restringía información y espacio a sus militantes fabriles y la presión para que la agrupación asumiera su pertenencia a la organización revolucionaria. De acuerdo al testimonio recogido, las discusiones con el “ámbito” superior reflejaban de alguna manera la rigidez de la conducción que pretendía bajar permanentemente la línea de lo que se debía hacer en la base, sin tener necesariamente en cuenta la opinión de ésta. Esa actitud estaría relacionada con un prejuicio paternalista proveniente de la extracción social de los cuadros de dirección. Su efecto pesaba en los criterios de construcción, que ponía un límite de crecimiento a la formación de cuadros político-sindicales de origen obrero. Esos trabajadores quedaban en minoría e impedidos de llegar a la conducción, siendo en muchos casos luego reabsorbidos por la dirección. Nuestra testigo narra que por lo menos en dos ocasiones, “insubordinaciones” personales a líneas impuestas estuvieron a un paso de terminar como disidencias. Según el testimonio, para complejizar más aquella discusión, se sumaba a los debates las diferencias entre los partidarios de las soluciones más “políticas” y los que proponían respuestas más “militares”. La realidad de una época en ebullición impedía medir con absoluta precisión cuál de las posturas era la correcta: en algunos casos, los contingentes obreros de una fábrica respondían a una orientación y otros no, por lo que la conducción planteaba que en todo caso era cuestión de tiempos y no de consignas desacertadas. Dentro de Montoneros, los dirigentes provenientes del frente territorial eran los que llevaban la voz cantante, subordinando a los del frente sindical. Esta cuestión podría deberse a que se reclutaba mayoritariamente a los cuadros militares en el primero de los frentes nombrados (como los casos de Galimberti y Pereyra Rossi). Si bien se concedía mucha importancia a la JTP, sobre todo a partir del primer semestre de 1975, el apoyo estaba condicionado a que fuese la conducción quien fijase la línea a su frente sindical, lo que no dejaba casi espacio para la discusión. Ésta, a lo sumo, se restringía a cómo implementar una

¹²⁸Benencio (2002). Lorenz (2006), capítulos 9 y 10.

¹²⁹Cristina (2002/3).

línea ya elaborada. El funcionamiento extremadamente verticalista (tal vez por el origen ideológico peronista de ambas organizaciones) y carente de espacios democráticos, habría conspirado en la construcción legítima de poder de la clase obrera.

La situación de la militancia, en sentido amplio, revestía así características complejas. Algunos activistas, por distintos motivos, adscribían de manera acrítica a la línea que fijaba la conducción. Otros, aun reconociendo las falencias de las direcciones y ciertos componentes autoritarios, aceptaban las orientaciones pero se reservaban la capacidad de aplicarlas de manera flexible a las condiciones reales de su fábrica. El panorama se nos presenta así mucho menos esquemático al descrito en forma tradicional: los activistas fabriles no fueron “autómatas” teledirigidos ni cumplían lineamientos sin evaluar críticamente sus posibles resultados. El lugar de trabajo, espacio concreto en donde actuaban, les permitía moverse con la libertad relativa que imponían las condiciones del momento y la aplicación de ciertas políticas (aun aquellas de las que más tarde se autocritiquen) pasaba también por su voluntad y capacidad reflexiva. En forma retrospectiva, los éxitos y fracasos parece ser resultado compartido de aciertos y errores tanto de los activistas como de las organizaciones en las que militaban.

El otro aspecto importante en esta fase organizativa específicamente zonal es el tipo de prácticas cotidianas que desarrollaron los activistas político-sindicales en su primera línea de combate, es decir, las fábricas. Según una crítica formulada desde el presente, las coordinadoras no pudieron avanzar más debido a la falta de un eje político coherente. Sin embargo, como demostramos, tales definiciones y en gran número eran impulsadas por las distintas organizaciones políticas con presencia en dichos organismos. La cuestión, a nuestro entender, tiene que ver con el criterio de funcionamiento adoptado por la Coordinadora: las resoluciones se tomarían mediante el acuerdo por unanimidad y además, todas las propuestas deberían contar con la aprobación de las bases. Si las coordinadoras no querían ser sólo un organismo superestructural debían remitirse por lo menos en términos relativos al mandato de las delegaciones fabriles. Y en las fábricas no existían únicamente diferentes puntos de vista entre los activistas sino sobre todo entre el conjunto de los trabajadores. Esas diferencias naturales eran las que debían ser procesadas por los activistas políticos, quienes para no quedar aislados, en muchos casos, “rebajaban” la carga de radicalidad de sus propuestas. Creemos oportuno volver ahora nuestra atención al proceso en que se adoptaban las decisiones en las fábricas a mediados de 1975, teniendo en cuenta que sobre ellas incidía fuertemente el contexto político y

económico de la Argentina de aquel entonces y de la propia experiencia que desarrollaba el peronismo gobernante.

La primera cuestión que debían afrontar los activistas (aun aquellos de origen peronista) era ser reconocido por sus compañeros de sección. Éste era el escalón básico para acceder a la categoría de delegado. Todos los testimonios recabados¹³⁰, acuerdan en que tal reconocimiento se basaba en la presencia constante junto a los trabajadores, pero además, una vez obtenido el cargo no se podía abandonar esa práctica, debiendo prestar atención hasta los reclamos más menudos, para lo cual debía recurrir a veces a otros activistas para multiplicar esa capacidad exigida al delegado. El recorrido por toda la planta dialogando con cada grupo de operarios contrastaba abiertamente como metodología con la adoptada por los delegados burocráticos, quienes solían encerrarse en alguna oficina de la empresa. La caminata diaria antes o después de cumplir su propio turno, servía para medir el estado de ánimo del conjunto de los trabajadores, dato éste último muy importante si lo que se pensaba era impulsar una medida de fuerza. Activar siempre de acuerdo a ese estado de ánimo garantizaba a los militantes poder encarar una acción reivindicativa que fuera efectivamente cumplida por sus compañeros y no sólo una consigna testimonial.

El segundo paso era llevar la línea política de su organización a la masa obrera del establecimiento. En muchos casos, esto último tenía que ser garantizado con el trabajo “hombre a hombre”. Aquí se ponía en juego la capacidad de los militantes, en tanto era necesario un fino manejo de los códigos propios de los trabajadores para adecuar las propuestas partidarias de tal manera que las mismas sintonizaran con la opinión del contingente obrero e inclusive el colectivo la sintiera como propia. Las organizaciones de izquierda más exitosas al momento de crecer dentro de la clase obrera eran precisamente aquellas que admitían un cierto nivel de conciencia y por lo tanto, daban mayor autonomía a sus activistas fabriles. La transmisión de la línea se garantizaba recurriendo a toda una batería de recursos, que además de la charla formal o informal incluía la entrega y discusión de volantes, boletines y en los casos de contingentes más politizados, las publicaciones semanales de las fuerzas partidarias. Toda esta tarea de agitación era mucho más compleja porque a mediados de 1975 la acción punitiva contra la militancia política implicaba

¹³⁰Para facilitar la fluidez del relato, y teniendo en cuenta la sugestiva coincidencia de los testimonios de los distintos entrevistados, no haremos una mención personalizada de los mismos. Cristina (2002/3), Correa (2003), Frígoli (2003), “Petiso” (2003), Girotti (2002) y Benencio (2002).

directamente el asesinato de aquellos activistas más reconocidos. Por este motivo, no eran los delegados los encargados de repartir o “piquetear” esos materiales escritos. La totalidad de los cuadros político-sindicales de la izquierda no peronista buscaban resguardarse identificándose como “independientes”, pero esta estrategia de encubrimiento no alcanzaba para disimular su condición no sólo para sus propios compañeros sino también para los sectores burocráticos y peor aún para la bandas fascistas. Sólo con el ejercicio de leer un volante y comparar el mensaje y hasta la terminología empleada con la “hablada” de un militante quedaba transparentada la pertenencia ideológica o partidaria del activista. La categoría de “zurdo”, “bolche”, “bicho colorado” era sistemáticamente asignada y no sólo con sentido despectivo: en muchos casos, era la forma dialectal adoptada por el obrero promedio de referirse a un tipo de comportamiento enfrentado a la patronal y a la burocracia y como tal, un ejemplo de respeto. A partir de mayo de 1974, JTP era sinónimo de “montos” y como tal esos militantes trataban también de encubrir su verdadera identidad partidaria. El intento a partir de mediados de 1975 de constituirse como “peronistas auténticos” no mejoraba las cosas: para la represión estatal o paraestatal eran simplemente “infiltrados” y entre las masas obreras provocaba confusión la reivindicación crítica de un movimiento político al que habían votado hacia apenas dos años y que denunciaban en la persona de la presidente y heredera política de su máximo líder¹³¹.

El tercer y último paso era la convocatoria y realización de la asamblea. En la visión coincidente de los militantes entrevistados, este hecho se convertía en el acto central que prescribía el “abc” del activismo político-sindical. Hasta el golpe de Estado militar de 1976, la reunión de trabajadores con capacidad de opinión y decisión, confrontando de manera abierta y plural, era tal vez el símbolo máximo de la democracia obrera. Rechazada o desvalorizada por la burocracia sindical, se convertía por esa misma razón en el objetivo central a alcanzar por parte del activismo opositor. En ella “ante los ojos de todos los compañeros” quedaban a la luz las diferentes posturas y aun los intentos de acallar a los activistas combativos se volvían en contra de importantes figuras de la cúpula sindical. No obstante, la asamblea como práctica e instrumento no podía ser utilizada en cualquier situación o por cualquier motivo. El riesgo implícito era convertirla en un ritual, que por su recurrencia

¹³¹Como ejemplo de este mensaje ambiguo señalemos que en sus comunicados, Montoneros seguía hasta fines de 1975, firmando “Perón o muerte, hasta la victoria General”.

rutinaria, quedara vacía de sentido y contenido. Como afirman nuestros testimoniantes, “no podés convocar a asamblea cuando querés, sino cuando podés”.

Para garantizar una asamblea era necesario alcanzar algunas condiciones. En primer lugar, el motivo que no podía ser sólo el que el militante fijara como convocante. En todo caso, si era así, debía reflejar de alguna manera el sentimiento y la preocupación de las bases. Una mala apreciación por parte del activismo podía derrumbar el laborioso trabajo de meses. Las consignas coyunturales debían ser expresadas en una perspectiva a mediano plazo. La tarea didáctica consistía en señalar que cualquier demanda reivindicativa, por pequeña que fuera, formaba parte de un programa máximo que aspiraba al fin de la explotación del sistema capitalista.

En segundo lugar, la preparación de la asamblea. Los militantes reconocen que la práctica más común era iniciar la discusión individual, ganando a los más remisos y luego testear el ánimo en mini asambleas por sección. En ellas se podía anticipar la dirección probable que seguiría la asamblea general, por ejemplo, los argumentos en contra de una cierta consigna o propuesta. Se podía, además, desactivar de manera preventiva los núcleos argumentativos contrarios. De ser efectiva esta ardua labor, cada sección no sólo era ganada para la discusión general sino que se presentaba a la misma impulsando desde abajo una determinada posición.

Un tercer aspecto era la oportunidad. No alcanzaba la corrección de una consigna o de una línea ni el haber realizado un sistemático trabajo de discusión previa: debía proponerse en el momento justo. Contrariamente a lo que cierto prejuicio parecería indicar, los militantes de aquellas organizaciones caricaturizadas por su “asambleísmo” (por ejemplo, las trotskistas) reconocen que en aquella época era necesario ser muy prudente al momento de convocarlas. Esta posición puede entenderse en el sentido que la asamblea era probablemente el único instrumento legítimo (en el sentido “democrático” del término) que el activismo opositor podía levantar contra los recursos manejados por la burocracia sindical. Perder una asamblea para la oposición sindical fabril era sufrir una doble derrota: la de los principios defendidos y la del método empleado. Este último, el factor decisivo que marcaba la diferencia con los sectores burocráticos.

La ocasión de la convocatoria debía estar basada en dos cuestiones centrales: un problema común que afectara a los trabajadores de toda la planta y otros de índole general, tanto en la rama de actividad como a nivel nacional. El proceso de recuperación de organismos de base fabril

encarado en nuestra zona de estudio desde 1973 se había pivotado en torno a reivindicaciones concretas (salubridad, ritmos de producción, reconocimiento de delegados, resistencia a despidos de personal). A comienzos de 1975 esa acumulación organizativa pudo trascender debido al trabajo previo en cada planta fabril. La solidez de esta tarea previa, ante un eventual reflujó de masas, no hacía desaparecer la influencia de los núcleos de activistas combativos implantados en las empresas.

La convocatoria a asamblea resultaba también una herramienta de presión o disuasiva, dirigida contra la burocracia sindical. En la medida que esta última no podía garantizar imponer su posición en una discusión abierta y democrática en fábrica, se la podía condicionar a la negociación desde la base, amenazando de lo contrario con resolver los diferendos por asamblea. Si las direcciones centrales de los sindicatos respondían declarando las asambleas en planta como “ilegales” desconociéndolas, el efecto buscado por la oposición de todas formas se alcanzaba: confirmaba sus denuncias acerca del carácter antidemocrático de los dirigentes sindicales ortodoxos. Por otra parte, el sector empresario, todavía a mediados de 1975, admitía que el control real lo ejercían los cuerpos de base y en ese sentido preferían un acuerdo rápido y no arriesgarse a que en una asamblea de planta aumentase la gravedad de un conflicto.

El funcionamiento de la Coordinadora Norte

La coordinadora zonal que estamos estudiando parece haber funcionado según un patrón definido de acciones. En primer lugar, cada agrupación política resolvía una línea que luego era bajada a sus militantes para su aplicación práctica en cada planta. Los activistas iniciaban su tarea difundiendo por distintos métodos las consignas. Pero lo central, llegado el momento, era lograr que la asamblea ratificara una posición que hubiera quedado pendiente de un Plenario de Coordinadora o de reunión de Mesa Ejecutiva zonal, que en la práctica era el que tomaba la mayoría de las decisiones de la Coordinadora zonal. Como en una fábrica determinada convivían distintos grupos de activistas de diferentes corrientes con desigual grado de influencia y simpatías entre los trabajadores, se resolvía el mandato que llevaba ese establecimiento en asamblea. Este mecanismo saldaba el punto de cuál era la voluntad del colectivo obrero de la planta, cuantificando de manera parcial lo que más tarde debía ser compatibilizado en un escrutinio general a nivel de Coordinadora zonal. En el escalón superior se tomaba en cuenta tanto

la posición de la mayoría como de las restantes posturas, ya que se pretendía organizar un espacio más amplio y abarcativo.

Cuando se reunía la Mesa Ejecutiva zonal se consideraban los mandatos elevados. Este funcionamiento zonal garantizaba la adopción de medidas en un tiempo relativamente breve y permitía controlar y ratificar la legalidad de cada mandato, teniendo en cuenta que la militancia conocía con detalle la fuerza e influencia de cada corriente política en las distintas fábricas. La composición de la Mesa Ejecutiva de Zona Norte reflejaba el mosaico político-ideológico de las conducciones de los organismos de base. Coexistían en ella las distintas vertientes de la izquierda peronista y no peronista, tomándose como criterio que estuvieran representados los principales establecimientos¹³².

El hecho que en la mayoría de las plantas (como en los laboratorios Squibb) la comisión interna o el cuerpo de delegados tuviera representantes de otras fuerzas por la minoría, permitía un control recíproco. Así, una misma delegación podía estar formada por dos o más representantes, cada uno de ellos de una agrupación política distinta. En las deliberaciones se tomaba debida cuenta de esta realidad y probablemente esta pluralidad pesara al momento de tener que tomar decisiones. La falta de una fuerza hegemónica (aunque en nuestra zona era dominante la JTP), impedía orientar en una sola dirección el rumbo a seguir por la coordinadora. Igual situación se presentaba en los escasos plenarios zonales que se realizaron después de fines de julio de 1975. Según dos testimonios coincidentes¹³³, dichos encuentros eran la oportunidad “para medir fuerzas y acordar, entre las distintas organizaciones y agrupaciones, metodologías de trabajo en común”. Las líneas políticas en general ya venían aprobadas en los ámbitos de dirección y se avalaban en el encuentro con el respaldo de cada delegación fabril que las llevaba como propuesta. De esta manera, las agrupaciones hablaban no en tanto tales, sino a través de sus militantes con responsabilidad de dirección en fábrica. Esta práctica, a primera vista compleja, presentaba dos ventajas: por un lado, toda agrupación que tuviera peso real en un contingente obrero fabril tenía garantizada su voz y voto en la Coordinadora. Por otro lado, el desigual peso y desarrollo de cada una de estas agrupaciones tendía a imponerse al momento de tener que adoptar una decisión.

Las reuniones, tanto de los Plenarios como de la Mesa Ejecutiva, pasaban por varios momentos. El primero era de información y debate,

¹³²Testimonio de “Oscar”, op. cit., páginas 86 y 444.

¹³³Lucita (2003) y Cristina (2002/3). Los términos y frases entrecomilladas son transcripciones textuales de dichos testimonios.

en donde cada delegación exponía su situación particular. En esa instancia “se discutía y peleaba todo (...), por un punto y una coma”. La imposibilidad de llegar a un acuerdo inmediato abría paso a una segunda instancia, pasándose a un cuarto intermedio. En ese segundo momento se activaba la “mesa chica”, es decir, los referentes principales de cada fuerza. Este espacio de decisión más acotado y con mayor capacidad de acordar políticas buscaba alcanzar el consenso, surgido de promediar las distintas posiciones. Para definir este aspecto se consideraban tres factores: el peso real de las distintas organizaciones (“todos sabían cuanto tenía cada uno”); la importancia de lo que estaba en juego (en torno a cuestiones coyunturales, específicas o generales) y el costo de mantener una posición inflexible que impidiera llegar a un acuerdo. Mientras que el primer factor era de orden objetivo y verificable, los dos siguientes se apoyaban en la capacidad política de los militantes que representaban al mismo tiempo a sus compañeros de fábrica y a su organización de encuadramiento. El activista puesto en ese lugar se sabía doblemente observado y por tanto condicionado. Ninguna organización, estaba, en el segundo semestre de 1975, en condiciones de extremar tanto su intransigencia como para hacer fracasar una acción político-sindical común, asumiendo el costo de romper un trabajo conjunto y exponiéndose a la acusación de “sectarismo”.

Así, luego de evaluarse los alcances y “contarse los porotos”, la “mesa chica” pasaba a la aprobación de las medidas concretas. Si no había acuerdo, se dejaba en suspenso la decisión y se giraba de manera inmediata a los establecimientos para que se resolviera el mandato en fábrica (“que decida la base”). Esta última situación rara vez se presentaba, ya que al conocerse lo que ocurría en cada establecimiento se prefería no dilatar más la resolución y consensuar una postura en común. Las discusiones eran intensas, pero se priorizaba llegar a un acuerdo en torno a las metodologías de lucha. Como señala un testimonio, “respetábamos donde tenía fuerza cada uno y frente al enemigo actuábamos monolíticamente”. Las divergencias debían ser procesadas de tal manera que no derivaran en una fractura. Cada fuerza podía no comprometer el máximo de sus recursos militantes o inclusive boicotear una tarea “pero jamás se retiraba”.

La estructura misma de la Coordinadora, su carácter premeditadamente flexible, permitía además que cada agrupación desarrollara su estrategia en las fábricas en las que tuviera mayor influencia y en las que las bases respondieran a tal estrategia. Por ejemplo, la JTP tenía mayoría en un conjunto de establecimientos chicos y medianos de distintas ramas. El PRT en cambio, era fuerte en la Ford, no así en metalúrgicos

y otras sectores fabriles. Tal situación hacía que en la Coordinadora se impusiera la línea de la JTP, pero a nivel establecimiento cada fuerza podía obtener resultados parciales, que resultaba muy difícil lograr en el conjunto. Esta flexibilidad y descentralización relativa garantizaba la supervivencia de un organismo de coordinación zonal, respetando la situación particular de cada fábrica.

Las diferencias se ahondaban no sólo en función del tipo de trabajo político y tamaño de los establecimientos sino también la diversidad de ramas productivas, cada una de las cuales presentaba una situación diferente, conformando un panorama extremadamente heterogéneo y por tanto imposible de sintetizar en una estrategia y resultados de conjunto. Esto viene también a explicar el desfase entre los logros efectivamente alcanzados por la acción de la Coordinadora y los que se podían esperar de ella. La Coordinadora era en potencia un espacio para la organización de los sectores más avanzados en términos políticos de la clase obrera, pero por su naturaleza seguía arrastrando el lastre de ser un organismo de lucha corporativo y, por tanto, limitado a una acción sindical reivindicativa. Si se proponía avanzar mucho más allá corría el riesgo de perder presencia dentro de la clase, objetivo este último al que ninguna organización de izquierda quería renunciar.

Capítulo III

*Del surgimiento de las
coordinadoras al golpe militar de 1976*

A partir de julio de 1975 se produjo un cambio de escenario político y social, luego del ciclo de la huelga general. La crisis económica y política, el desgaste del gobierno y los relevos parciales que se sucedieron en el mismo, junto con la obtención relativa de los reclamos salariales, produjeron un reflujo en la actividad y movilización de los trabajadores. En tanto, las fuerzas políticas de izquierda hacia adentro y hacia fuera entraron en una etapa de discusión acerca de cómo seguir. El inédito auge de masas vivido en apenas dos meses superaban sus pronósticos más optimistas. La promoción de centenares de nuevos cuadros medios surgidos de ese proceso cambiaba el funcionamiento interno de cada organización. La perspectiva de un recambio institucional dentro del sistema, con la convocatoria a elecciones anticipadas auguraba una posible democratización que aliviara la violencia represiva que se abatía sobre la vanguardia revolucionaria y los sectores populares movilizados. En distinto grado y profundidad esta posibilidad fue manejada como elemento de análisis por cada organización. Ninguna eludió en sus manifestaciones públicas los reclamos para lograr una salida del gobierno de María Estela Martínez de Perón. En algún caso, participando en un frente informal opositor (“el grupo de los 8” partidos de centro e izquierda); impulsando otra la convocatoria a una Asamblea Constituyente; estructurando una tercera un partido legal alternativo al gobernante (el “Peronismo Auténtico”). La estrategia era aprovechar la apertura insinuada para recuperar fuerzas y alejar en el tiempo el inevitable golpe de Estado militar que la burguesía estaba poniendo en marcha.

La lucha por la democratización, en sentido amplio, no debe confundirse con su versión devaluada y caricaturizada de “lucha electoral”. La democratización a la que se aspiraba desde la Coordinadora era concebida como instancia en donde se pusiera en libertad a los

presos políticos (entre ellos, centenares de dirigentes y cuadros sindicales medios y de base); se permitiera la realización de manifestaciones de protesta; se suprimiera la censura de prensa “de hecho” que pesaba sobre las publicaciones de izquierda y se garantizara la actividad político-sindical opositora en los organismos gremiales respectivos.

En cuanto al eje específicamente reivindicativo, los sectores combativos del movimiento obrero (al igual que a comienzos de 1975) se pusieron a la vanguardia en la denuncia y la organización de la resistencia, ante los primeros efectos de la desocupación incipiente. Esta actitud contrastaba con el silencio sobre el tema guardado por las direcciones nacionales de la CGT y las “62 Organizaciones”. La tasa de desocupación, según los ambiguos registros oficiales, oscilaba para todo el país en alrededor del 6,2% de la población económicamente activa, y en el Gran Buenos Aires entre abril de 1975 e igual mes de 1976, creció del 2,3% al 4,8%¹. Estos índices venían a reflejar una sensible caída de las inversiones empresariales que generaba una drástica reducción del nivel de actividad productiva. La inflación que seguía ascendiendo sin control, potenciada por el desabastecimiento y el “mercado negro” terminaban de pintar un cuadro de recesión, que golpeaba claramente a los trabajadores.

Mientras el gobierno nacional y la CGT no terminaban de encontrar una respuesta a la crítica coyuntura (síntoma esto último del grado de disgregación política), la Coordinadora metropolitana le dedicaba más de la mitad de su *Boletín* N° 5² (agosto de 1975) a caracterizar los motivos que llevaban a la desocupación y proponer un Plan de Lucha específico para revertir sus efectos.

Frente a esa realidad, los redactores del *Boletín* reafirmaban el Programa aprobado el 20 de julio (cuya primera consigna de encabezamiento era “Plena Ocupación”) Exigían la renuncia inmediata de todo el gobierno y proponían el apoyo efectivo a toda medida de lucha (ocupación de fábricas, movilizaciones y acciones de propaganda). En otro artículo del mismo *Boletín*, luego de ratificar la necesidad de nuclearse en torno a la Coordinadora para organizar la resistencia, presentaban el hasta ese momento más completo y único relevamiento de la situación en los principales establecimientos del área metropolitana, demostrando la seriedad y la minuciosidad de sus autores e, indirectamente, del grado de influencia por empresas que tenía la Coordinadora. Además, se buscaba elevar el nivel de análisis ligando el problema específico con el

¹Las cifras están tomadas de Torre (1983), página 141; Kandel y Monteverde (1976), página 127; Di Tella (1986), página 214.

²*BCoord*, número 5, agosto de 1975.

funcionamiento mismo del sistema capitalista y las responsabilidades directas e indirectas del gobierno y de las dirigencias sindicales burocráticas.

Las organizaciones de izquierda también denunciaban cómo la burguesía utilizaba la recesión para aumentar los ritmos de producción, y, por ende, la explotación. Estas maniobras se consumaban encubiertas bajo la forma de pago de horas extras y premios a la productividad, mientras por otro lado se procedía a despedir trabajadores.

Durante los meses de agosto y septiembre, como había denunciado la Coordinadora, los sectores empresarios se lanzaron a una ofensiva contra el activismo fabril. Los blancos preferidos fueron los integrantes de los cuerpos de delegados y de comisiones internas, con lo que se apuntaba a un doble objetivo: remover la presencia de los miembros más reconocidos por la base y provocar un retraimiento general de la organización al golpear el centro nervioso de los trabajadores a nivel fabril. Era una provocación: al producir los despidos, el activismo respondía convocando a asambleas y en algunos casos, a la toma de establecimientos. A su turno, esto servía como pretexto a los empresarios para denunciar el accionar de la cada vez más mencionada “guerrilla fabril”. Como en materia legal existía un verdadero arsenal de medidas persecutorias, cualquier medida de fuerza podía ser encuadrada dentro de una conducta subversiva. Por otra parte, la “guerra clandestina” de la “Triple A” contra los militantes más expuestos de la izquierda no se había detenido y cobraba semanalmente su cuota de asesinatos.

La Coordinadora metropolitana y sus correlatos zonales debían dispersar esfuerzos en un doble frente de lucha: contra la oleada de despidos y contra la especial persecución a sus activistas. La protección de los militantes, tanto en lo relativo a su continuidad dentro de la fábrica como a su seguridad personal, quedaba afectada. Si en los momentos de auge, el mismo movimiento masivo actuaba como un paraguas que en la práctica los protegía, el progresivo reflujo los volvía a dejar tal vez más expuestos, al quedar identificados por su participación en las principales acciones de junio-julio.

La disyuntiva que se les presentaba a las fuerzas de izquierda era de compleja resolución: si retiraban sus militantes de las fábricas para preservarlos en materia de seguridad, favorecían los planes empresariales de descabezar la organización de base. Además, esta retirada significaba entrar en un cono de aislamiento que las alejaba objetivamente de las masas. De todas formas, muchos activistas eran despedidos después de maniobras de provocación orquestadas de común acuerdo por la patronal y la burocracia sindical. En un caso u otro, el resultado era similar.

Las acusaciones que se formulan al PRT de sacar sus cuadros de las plantas para lanzarlos a la lucha armada parecen, en ese marco, no tener mayor sentido. Resulta difícil de admitir que un partido que proclamaba su voluntad de “ir hacia las fábricas”³, retirara a sus militantes de ellas justamente cuando comenzaba a tener creciente influencia en importantes centros fabriles. Lo que es más probable es que sus activistas “quemados” y cesanteados (ante la imposibilidad de reinsertarse en otro establecimiento) fuesen incorporados al aparato militar. También, que la consigna “todo el partido al combate” provocara que los cuadros político-sindicales se involucraran de manera creciente en las acciones armadas⁴. Igual situación se presentaba en la JTP, donde según un testimonio recogido se llegaba al extremo de destinar a importantes dirigentes de la comisión interna del astillero Astarsa a la realización de dichas acciones⁵. Al entrar en esta dinámica, era muy posible que se acelerara el proceso que indefectiblemente terminaría con el pase a la clandestinidad del activista, lo cual a veces derivaba en su retirada de la fábrica.

La consigna de “autodefensa” para proteger a los principales cuadros resultaba casi imposible de implementar. En primer lugar, porque demandaba montar un aparato que superaba la capacidad de las propias organizaciones. En algún caso, agrupaban sus esfuerzos de defensa en los establecimientos más cercanos y en otros buscaban que sus militantes fueran acompañados por sus compañeros de planta, aun reconociendo que esas prácticas no tenían más eficacia que la de autoconvencerse de que “se estaba haciendo algo por los compañeros”, ante la probada efectividad de las bandas asesinas para eliminar a los activistas⁶.

Cuando las organizaciones proponían la salida de los cuadros obreros más expuestos, recibían como respuesta una serie de preguntas concretas: ¿Adónde y con qué recursos replegarse? ¿Cómo reorganizar toda la vida familiar, en algunos casos, preexistente a la militancia, cuando no se había pensado a qué extremo podía conducir esa militancia? ¿Cómo renunciar a un trabajo de laboriosa construcción política-sindical, justamente aquél que los había colocado en el sitio de reconocimiento que ahora se transformaba en amenaza potencial? El “repliegue hacia las bases de la fábrica” no alcanzaba: los activistas eran ya demasiado conocidos y como

³EC, 18/6/75, 2/7/75 y 10/9/75.

⁴“Petiso” (2003).

⁵Benencio (2002).

⁶Cristina (2002/3), Correa (2003), Frigoli (2003), “Petiso” (2003), Girotti (2002) y Benencio (2002).

señala un testimonio, ni siquiera una pública y dudosa autocrítica los ponía a salvo al momento del secuestro o la detención⁷.

Ante esta situación, el fenómeno de coordinación que venimos estudiando se replegó principalmente sobre el espacio zonal, donde se encontraban implantadas las principales fábricas con presencia de activistas de izquierda. Esto se debía, en forma convergente, a que el modelo de construcción organizativa se basaba en las conducciones fabriles recuperadas, a la debilidad de las fuerzas políticas de izquierda para mantener centralizada la lucha, dotándola de un eje político superador y a la ofensiva de la alianza formada por el gobierno, la patronal y la burocracia.

Desde mediados de agosto de 1975 se reinició la polémica entre las organizaciones políticas de izquierda acerca del rumbo a seguir dentro del movimiento de las Coordinadoras. El PST acusaba a la JTP de confrontar abiertamente con la dirigencia burocrática de los sindicatos, proponiendo su reemplazo inmediato como conducción gremial por la Coordinadora. Para la organización trotskista, ésta era una política equivocada que desconocía el carácter todavía minoritario que revestía la Coordinadora. En ese sentido el PST le adjudicaba potencialidades futuras si se convertía en una especie de núcleo de corrientes opositoras internas dentro de cada sindicato, actuando como un “ariete” que presionara sobre las direcciones oficiales de los gremios. Además las Coordinadoras tendrían que asumir un papel de dirección “política”, luchando por las libertades democráticas, contra la represión y en un rechazo explícito a los rumores de golpe de Estado militar, que comenzaban a circular de manera creciente⁸. La posibilidad de un giro a la izquierda de la burocracia a esa altura de los acontecimientos, parecía por lo menos una pretensión ingenua, y enturbiaba la percepción de las masas alimentando las esperanzas en los dirigentes tradicionales.

A partir de septiembre, la Coordinadora metropolitana iba a incrementar su rol de denuncia ante el agravamiento del panorama recesivo y su secuela de despidos y suspensiones, utilizada por parte de los empresarios como un instrumento de disciplinamiento de la clase trabajadora⁹. Basándose en cuatro casos puntuales (uno de ellos de los obreros navales de Zona Norte), los autores de un artículo en el sexto número del *Boletín de la Coordinadora* describen lo que dan en llamar “la ofensiva contra

⁷Testimonio de “Oscar”, op. cit., páginas 435 y 436. En la misma obra, el relato testimonial de “Barrita”, página 88.

⁸AS, 8, 16, 23 y 30/8/75.

⁹BCoord, número 6, octubre de 1975. Éste fue el último número que pudimos consultar.

los trabajadores”, convocando a cerrar filas en torno al Programa del encuentro de Beccar. Además, reclaman la renuncia de todo el gobierno y exigen elecciones libres en tres meses, al rechazar explícitamente una salida golpista por considerar a los militares como “fieles servidores de los monopolios”.

Otro artículo destacado de esa publicación estaba referido a un decreto implementado en la primera quincena de octubre. En él, se imponía una “tregua sindical” por la cual se suspendería por 180 días el derecho de huelga, a la vez que establecía que “sólo los sindicatos con personería gremial podrán tomar medidas de acción directa”. En esa medida legal se prohibía, asimismo, la realización de medidas de fuerza sin someterlas antes a la “conciliación obligatoria”. El no cumplimiento de tal requisito provocaría la ilegalidad automática de la acción de protesta, permitiendo al Estado intervenir el gremio en donde se desarrollara el conflicto. Otro de los puntos que avanzaba claramente sobre los derechos obreros y las condiciones de trabajo, era la suspensión de la estabilidad del empleado público, en momentos donde los rezagados trabajadores del Estado se lanzaban a la lucha en todas las áreas de servicios (salud, educación, justicia, bancos y transportes) y de la administración. El análisis del decreto se enmarcaba en declaraciones que hiciera el general López Aufranc en el diario *La Prensa*, en donde sugería la adopción de dicha prohibición y el “despido de todos los activistas de las fábricas”. Este militar (responsable de la represión del “Cordobazo” y miembro del directorio de la siderúrgica Acindar) venía a coincidir con la intención del ministro de Trabajo Carlos Ruckauf de sofocar los conflictos suscitados por reclamos de salarios, contra la desocupación y las suspensiones.

La información aparecida en los diarios comerciales de octubre de 1975 permite confirmar el aumento de conflictos en todo el país. En el dinámico y estratégico sector industrial del Gran Buenos Aires se destacó dentro de la actividad huelguística la lucha de los obreros de la planta automotriz de Mercedes Benz de González Catán en el Suroeste del conurbano bonaerense. En las empresas pequeñas y medianas la principal causa de agitación eran las suspensiones y despidos, junto con la política de expulsión de delegados y activistas. En tanto, en las grandes plantas los reclamos se centraban más en la caída abrupta del nivel adquisitivo de los salarios, como resultado del incesante aumento del costo de la canasta de productos básicos y en los ataques hacia sus organismos de base (como cuerpos de delegados y comisiones internas) por parte de la patronal y la burocracia sindical. Hacia fines de mes se registraban conflictos en las fábricas automotrices del Gran Buenos Aires: en Chrysler (Monte Chingolo), General Motors (San Martín), Fiat (Caseros) y Ford

(General Pacheco) se realizaron asambleas por secciones, con abandono momentáneo de los puestos de trabajo¹⁰. En todas estas plantas, existía una fuerte presencia de activistas de izquierda, quienes conducían (algunos desde la semi-clandestinidad) los cuerpos de delegados y comisiones internas.

Este nivel de conflictividad y movilización, despertaba preocupación en el gobierno y el sector empresarial. El primero porque veía cómo se mellaba día a día su autoridad y se extendía su desprestigio entre las filas obreras y ante el gran capital (como garantía de contención del conflicto social), acelerando los planes golpistas. Para los sectores empresarios, la situación no era menos crítica: habían ensayado sin éxito la práctica tradicional consistente en contraer (en algunos casos de forma artificial) el nivel productivo, generando desocupación. Además, diferían no sólo el pago de incentivos, premios y aumentos sino más directamente los salarios normales. Con la complicidad del Estado y de la burocracia, en tanto, descabezaban a las direcciones combativas en fábricas y amenazaban y perseguían a los activistas. A pesar de todo esto, hacía fines de octubre, la clase obrera no terminaba de retroceder, aunque se empezaba a visualizar el cansancio, desgaste y desaliento entre sus filas. Tal movimiento de reflujo, sin embargo, no era inmediato y masivo. El caso de Mercedes Benz, aunque aislado, marcaba un rumbo diferente y la totalidad de las organizaciones de izquierda, aferradas a este tipo de episodios, seguían proponiendo una lucha a la ofensiva, lo que comenzaba a producir un progresivo desfasaje con las masas. El peligro era que la vanguardia obrera y política se distanciara del conjunto, quedando muy expuesta a los golpes represivos.

Este complejo escenario fue lúcidamente comprendido por el gobierno y el sector empresarial, que iniciaron un “ensayo general” de lo que luego será la más formidable escalada represiva contra los sectores revolucionarios y en especial, la vanguardia obrera. Este “ensayo general” consistió en un proceso en dos etapas: la “construcción” e identificación del enemigo (“el guerrillero o terrorista fabril”) y su posterior eliminación.

¹⁰EC, 29/10/75. En contratapa, el PRT llamaba a reeditar las luchas de julio, “pasando por encima de los dirigentes vendidos” y además realizar “asambleas en cada fábrica [y] enviar delegaciones a las fábricas y barrios cercanos para coordinar las acciones (...) impulsando la más vasta movilización obrera y popular, por la recuperación inmediata del salario real”. El destacado es nuestro. Para el caso del conflicto en Mercedes Benz, véase Löbbe (2004 b).

En el primer momento, a partir de una masiva campaña de acción psicológica (en especial en la prensa escrita), se logrará instalar la idea de que en las fábricas en conflicto se habían “infiltrado” dentro de los trabajadores “elementos subversivos”, responsables de agitar y radicalizar los reclamos, aún aquellos “más legítimos”. Para extirpar el “virus” (activista o militante) del “cuerpo” (la masa obrera), se debía recurrir a drásticas terapias, que eventualmente podían afectar a los tejidos sanos, siempre y cuando éstos (los trabajadores comunes) hicieran causa común con los primeros. La garantía de seguridad pasaría entonces por no involucrarse ni mucho menos solidarizarse con el accionar reivindicativo de los militantes “subversivos”. La definición de “subversivo” era tan ambigua que le cabía a cualquier trabajador que reclamara por sus derechos. Además, esta campaña incluía otro elemento que reflejaba parcialmente la realidad de algunos establecimientos: la idea de “los soviets”, un tipo de organización revolucionaria que habría tomado en los hechos el control de los establecimientos, desconociendo el derecho de propiedad, las leyes e incluso se preparaban desde allí para la toma del poder. Si esta era la pretensión de alguna de las organizaciones de izquierda actuantes, la misma nunca llegó a ser fue un fenómeno tan extendido y profundo como se denunciaba. Esta campaña fue creciendo con singular coherencia a lo largo de los últimos meses del año 1975, abriendo paso al segundo momento: una vez caracterizado e identificado el enemigo, sólo bastaba ahora su eliminación. En octubre el Poder Ejecutivo aprobó la última batería de medidas represivas antes de marzo de 1976: los Decretos 2770, 2771 y 2772, por los que se subordinaban todas las fuerzas de seguridad a las Fuerzas Armadas y además y fundamentalmente, se autorizaba a las mismas a intervenir en todo el país (extendiendo su competencia original de la provincia de Tucumán), para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

El principal vocero de la campaña de denuncia contra la “subversión fabril” a fines del mes de octubre fue el diario *La Prensa*. Si bien cada uno de sus notas editoriales eran en sí mismas claras denuncias del “poder gremial”, del activismo de izquierda en las fábricas y de sus efectos nocivos, desde la óptica de los intereses empresariales, la campaña no terminaba allí. Venían a sumarse a ellas, las declaraciones de las fuerzas políticas “democráticas” de oposición. Así Álvaro Alsogaray afirmaba: “Hay soviets en las fábricas”. Y al referirse a la crisis económica mencionaba 4 factores: 1) los compromisos externos; 2) la inflación; 3) “los ‘soviets’ instalados en las fábricas que desconocían a los dirigentes gremiales y al gobierno” y 4) la subversión. Días más tarde, ratificaba su opinión sobre el tema, denunciando a “los soviets de fábrica que están

sobrepasando a esta pseudo-democracia, incapaz de controlar las huelgas, la indisciplina social y los desórdenes varios”. A su turno, el líder del principal partido de oposición, Ricardo Balbín, de la UCR, volvía a sostener “que la represión al terrorismo no es pareja (...) creo, fundamentalmente que la guerrilla está en las fábricas [y que] es muy difícil que esté en el campo”¹¹. Para cerrar, también desde el gobierno se insistía con el tema. Según el ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, la “guerrilla fabril” sería responsabilidad también de aquellos empresarios que para romper las conducciones sindicales peronistas, tomaron como obreros en sus establecimientos a militantes de ultraizquierda. Estos últimos, desbordando todos los controles, serían parte integrante de la estructura más amplia de la guerrilla¹².

A todo esto y como parte de un cambio de estrategia que implicaba el desarrollo del Partido Peronista Auténtico, el 6 de octubre trascendió que en la ciudad de La Plata se había realizado el lanzamiento del Bloque Sindical del Peronismo Auténtico, que en la práctica venía a reemplazar a la JTP. Para la izquierda, en especial el PST y PO, esta nueva estrategia sindical del peronismo de izquierda venía a conspirar abiertamente con el funcionamiento de la Coordinadora al pretender que esta se transformara en un apéndice del Bloque.

Por esos días, el diario *La Nación* denunciaba que se esperaban conflictos gremiales por reclamos salariales masivos con activa participación de sectores sindicales minoritarios de extrema izquierda, incluso con tomas de fábricas, apoyándose en legítimas demandas obreras. También se afirmaba que ante esto la Central Obrera se había visto obligada a ponerse al frente de dichos reclamos, jaqueada por activistas no comprometidos con el gobierno e inclusive por lo que “ha sido llamada ‘guerrilla fabril’ o ‘soviet de fábrica’”. En su edición del 5 de noviembre, el mismo día en el que serían secuestrados varios delegados del astillero Astarsa en Zona Norte, *La Nación* recogía el discurso del Teniente General (retiro efectivo) Benjamín Rattembach. Este militar, refiriéndose a la atención de la CGT puesta en cuestiones políticas que desatendía lo gremial afirmó: “Van perdiendo el dominio de la masa obrera, que hoy se encuentra copada ya en parte por el ERP, como se puede ver en muchas fábricas”¹³.

Una confirmación indirecta del ataque frontal que se avecinaba sobre todo el activismo fabril de izquierda la encontramos en una nota

¹¹LP, 30/10/75, 31/10/75 y 1/11/75. Las declaraciones de Alsogaray en LR, 24/10/75 y LN, 31/10/75. Las de Balbín en LR, 20/10/75.

¹²ECC, 29/10/75.

¹³LN, 2/11/75 y 5/11/75.

aparecida en el semanario del PC en forma contemporánea a las declaraciones recién mencionadas. En esa nota, se informaba acerca de un formulario distribuido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en todos los establecimientos industriales, bajo el nombre de “Planilla de relevamiento fabril e industrial de la Provincia de Buenos Aires”. En el mismo, a completar por la dirección de la empresa, se requerían: nombre del establecimiento; tipo de sociedad industrial; ubicación; nombre del gerente; tipo de producción; cantidad de empleados y obreros especializados y comunes; sindicato al que pertenecen; cantidad de afiliados y domicilios de los delegados de la comisión interna. De todos esos datos, los que más interesaban eran la filiación política de los activistas y sus domicilios. El artículo se cerraba diciendo que la policía, al entregar las planillas, les comentaba a los empresarios “esto les viene bien a Ustedes: podrán echar a los activistas sin indemnización”¹⁴. Esta tarea de relevamiento formaba parte de una estrategia que ya estaban desarrollando desde meses atrás los distintos servicios de informaciones no sólo policiales sino también de cada una de las Fuerzas Armadas. Se trataba, según el argot de tales organismos, de “completar la plantilla”, es decir establecer un organigrama del activismo fabril, un “quién es quién” necesario para comenzar a ejecutar las políticas de eliminación selectiva que se implementarán de manera sistemática a partir de marzo de 1976, pero que como mecanismo, ya se venía aplicando en forma de secuestros y asesinatos todavía muy puntuales¹⁵.

Para completar la maniobra de cerco sobre la llamada “guerrilla industrial”, a mediados de noviembre apareció en una de las revistas más cercanas a la gran burguesía (*Mercado*) un reportaje al saliente Jefe del III Cuerpo de Ejército, Carlos Delía Larocca. En esa entrevista, el militar adelantaba que “ya habría contactos entre jefes militares y algunos de los principales empresarios sobre el futuro accionar de la lucha contra la ‘guerrilla industrial’”, la que basaba su actividad en “una intolerable conducta que protagonizan grupos infiltrados entre la clase trabajadora, que hasta procuran armarse en contra de los empresarios (...) La subversión, en este caso, consiste en atentar contra la producción nacional y se

¹⁴NP, 12/11/75.

¹⁵Cristina (2002/3). Según su relato, entre fines de 1975 y comienzos de 1976 se produjo la “visita” de un grupo de inteligencia del Ejército, con sede en Campo de Mayo, que demandó a la empresa un detalle pormenorizado de la inclinación político-ideológica de todos los activistas del laboratorio Squibb.

logra mediante el ausentismo, el sabotaje industrial o imponiendo el control obrero sobre la producción”¹⁶.

El 24 de noviembre se informaba que en la localidad de La Matanza había quedado formalmente constituido el Bloque Sindical del Peronismo Auténtico de Capital y Gran Buenos Aires, en un congreso que reunió unos 800 delegados gremiales y activistas fabriles. Su conducción quedó constituida por un representante de las agrupaciones de navales, metalúrgicos, aceiteros, jaboneros, sanidad y UTA, bajo la coordinación de Gonzalo Chávez. En la declaración final, se señalaba “esta no es nuestra hora: no estamos en condiciones de ser la conducción de reemplazo de la clase trabajadora”, aunque apuntaron que estaban dispuestos a disputarles a las estructuras gremiales del Partido Justicialista la dirección del movimiento obrero organizado¹⁷. Días antes, *La Nación* editorializaba sobre la planificación de la lucha contra la guerrilla. Al referirse a su versión fabril señalaba que “se estudian en los organismos de seguridad, medidas [de represión] en cuya puesta en marcha tendrá relación directa, especialmente en el cinturón porteño, el comienzo de conflictos promovidos políticamente con supuestas demandas sindicales como exteriorización de los reclamos de las bases”¹⁸. Estas previsiones se originaban en el impacto que la inflación (137,6% en los cinco meses previos, 292% desde comienzos del año), las constantes devaluaciones que licuaban los salarios y las políticas de contención de las remuneraciones estaban teniendo sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que esta nota expresaba (desde la perspectiva de la burguesía) era el temor a que la reacción obrera encontrara en el activismo de izquierda y en las coordinadoras de Buenos Aires y del interior, el cauce y herramientas organizativas para imponer sus reclamos.

El mes de noviembre terminó con una intensa movilización de los contingentes obreros de las plantas automotrices del Gran Buenos Aires que reclamaban mantener su encuadramiento tradicional en el SMATA. La posibilidad de ser transferidos a la UOM implicaba (en términos de convenio laboral) una sensible reducción de las distintas escalas salariales. La conducción nacional del SMATA, que había confrontado durante todo el año con las direcciones “rebeldes” de cada planta del conurbano, debió ponerse al frente de los reclamos ante el nuevo peligro de ser desbordada desde la base. El triunfo del conflicto intergremial (iniciado a fines de noviembre y concluido en la primera quincena de

¹⁶Véase *Mercado*, 13/11/75.

¹⁷ECC, 24/11/75.

¹⁸LN, 22/11/75.

diciembre) fue capitalizado por la dirigencia nacional del SMATA, pero la posibilidad muy cercana de perder el control sobre la movilización, mostraba también la precaria situación que se vivía en el ámbito sindical. Otra muestra de la crisis de representatividad se manifestó en ocasión del plenario de delegados metalúrgicos realizado el 27 de noviembre en la localidad de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. Ese día, convocados por la Coordinadora Oeste se reunieron para presionar la adopción de medidas de lucha cerca de 2.000 trabajadores de las principales fábricas de la zona. El temor a ser sobrepasados llevó a los dirigentes burocráticos de la seccional a convocar a un contingente militar del Ejército, argumentando la presencia de “guerrilleros fabriles” que querían copar el encuentro. La intervención de los militares terminó con decenas de detenidos, un centenar de heridos y por lo menos 4 activistas “detenidos-desaparecidos”. Esta última situación motivó, las semanas siguientes, una cadena de paros en los establecimientos a los que pertenecían esos militantes y de otras fábricas cercanas en solidaridad con los afectados¹⁹.

En el mes de diciembre de 1975, las políticas encaradas por el ministro Cafiero para lograr una reactivación de la actividad económica (desacelerando el ritmo inflacionario) no daban señales de éxito: el costo de vida en noviembre había aumentado un 8%, 290% desde principios de 1975 y 310% comparado a igual medición de noviembre de 1974. Este proceso imparable, junto con las “minidevaluaciones” quincenales erosionaban de manera creciente los ingresos fijos de los trabajadores. A su turno, estos salían a reclamar ajustes generales (que pronto eran devorados por la escalada inflacionaria) o por empresa. Los empresarios, luego de expresar sus quejas por las demandas obreras, trasladaban directamente a los precios el porcentaje acordado a sus trabajadores o bien recuperaban los mayores costos utilizando abiertamente el desabastecimiento, alimentando el “mercado negro”. Todo esta situación se potenciaba agravada por la coyuntura desfavorable a nivel internacional²⁰.

En materia política, la crisis quedó plasmada en la formación de un bloque de legisladores “antiverticalistas” en ambas cámaras del

¹⁹Según el PST, la provocación de la “ultra izquierda” había dado pie a la represión (AS, 5/12/75). El GOR, por el contrario, asignaba esa responsabilidad centralmente a la burocracia (BCC, diciembre de 1975). Todas las organizaciones de izquierda, sin embargo coincidían en denunciar la escalada represiva cada vez más abierta. Pérez (2002).

²⁰Véase LO, 31/12/75. Una mirada menos crítica, la del entonces funcionario del ministerio de Economía, Guido Di Tella (1986).

Congreso. Antes de fin de año, el grupo fiel a la presidente apenas pudo bloquear con mucho esfuerzo un pedido de juicio político contra ella. Cabalgando sobre este creciente “vacío de poder”, las FFAA terminaban de completar su propio organigrama, de cara al golpe de Estado de 1976. La promoción al frente del Ejército de Jorge R. Videla y la cobertura de puestos de mando en las fuerzas de seguridad (como la Policía Federal) con militares en actividad aceleraban el golpe al insertar en los más altos niveles de conducción del Estado al personal político de origen militar destinado a tomar la posta de un gobierno en disolución. Un ensayo general del golpe fue el levantamiento del brigadier Capellini. El final del episodio midió la soledad del gobierno. Su falta de respuesta, la incapacidad para reprimir a los insurrectos, la carencia de apoyo del resto de los partidos políticos (sólo declaraciones de compromiso) y hasta una tardía convocatoria a paro general de la CGT (levantado a 3 horas de iniciado) desnudaban la orfandad del gobierno de María Estela Martínez de Perón²¹.

En tanto, si bien no con la magnitud y grado de coordinación de meses anteriores y de la que se insinuaba en las vísperas del golpe, las protestas y medidas de lucha obreras siguieron vigentes. A nivel superestructural, se formalizó la constitución de un bloque “antiverticalista”. Como máximo referente del mismo quedó el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex dirigente metalúrgico Victorio Calabró. Este sector si bien iniciará un acercamiento táctico con los grupos antiburocráticos y de izquierda, apuntaba al desgaste del gobierno desde una perspectiva abiertamente favorable al golpe de Estado, tratando de sacar provecho hacia la derecha del descontento de los trabajadores.

En materia de movilización obrera, la misma se presentaba en oleadas: un sector de actividad entraba en conflicto, luego de un tiempo obtenía una satisfacción parcial de sus reclamos y entraba en reflujo, pero sin solución de continuidad otro sector se lanzaba a la lucha, repitiendo el ciclo. Esta situación, propia de una etapa defensiva en la que no se podía implementar una movilización de conjunto, marcaba la debilidad de las corrientes gremiales opositoras quienes a pesar de todas las dificultades seguían militando para lograr esa coordinación de los reclamos.

Todo ese proceso producía un nivel de desgaste en los activistas político-sindicales que les impedían en muchos casos, saber “en que día vivíamos”. Su rutina enloquecida de vida incluía la lucha cotidiana en fábrica, la asistencia a encuentros (como los de la Coordinadora), las reuniones y tareas partidarias (en algunos casos, con actividad militar),

²¹Dearriba (2001) y Kandel y Monteverde (1976).

todo esto desafiando día a día la represión o los secuestros de las bandas armadas de ultraderecha. En términos concretos, estos militantes en muchos casos no podían asimilar y sintetizar la rica experiencia política que con su esforzada militancia construían. No obstante, y como virtud, todos los testimonios recogidos coinciden en que en ningún momento perdieron el contacto con sus compañeros quienes, en la medida que el clima de terror lo permitía, los acompañaban, respaldaban como dirigentes y en muchos casos, los refugiaban ante la persecución²².

Represión, luchas obreras y actuación de la Coordinadora Norte durante el segundo semestre de 1975

A partir de agosto de 1975, la conflictividad obrera en la Zona Norte del Gran Buenos Aires viró bruscamente en cuanto a sus motivaciones, pasando a ocupar el lugar central la lucha contra las suspensiones y despidos en las empresas. En Editorial Abril (Vicente López) los trabajadores iniciaron medidas de fuerza exigiendo la reincorporación de 15 trabajadores despedidos. En la fábrica de cerámicas Lozart (San Isidro), sus obreros tomaron la planta, por las suspensiones que desde julio afectaban a la mitad de su plantel. En la autopartista Wobron (de General Pacheco), los despedidos fueron 55 sobre 100 trabajadores suspendidos, a pesar que la fábrica estaba trabajando al máximo de su capacidad con horas extras. En Cerámica Pilar (San Isidro) el despido de 16 operarios produjo la ocupación de la fábrica por parte de sus más de doscientos trabajadores, encabezados por su cuerpo de delegados y los dirigentes combativos del Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina. Para expresar su solidaridad se hicieron presente contingentes obreros de plantas como Frigor, Del Carlo, Editorial Abril, laboratorios Squibb, entre otras y el apoyo de los partidos Peronista Auténtico, PST y UCR. La empresa terminó accediendo a la reincorporación y además al reconocimiento del pago por varios de los días no trabajados. El ejemplo de Pilar fue seguido por el personal de otras dos fábricas de cerámicas de la zona en conflicto, también por despidos (Lozart y Tauro). En respuesta a estos hechos, el local del Sindicato sufrió un atentado por parte de una agrupación derechista que adhería a la conducción burocrática

²²Véase LN, noviembre-diciembre de 1975. Respecto a la experiencia cotidiana de los activistas, existe un amplio acuerdo entre los distintos testimonios. Los más gráficos son los de Gastón (2002) y Cristina (2002/3).

nacional del gremio ceramista²³. Mientras estos sucesos se producían, la Coordinadora zonal había descendido transitoriamente su nivel de actividad, en especial si comparamos la misma con el grado de desarrollo alcanzado en los dos meses previos. Hacia fines de agosto, las reuniones de la Coordinadora Norte se circunscribieron a su organismo permanente (la Mesa Ejecutiva) y a la realización de un plenario también zonal. En el mismo (según la crónica del semanario del PST), los integrantes de la JTP se habrían negado a tomar medidas contra un posible golpe, si previamente no se hacía votar en las fábricas el programa del Plenario de Beccar. Este tipo de discrepancias no sólo reflejaban las diferencias entre las organizaciones sino también tendían a trabar el funcionamiento de la Coordinadora zonal²⁴.

En septiembre, la conflictividad obrera se concentró mayoritariamente en las ramas de fabricación de cerámicas y metalúrgica. Dentro de la primera, en Lozadur, un paro con ocupación obligó a la patronal a reconocer la recategorización del personal, lo que implicó un aumento de salarios del mismo. En Pilar, los obreros en asamblea rechazaron un descuento compulsivo para la obra social, logrando que la empresa difiriera esa retención. En Stefani, el motivo del conflicto giraba en torno al encuadramiento gremial, para acceder a un convenio con mejores salarios y cláusulas previsionales. Los trabajadores organizaron una marcha y concentración frente al ministerio de Trabajo, obteniendo de esa repartición una resolución favorable. Días más tarde, no obstante, los trabajadores debieron retomar las medidas de fuerza debido a la actitud de la empresa de desconocer a la comisión interna y negar permisos gremiales. Todos estos conflictos en la zona de San Isidro ocurrían en momentos en que se estaba por producir un recambio electoral en la conducción del sindicato zonal, que estaba dirigido por un sector combativo integrado por JTP y otros sectores de izquierda. En su publicación, PO llamaba a mantener la unidad del sector antiburocrático ante los ataques que venía recibiendo el activismo de izquierda por parte de la conducción burocrática de la Federación nacional y de las bandas armadas de ultraderecha²⁵.

En la rama metalúrgica, a comienzos de septiembre, los obreros de Fate Electrónica (encuadrados en la UOM) declararon primero el estado de alerta ante posibles despidos y suspensiones y luego recurrieron al paro, lo que logró imponer la conciliación obligatoria y la reincorporación de

²³EC, 13/8/75; AS, 23/8/75 y 30/8/75; UH, 13/8/75.

²⁴AS, 30/8/75.

²⁵PO, 17 y 24/9/75; EC, 24/9/75.

los despedidos. En Nor Winco (General Pacheco), la empresa suspendió a 320 operarios, difiriendo además el pago de salarios. Los trabajadores recurrieron entonces al paro y ocupación, logrando revertir la medida. Fitam, en esa última localidad, procedió a suspender a la totalidad de sus 400 trabajadores, pretextando dificultades económicas. Como respuesta, los trabajadores tomaron el establecimiento y una vez más, merced a la conciliación obligatoria arrancada con la lucha, se logró revertir la situación. En Zona Norte la ola de conflictos (que abarcó también a Del Carlo y Santini) forzó la realización de un plenario de delegados en la seccional local de la UOM. En el mismo, se evidenció las diferencias entre los sectores opositores y antiburocráticos.

Según PO, el PST seguía confiando en que la burocracia se pusiera al frente de los reclamos. Como muestra de esas expectativas se citaba una solicitada de los trabajadores de Del Carlo (donde tenía fuerte presencia el PST). En ella se consideraba que el plenario era “un gran paso adelante para frenar la ofensiva patronal evitando despidos y suspensiones”. El conflicto en esta planta se saldó con un acuerdo que reducía la jornada semanal a 3 días, pagando 4 días. PO estimaba que la solicitada mencionada no producía ningún resultado efectivo, citando el ejemplo de lo sucedido en la metalúrgica Santini. Allí la empresa había suspendido en forma indefinida a un delegado. El paro de cuatro días protagonizado por el personal de la fábrica obligó a la conciliación obligatoria, pero la patronal montó una nueva provocación, negándose a pagar los días caídos, amenazando con el despido de 400 operarios a fines de mes. Además, pretextando un atentado, la empresa declaró el *lockout* e impidió con la policía la entrada de los obreros a la planta. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo una serie de allanamientos a las casas de cinco delegados, realizados por personal de civil y sin identificación, que decían buscar a los responsables del atentado. El episodio represivo no sólo provocó el rechazo masivo del conjunto obrero del establecimiento sino que agravó el descontento de los trabajadores. Así, se organizaron asambleas y constituyeron comisiones y piquetes obreros. La movilización y la concurrencia masiva a una audiencia en el ministerio de Trabajo, forzó a la patronal a reabrir la fábrica pero negando la continuidad laboral de los delegados. Una nueva asamblea de los trabajadores planteó la huelga indefinida, con el reclamo “todos adentro o ninguno”. La seccional de la UOM de Vicente López, declaró su respaldo a las demandas pero anticipó que luego de superado el conflicto intervendría a la comisión interna. Una nueva asamblea obrera rechazó esa amenaza de la burocracia y debido a la contundencia del paro la empresa finalmente reincorporó a los delegados. Durante todo el conflicto, la sub-zona Vicente López

de la Coordinadora Norte (integrada entre otras delegaciones obreras por el personal de La Hidrófila, Editorial Abril, Ferrania y Avon) desplegó una intensa actividad de solidaridad con el mismo. Esa campaña incluyó la difusión de dos volantes de denuncia, un fondo de huelga y la convocatoria a un plenario zonal ampliado para decidir el apoyo a los trabajadores de Santini y de otros establecimientos. Este plenario, realizado el último fin de semana de septiembre (según la cobertura efectuada por el semanario del PST), se pronunció por la libertad de los delegados y activistas obreros presos y en defensa irrestricta de los cuerpos de delegados y comisiones internas combativas, atacadas por la patronal, la burocracia y la represión estatal y paraestatal²⁶. También durante septiembre en Zona Norte se destaca el triunfo abrumador (580 votos sobre un plantel de 600 operarios) obtenido por la lista Naranja en los comicios para renovar la comisión interna del personal gráfico de la Editorial Abril. Esta lista, integrada por distintas corrientes combativas de izquierda con hegemonía de PO, venía reteniendo la conducción desde 1971. Además, esta comisión interna participaba en la mesa ejecutiva de la Coordinadora de Zona Norte, siendo una de las delegaciones con mayor influencia en ese organismo²⁷.

Otra cuestión que comenzó a convertirse en un preocupante rutina fueron las amenazas recibidas por los miembros del cuerpo de delegados, comisiones internas y activistas de los astilleros de San Fernando y Tigre. Las intimidaciones se presentaban en una doble vertiente: la primera eran las acusaciones de “subversión o guerrilla industrial” que de manera sistemática y regular denunciaban las cámaras empresariales y las distintas patronales, dirigidas en contra de los activistas y delegados gremiales combativos. La segunda, eran los comunicados, volantes y llamadas telefónicas a esos militantes, de parte de los grupos fascistas (como la “Triple A” y distintas “agrupaciones” fantasmas que se reivindicaban como “peronistas” o “nacionalistas”), emplazando a los “zurdos”, “bolches”, “troskos” o “comunistas” a dejar las plantas, ya que de lo contrario serían asesinados. Ambas formas perseguían multiplicar el terror entre la masa, para lograr el aislamiento de los activistas. La respuesta de los militantes en la rama naval fue múltiple. A nivel establecimiento, cuidar y rodear con medidas de seguridad a los amenazados y hacia fuera denunciar esta campaña a la opinión pública. En este aspecto,

²⁶ECC, 12/9/75 y PO, 17 y 24/9/75. La solicitada en UH, 9/9/75. Para el Plenario, AS, 3/10/75. En esa misma publicación (13 y 26/9/75), la cobertura del conflicto en Del Carlo.

²⁷PO, 24/9/75.

resaltan dos solicitudes aparecidas en el diario más comprado por los trabajadores en aquel tiempo, *Última Hora* (que reemplazaba al clausurado *Crónica*). En la primera, una “Asamblea General de los compañeros del astillero Vicente Forte” rechazaba las acusaciones de la patronal, que equiparaban los reclamos gremiales a las acciones subversivas, colocando en el lugar de “delincuentes terroristas” a los militantes y delegados. Igual denuncia realizará días más tarde y por ese mismo medio el “Congreso General de Delegados Navales de Zona Norte”. Este organismo era en la práctica la conducción gremial reconocida por los obreros del sector, que desconocían la burocrática conducción del SOIN. La solicitada preguntaba “¿Quiénes son los subversivos de la Industria Naval?”, contrastando los reclamos por “nuestros legítimos derechos” que hacían los trabajadores “con los atropellos y arbitrariedades [que] condenan al hambre y a la miseria a los compañeros y sus familias”. Esta solicitada terminaba con una invocación por demás directa: “¡¡¡ JUZGUE LA CLASE TRABAJADORA, JUZGUE EL PUEBLO QUIENES SON LOS SUBVERSIVOS!!!”. Estos pronunciamientos buscaban dos objetivos: desarmar la campaña de prensa justificatoria de futuras represiones y crímenes contra los militantes y al mismo tiempo, condicionar a las patronales, exponiéndolas ante la opinión pública como responsables de los hechos que llevaban a la protesta obrera e indirectamente a las eventuales acciones represivas²⁸.

A lo largo del mes de octubre de 1975, se incrementó en nuestra zona las medidas de fuerza de los trabajadores ante la ola de despidos, suspensiones y reducciones de la semana de trabajo, resultado según los empresarios de la recesión económica y el excesivo garantismo laboral (que alteraba la producción e incrementaba los costos). La respuesta de las fuerzas de izquierda combinó la denuncia de la intencionalidad que encubrían las maniobras de la patronal y al mismo tiempo, una efectiva campaña de asambleas, toma de plantas y movilizaciones públicas para resistir la tendencia al crecimiento de la desocupación y el retraso en el pago de salarios. Esta última situación se hacía más dramática en la medida que la gestión del ministro de economía Antonio Cafiero aplicaba (en dosis homeopáticas) las medidas de ajuste y devaluación inaugurados por su antecesor Rodrigo. La inflación irrefrenable repercutía directamente sobre la capacidad adquisitiva de los salarios, los que a esa altura habían visto licuar los incrementos obtenidos a comienzos de julio.

²⁸UH, 4/9/75. Las mayúsculas son del original

El episodio más sobresaliente de ese proceso de lucha es el que tuvo por escenario la metalúrgica Santini. Aprovechando el desgaste que la lucha exitosa anteriormente narrada produjo entre ese contingente obrero, la seccional Vicente López de la UOM cumplió su amenaza de intervenir a los organismos de base el 30 de septiembre. Al día siguiente, una multitudinaria asamblea de trabajadores rechazó tal intervención, ratificó el mandato de los delegados combativos y reclamó una Asamblea General de la Seccional para aprobar un plan de lucha conjunto. Dos semanas después, cuando se preparaba una acción de protesta contra la intervención para forzarla a renunciar, comandos de civil allanaron el domicilio de un delegado y lo detuvieron. Al día siguiente se repitió el procedimiento cuando desde un coche sin identificación intentaron secuestrar a otros dos delegados en la puerta del establecimiento. Esta última acción terminó con uno de los activistas detenido, mientras que el segundo fue protegido por sus compañeros que lo refugiaron en el interior de la fábrica. Más tarde una comisión policial se presentó, ahora sí legalmente con orden de captura sobre el delegado perseguido. Esa misma comisión policial debió reconocer que los otros dos delegados estaban detenidos en la misma comisaría. Como analizaba en forma contemporánea PO (al cual pertenecían dos de los arrestados), se trató de un intento frustrado de secuestro que sólo fue impedido por la valiente y decidida intervención de los trabajadores de la planta, quienes se movilizaron hasta el destacamento policial, ya que se temía por sus vidas. Este episodio demuestra claramente el grado de relación entre la empresa (que primero intentó la expulsión de los delegados y activistas), la burocracia (que intervino compulsivamente el organismo de base) y la represión estatal, que finalmente consiguió su objetivo de desarraigarlos de la masa obrera con su arbitraria detención. El mismo semanario político convocaba a todas las comisiones internas y cuerpos de delegados de la zona para exigir a la seccional metalúrgica urgentes y enérgicas medidas para obtener la libertad de los detenidos. Como correctamente señalaba PO, no se trataba de un ataque contra una interna en particular sino potencialmente contra cualquiera que opusiera resistencia a los planes de económicos de ajuste gubernamental y su implementación práctica por parte de los empresarios²⁹.

Durante el mes de noviembre, el eje de la lucha reivindicativa en Zona Norte y de la reactivación del funcionamiento de la Coordinadora local fue la reacción defensiva de los distintos contingentes obreros ante la represión contra el activismo, expresado en la detención, secuestros,

²⁹PO, 16 y 24/10/75.

golpizas y asesinatos de militantes fabriles. El primer episodio fue el secuestro el 5 de noviembre por casi un día que sufrieron el Secretario General de la Comisión Interna del astillero Astarsa y dos delegados del personal de ese establecimiento (uno de ellos el responsable político de la agrupación de JTP del astillero). Estos militantes, apresados por un grupo sin uniforme, fueron encapuchados, llevados a un lugar no identificado y torturados con golpes y picana eléctrica. La respuesta de los trabajadores fue fulminante: declararon un paro inmediato en todos los astilleros de Zona Norte hasta la aparición de los secuestrados. Esta presión, que también se dirigió hacia la intervención del SOIN, logró su objetivo cuando al día siguiente y muy maltratados, los delegados fueron liberados. Dos días más tarde, se repitió la acción intimidatoria con el secuestro de un delegado del vecino astillero Acquamarine, igualmente liberado luego de ser torturado³⁰.

El 8 de noviembre, *El Cronista Comercial* informaba sobre un conflicto en el laboratorio Squibb. Sus más de 1.000 trabajadores se encontraban en asamblea permanente desde la semana anterior, por un conflicto iniciado a comienzos de octubre con paros progresivos para imponer un petitorio de 18 puntos. Se reclamaba: el reconocimiento de la comisión interna, que no se descontaran las horas laborales dedicadas a la actividad gremial y se les permitiera a sus miembros la entrada fuera del horario de trabajo, por una cuestión de seguridad. Mientras tanto, el sindicato nacional (ATSA) había pactado una conciliación con el ministerio de Trabajo que incluía el desafuero de los delegados del personal. El conflicto se agravó cuando (luego de montarse un cerco policial en la puerta del laboratorio) intervino un juez federal que declaró al mismo encuadrado en la Ley de Seguridad, ilegalizándolo. Al mismo tiempo, el juez ordenó la presencia compulsiva de la Secretaria y del Subsecretario de la comisión interna a Tribunales de Capital Federal, la que se realizó en medio de un operativo policial que se asimilaba a un secuestro, en móviles y con personal de civil. Durante el tiempo que duró la declaración ante el juez, el resto de la comisión interna organizó una toma del establecimiento reteniendo al personal ejecutivo del laboratorio, para garantizar el regreso indemne de sus compañeros. Estos, luego de prestar declaraciones en un marco donde el propio juez buscó intimidarlos, regresaron de madrugada a la planta. La asamblea decidió entonces el ya señalado levantamiento de la asamblea permanente, pero continuando

³⁰ECC, 8/11/75. Díaz (1999), páginas 80 a 91. LR, 14/11/75. Agreguemos que este delegado, Luis Cabrera, será luego secuestrado y asesinado a comienzos de febrero de 1976.

con el trabajo a reglamento y quite de colaboración como forma de preservar el respeto hacia los delegados³¹.

El mismo día 8, la Editorial Abril publicó una solicitada en la que denunciaba una “suerte de terrorismo industrial que sólo busca la destrucción de nuestras instituciones y de nuestro modo de vida, mediante el más artero caos social”. Esa solicitada (como días más tarde explicará PO) encubría la intención empresarial de cesantear a todo el combativo cuerpo de delegados del establecimiento, que por aquella fecha estaba en plan de lucha reclamando urgente recomposición de los salarios. La denuncia de la empresa sería seguida por comunicados intimidatorios de comandos de ultraderecha en los que se condenaba a muerte a 29 miembros del cuerpo de delegados y de la comisión interna³².

A la semana siguiente, se inició una huelga de brazos caídos por parte del personal obrero y administrativo de la automotriz Ford, en General Pacheco. La misma se realizaba en demanda del pago de un aumento dispuesto por el gobierno que la empresa se resistía a abonar. La medida de fuerza dispuesta por la comisión interna luego de una asamblea, era continuidad de un plan de lucha que llevaba casi un mes, con quite de colaboración y trabajo a reglamento. Esta medida (que culminaría días después con una victoria obrera), marcó la reactivación del trabajo de organización y agitación de los militantes político-sindicales de izquierda que habían quedado dentro de la empresa luego del despido masivo a mediados de julio. Esa presencia y accionar se mantendrá constante hasta el golpe de Estado de 1976, pero recurriendo a un trabajo cada vez más cerrado y clandestino debido a las duras condiciones de control interno vigentes en la empresa³³. Otro importante episodio de movilización proletaria fue la multitudinaria marcha de trabajadores navales, avalada y acompañada por otras delegaciones obreras integrantes

³¹ECC, 8/11/75. PO, 19/11/75. La referencia sobre la acción de la justicia federal nos fue narrada por Cristina (2002/3), por aquel entonces Secretaria General de la comisión interna y participante directa del episodio. Quien quedó a cargo de la toma del establecimiento como garantía de la seguridad de sus compañeros fue “el Chino” Cardozo, delegado obrero y responsable de una agrupación clandestina de la OCPO en el laboratorio. Este cuadro político obrero (uno de los más importantes de esa organización en Zona Norte) estaba enfrentado políticamente con la delegada de JTP. No obstante, cumplió con el deber de solidaridad proletaria con sus compañeros. Fue asesinado a comienzos de 1976 cuando un impresionante operativo militar intentó secuestrarlo.

³²LP, 8/11/75. PO, 26/11/75.

³³LO 13/11/75. “Petiso” (2003).

de la Coordinadora Norte, que se realizó el viernes 14 de noviembre por el centro de la localidad de Tigre. En ella participaron más de 3.500 trabajadores de más de 15 astilleros de la zona y consistió en un recorrido a pie a la Regional Tigre de la policía provincial y más tarde a la Municipalidad. En ambos casos, entregaron un petitorio rechazando y condenando los actos de violencia y amenazas contra los delegados y activistas navales que se habían producido la semana anterior. Denunciaban que esas amenazas eran producto de las acusaciones de “subversivos” que se venían realizando contra esos activistas. La movilización fue de tal magnitud que forzó a la propia intervención del sindicato (alineada con la burocracia del gremio a nivel nacional) a dar respaldo a la marcha. La misma terminó con una concentración en la plaza del Canal San Fernando. Uno de los delegados que hizo uso de la palabra expresó: “En la medida que protestemos por la violencia de que se nos hace objeto conseguiremos que nos dejen trabajar sin provocar esta zozobra que aflige a nuestras familias (...) si nos hubiéramos mantenido en silencio nuestros compañeros habrían desaparecido quizá para siempre”. Esta actitud de denuncia activa se reforzaba con una solicitud firmada por las mujeres de los trabajadores navales, titulada “Basta de atropellos!!!”, en la que señalaban la intención antiobrera de los secuestros, la responsabilidad de la empresa y los dirigentes burocráticos en esos secuestros. Según PO, estos atentados produjeron como reacción una reactivación de las tareas de la Coordinadora zonal³⁴. Justamente, el 15 de noviembre se realizó un Plenario de dicha Coordinadora convocado antes de la manifestación que acabamos de reseñar con la consigna de elaborar un plan de lucha unificado en torno al reajuste inmediato de salarios; oponerse a los pactos con la patronal firmados por las direcciones burocráticas a espaldas de los trabajadores; contra toda intervención estatal en los sindicatos recuperados y para detener la ola represiva, investigando y castigando los asesinatos cometidos por los grupos parapoliciales amparados por el gobierno³⁵. En la propuesta de declaración impulsada por la Mesa Ejecutiva, luego de balancear la dirección del proceso económico, social y político desde julio de 1975, se proponía retomar y profundizar los puntos expresados en el Programa de Beccar. Además, se agregaban: mayores precisiones acerca de la defensa de las libertades públicas y por la protección a la vida y seguridad de

³⁴UH, 14/11/75; LR, 14/11/75; LN, 15/11/75; PO, 10 y 19/11/75. Gastón (2002)

³⁵Convocatoria al Plenario del 15 de noviembre de 1975, firmada por “Delegados, Activistas, Agrupaciones y Obreros de Base de la Zona Norte”, sin fecha de impresión.

los activistas obreros; por la plena vigencia de la democracia sindical y la devolución de los sindicatos intervenidos; medidas de emergencia a cargo del Estado para controlar los precios y tarifas e intervención frente a la recesión, mediante la estatización de establecimientos con control obrero de la producción y de las finanzas de la empresa. Al carácter amplio y abarcativo del programa aprobado a fines de julio, se sumaban dos puntos que reflejaban la coyuntura: por una parte, la consigna “Contra los golpes de Estado y el creciente poder político de las FFAA en el gobierno” expresaba el convencimiento de que una ruptura del precario orden institucional sólo podía deparar más sufrimientos a la clase trabajadora. Por otro lado, su invocación final que recoge el título de la propuesta

“Porque la Coordinadora es de los trabajadores. Pertenece a los trabajadores y está a su servicio y su programa refleja y reflejará cada vez más las ansias de libertad, trabajo, bienestar y democracia real que laten en todos los corazones de los trabajadores. Por eso, es aquí donde deben unirse todas las corrientes sindicales antipatronales y antiburocráticas, cualquiera sea el partido que las impulse; por eso deben estar presentes los partidos obreros y populares que se enfrenten al gobierno de los explotadores y a sus instituciones para la represión y el engaño, por eso debe estar todo activista y todo compañero inquieto y preocupado por los problemas que tenemos que enfrentar los obreros. Porque la Coordinadora no es de nadie en particular. La COORDINADORA ES DE LOS TRABAJADORES”³⁶.

La redacción definitiva de este documento da cuenta del nivel de discusión interna y la necesidad de reagrupar urgentemente todas las fuerzas políticas (y no únicamente de izquierda) para enfrentar lo que se preanunciaba como una ofensiva total sobre las posiciones populares.

A pocos días del secuestro de los obreros navales, se conoció otro grave caso de represión contra delegados y activistas. En este caso fue el masivo secuestro de una delegada de Fate electrónica, un ex delegado paritario de ese mismo establecimientos y tres activistas de Eveready, Fitam y Cormasa, todos de la rama metalúrgica. Los secuestradores vestían ropas de fajina de las Fuerzas Armadas. La delegación obrera que

³⁶“La Coordinadora es de los trabajadores”, propuesta de declaración de la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora de Zona Norte, 15 de noviembre de 1975. Las mayúsculas son del original. Firman esta declaración delegaciones de Tensa; Matarazzo; Squibb; Santini; La Hidrófila; Avon; 3M; Ford; Terrabusi, Imperial Cord y de empleados del Banco Nación de Zona Norte.

de inmediato se dirigió al cercano batallón de Boulogne reclamando por sus compañeros, recibió la confirmación extraoficial que esa fuerza estaba participando de operativos similares y agregaban: “En dependencias policiales nos dijeron que el ejército es el que toma las decisiones políticas en cuanto a la represión”. A nivel interno, el personal de FATE decidió un paro total de actividades hasta que aparecieran con vida sus compañeros secuestrados y mandaron una delegación a la UOM Vicente López para que el gremio convocara de urgencia una asamblea de delegados. La idea era que dicha asamblea adoptara medidas de movilización y lucha en defensa de la integridad física de los activistas y delegados. Como en otras oportunidades, la respuesta de la dirigencia burocrática de la seccional dilató por más de una semana tal convocatoria. Igualmente representativa fue la actitud del partido de gobierno: el bloque de diputados nacionales del FreJuLi se negó a recibir a una delegación de trabajadores de la empresa. Estas actitudes contrastan claramente con las asumidas por los cuerpos de delegados, comisiones internas y personal de fábricas de Zona Norte quienes se plegaron al reclamo amplificando las denuncias, prestaron recursos económicos y en algún caso, pararon en solidaridad con los obreros de Fate. En este sentido sobresalieron los operarios del astillero Astarsa, de la metalúrgica Del Carlo y de Editorial Abril. La solidaridad, al igual que lo ocurrido en ocasión del secuestro de los navales, fue motorizada y contó con el aval de los núcleos de activistas de la Coordinadora zonal, que a esta altura se encontraba desbordada frente a la ofensiva multiforme de empresarios, gobierno y burocracia sindical (despidos, procesamiento de delegados y militantes, intervención a los organismos de base) y a la acción represiva tanto de las fuerzas legales (policía, FFAA) como paraestatales (los distintos comandos fascistas). Luego de 5 días, dos de los secuestrados aparecieron con vida pero brutalmente torturados. En el testimonio de uno de ellos se afirmaba haber escuchado gritos de dolor, provenientes de las torturas que recibía la delegada secuestrada. La aparición con vida de estos dos activistas podía responder al mismo tiempo al éxito de las acciones de solidaridad obrera inmediata, pero también a un claro mensaje de los secuestradores: a través del relato del secuestro y las torturas, se anticipaba el destino que podía correr en el futuro quien fuese caratulado como “subversivo”. El 25 de noviembre, los trabajadores de Fate, en conjunto con una importante delegación de operarios del laboratorio Squibb, se movilizaron hacia el ministerio de Trabajo y más tarde al Congreso Nacional, como parte del plan de movilización para obtener la libertad de los delegados secuestrados. Casi quince días después de los secuestros, se informaba que el Ejército

reconocía que los dos delegados estaban detenidos en el Regimiento 1 (Patricios), a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Como analizaba PO, este hecho “*ha venido a confirmar que el Ejército ha pasado al frente en la tarea de represión de la vanguardia obrera, ante el descalabro del gobierno peronista, y que ha tomado como su centro de operaciones la Zona Norte del Gran Bs. As. Ha venido a confirmar que el Ejército opera con los métodos de las 3 A*”³⁷.

A fines de noviembre, un grupo civil no identificado (la policía y las FFAA, como en otras oportunidades, negaron sistemáticamente su responsabilidad) secuestró a un delegado gremial del sector producción, una delegada administrativa y un obrero sin militancia sindical, todos ellos de la fábrica de cosméticos Avon (Florida, partido de Vicente López). La reacción de los trabajadores consistió en iniciar un paro por tiempo indeterminado hasta que aparecieran con vida sus compañeros. Casi en forma simultánea, los trabajadores de la metalúrgica Tensa denunciaron el secuestro de otros dos delegados del establecimiento³⁸. Todos los hechos involucraban a establecimientos con organismos de base conducidos por activistas de izquierda y todos ellos principales protagonistas del movimiento de la Coordinadora. El objetivo explícito era descabezar a la vanguardia obrera de la zona, para, una vez desarticulada la Coordinadora, avanzar a fondo contra las posiciones del conjunto de la clase trabajadora.

Por esos días, la Coordinadora de Zona Norte repartió en los principales establecimientos fabriles un volante³⁹, convocando a una movilización local. Este tipo de convocatoria parece ser que formaba parte de una estrategia común de todas las Coordinadoras zonales, de acuerdo a la información de propuestas similares presentadas en forma contemporánea que pudimos relevar. Los redactores del volante relacionaban los actos de violencia anti-obrera directamente con las luchas para enfrentar las políticas económicas del gobierno (“la misión Cafiero”). Por esa razón, llamaban a una movilización sin distinción de ideologías ni de

³⁷LR, 17/11/75; AS, 21/11/75. PO, 26/11/75 y 3/12/75. El destacado es nuestro.

³⁸ECC, 28/11/75. En AS, 5/12/75 se hace referencia también a la solicitada de los trabajadores de Tensa. Lucita (2003). Los dos delegados y el activista secuestrados en Avon pertenecerían, según ese último testimonio, al “Peronismo de Base”. En una fecha sin determinar fueron detenidos dos activistas del GOR en ese mismo establecimiento, uno de ellos, importante cuadro político de la organización y delegado en esa planta.

³⁹Volante de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados de Zona Norte, 28 de noviembre de 1975.

partidos políticos tras dos ejes centrales: la lucha por los derechos democráticos y reclamando por aumentos de emergencia. En un análisis más pormenorizado, la mayoría de las demandas iban dirigidas contra las prácticas terroristas apañadas por el Estado, la libertad de los centenares de trabajadores presos y la supresión de toda la legislación represiva, el Estado de Sitio y la participación de las FFAA en la represión. Este orden de prioridad demuestra lo adecuado de la definición de las tareas de la hora. En la medida que la ofensiva terrorista eliminara a los mejores cuadros político-sindicales, cualquier otro tipo de reivindicación basada en una masiva movilización se tornaba imposible.

En diciembre de 1975 en Zona Norte del Gran Buenos Aires, la dinámica del conflicto laboral giró en torno de luchas parciales y en un incremento dramático de la represión sobre los núcleos de militantes y activistas. En el primer sentido, resaltan las medidas de acción directa llevadas a cabo por los ferroviarios del Ramal Tigre de la línea Mitre, partiendo de la combativa seccional de la Unión Ferroviaria de Victoria. Este episodio formaba parte de un intenso proceso de conflictividad protagonizada por los estatales en todas las ramas de la administración provincial y nacional, como los trabajadores de salud, justicia, educación y organismos de gobierno. El otro episodio destacado fue el triunfo, luego de un largo conflicto, de los 1.200 trabajadores del laboratorio Squibb. El sector empresario debió aceptar un petitorio de 20 puntos que incluían el 40% de aumento salarial; el reconocimiento de la comisión interna; el pago de los jornales caídos; participación de la comisión interna junto al servicio médico para establecer los criterios de salubridad y una larga lista de mejoras en las condiciones de trabajo. Este triunfo, aunque revisiera el carácter de caso aislado, seguía demostrando la capacidad de la militancia fabril (muy activa en esa planta) para encabezar y llevar a buen término un reclamo, aun en condiciones cada día más adversas. Este último aspecto actuaba inconscientemente como un velo sobre una parte de los militantes (y no sólo de esa planta) y de las organizaciones de izquierda, enturbiándoles una visión objetiva de las condiciones de lucha futura, lo que a su turno se manifestará como la negación a iniciar un repliegue⁴⁰. Respecto a la represión, el 12 de diciembre secuestraron a la Secretaria General de la Comisión Interna de la fábrica textil Productex (Villa Adelina, partido de San Isidro), junto a su esposo. Tres días más tarde, otro trabajador metalúrgico de la firma Bendix (San Isidro) fue

⁴⁰ECC, 12/11/75. Cristina (2002/3). Este triunfo le costará en los próximos meses al activismo el asesinato de uno de sus delegados y después del golpe la ocupación militar del laboratorio, secuestros y cárcel para los activistas más reconocidos.

igualmente objeto de un secuestro. Durante todo el mes, una reconstrucción provisional permite registrar por lo menos tres asesinatos, con iguales características: los cuerpos fueron dejados en lugares abandonados pero cerca de alguna ruta, encontrándose a su lado volantes o letreros que indicaban que los muertos eran subversivos⁴¹. Esta manifestación zonal de la represión se inscribía en un contexto más amplio y abarcativo: a fines de 1975, según el relevamiento de una publicación del peronismo de izquierda existían cerca de 4.000 presos políticos reconocidos en todo el país⁴², de los cuales varios centenares eran militantes político-sindicales, delegados y miembros de comisiones internas. Además, de acuerdo a una imprecisa y conservadora contabilización se registraban por lo menos un centenar de secuestrados, antecedente de lo que más tarde se conocería con la figura del “detenido-desaparecido”.

Los balances del año 1975 de las fuerzas políticas de izquierda y de la Coordinadora metropolitana

Hacia finales de 1975, las organizaciones de izquierda hacían su evaluación del año y en especial de la experiencia de la Coordinadora. El PST, en el último número del año de su publicación partidaria, le dedicaba una nota, en donde responsabilizaba a la JTP de haberse negado a “participar en un Frente Único con los dirigentes burocráticos”, lo que habría restado efectividad a las luchas. También acusaba a la JTP porque durante la oleada de despidos y suspensiones “no realizaron prácticamente ningún esfuerzo por unificar los conflictos, ya que buscaban un acuerdo político con un sector del gobierno”. Por ese motivo, según el PST, “se acortaron las posibilidades de construir y extender la influencia de las Coordinadoras, que no han pasado de ser hasta el momento un embrión, un pequeño punto de partida para formar una dirección de alternativa del movimiento obrero”. Reconocía que las Coordinadoras podrían alcanzar esa condición en tanto tomara en sus manos la defensa de los derechos democráticos (lo que no hacía la burocracia) y siguiera presionando a las direcciones del peronismo ortodoxo para impulsar la lucha salarial⁴³. El PRT, en tanto, auguraba un resurgir de las luchas obreras, nuevas y más intensas movilizaciones, ya no solamente protagonizados por el proletariado sino también por otros sectores populares.

⁴¹Graham-Yooll (1989), páginas 381 y 383. ECC, 12 y 15 /12/75.

⁴²EA, 23/12/75.

⁴³AS, 30/12/75.

Para lograr un cauce efectivo de ese movimiento proponía “coordinar esas movilizaciones, hacerlas converger hacia polos unitarios, trabajando incansablemente en la propagandización de las ideas de los métodos revolucionarios”. Esto último era un reconocimiento a la importancia de seguir sosteniendo organismos de confluencia como las Coordinadoras y a la vez convertirlos en herramienta de lucha⁴⁴. PO, que a mediados de diciembre realizaba su primer Congreso Nacional, también opinaba sobre el tema. En su balance anual se detenía a analizar el proceso de las Coordinadoras, rescatando el papel jugado durante las jornadas de junio-julio, pero les criticaba la falta de continuidad y su incapacidad para transformarse en un real alternativa de dirección del movimiento obrero. Esas falencias podrían revertirse si las Coordinadoras se transformaban en un referente de los distintos partidos que se reclamaban obreros o antiimperialistas, iniciando una campaña en defensa de los derechos democráticos, contra la represión y exigiendo la salida de todo el gobierno peronista, pronunciándose contra todo golpe y por elecciones generales inmediatas sin proscripciones. Denunciaba, en esa perspectiva, a todas aquellas fuerzas políticas que alentaban un recambio dentro del mismo gobierno (la “solución Luder”) o, peor aún, como el PC, un “gobierno de coalición cívico militar”⁴⁵. El GOR en su balance destacaba las importantes potencialidades de las Coordinadoras en una coyuntura caracterizada por un vacío de dirección. No obstante, señalaba que aun se seguían repitiendo en los plenarios zonales “viejas prácticas burocráticas” como el de poner las Coordinadoras al exclusivo servicio de ciertas fuerzas políticas. El GOR criticaba la tendencia a imponer declaraciones sin tener en cuenta a todos los sectores que participaban en ella (aún los minoritarios), la actitud de abandonar las deliberaciones o no concurrir a las reuniones como forma de manifestar el desagrado por las políticas que podrían llegar a implementarse. Todas estos comportamientos, para el GOR, entorpecían el funcionamiento del organismo y le quitaban efectividad. Proponían que en un nuevo Plenario metropolitano (que anunciaban por ese medio) se discutiera un nuevo Programa, haciendo eje en las consignas económicas y salariales, contra la desocupación y por el fin de las políticas represivas. Este programa debería difundirse con una intensa campaña de agitación y propaganda, llegando con ese Programa “a todas y cada una de las fábricas, estén o no en conflicto, que se planteen actos y movilizaciones locales y zonales; que unifique y centralice las luchas y que tienda a la generalización de las

⁴⁴EC, 17/12/75.

⁴⁵PO, 17/12/75.

mismas”. Finalmente, y ante el incremento represivo, proponían que las Coordinadoras ajustaran su accionar al mismo. Asumían su responsabilidad como organización revolucionaria en ir incorporando prácticas de autodefensa obrera e implementar de manera progresiva métodos clandestinos de organización⁴⁶. El flamante Bloque Sindical del Peronismo Auténtico, en lo que será una de sus declaraciones más explícitas, dedicaba una extensa nota a la posición de esa organización con respecto a la situación nacional y las Coordinadoras en especial, en el último número de su publicación, que al igual que el partido fue ilegalizado y prohibido al día siguiente. La crónica destaca la participación en el acto de lanzamiento de esa rama gremial de Zona Norte del Gran Buenos Aires, de distintas delegaciones, agrupaciones, comisiones internas y delegados de distintos establecimientos. Representando al Bloque Regional concurre Aldo Ramírez, uno de los delegados del astillero Astarsa, secuestrado el mes anterior y liberado después de una importante movilización del conjunto de trabajadores navales. En ese mismo acto, se dio a conocer una declaración en la que se señalaba:

“Las Coordinadoras -alternativa de conducción gremial- y el Bloque Sindical Peronista -herramienta a partir de la cual se construye la organización política representativa de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo- son el primer aspecto del saldo principal que nos deja un año de resistencia activa [...], la Coordinadora debe canalizar la participación activa de los trabajadores en contra de todo intento de salida al margen de la del respeto a la soberanía popular [...], el BSP debe afianzar las fuerzas gremiales del Peronismo Auténtico proponiendo una salida popular a la crisis a través de la Coordinadora, exigiendo la aplicación del Programa del Segundo Plenario y organizando las tareas de movilización necesarias”⁴⁷.

Todas las declaraciones que hemos reseñado, más allá de las lógicas diferencias e inclusive de las acusaciones cruzadas que se dirigían las distintas organizaciones, presentan no obstante algunos significativos puntos en común. En primer lugar, reconocían el protagonismo de la lucha obrera para desplazar a los sectores más reaccionarios del gobierno; el rol organizador que jugaron las Coordinadoras, ante la inacción y parálisis de la burocracia sindical; la imperiosa necesidad de mantenerlas en pie y profundizarlas y la urgencia de discutir un Programa formal con un conjunto de reivindicaciones de carácter democrático (fin de

⁴⁶BCC, diciembre de 1975.

⁴⁷EA, 23/12/75.

la represión legal e ilegal, libertad a los presos, respeto a los derechos de agremiación) y la lucha por los salarios, contra la desocupación y la intensificación de la explotación en las condiciones de trabajo. Además, todas las organizaciones sin excepción consideraban que mientras se mantuviera movilizada la clase trabajadora, el riesgo latente de un golpe militar quedaba postergado. En el mediano plazo, si bien no se descartaba la posibilidad de una intervención militar en forma de gobierno dictatorial, la misma podía acelerarse debido a la falta de una alternativa dentro de la institucionalidad burguesa. Por tal motivo, las fuerzas de izquierda, con distintas consignas planteaban la salida del gobierno peronista y la convocatoria a elecciones, que dilataba y quitaba argumentos a la posible irrupción militar. En este punto, aún las organizaciones que practicaban la lucha armada impulsaban tal proceso democratizador, convencidas que al igual que en junio-julio se podía abrir un paréntesis que aliviara la presión que sufrían sus militantes. Se intentaba así ganar tiempo, reconociendo autocríticamente lo incipiente de su propio desarrollo organizativo.

La evaluación que sobre sus apenas 6 meses de vida hicieron las propias Coordinadoras no podría ser distinta al realizado por las fuerzas políticas de izquierda que la impulsaban, aunque en su carácter de organismo pluralista presentara los matices propios de su condición de agrupamiento colectivo. Una referencia indirecta pero valiosa, por reflejar el balance de esta instancia de coordinación, es la convocatoria a una Asamblea Popular Multisectorial, a realizarse en un estadio de fútbol de Ensenada, impulsada por la Coordinadora de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Si bien esa Coordinadora no integraba el espacio organizativo de la Coordinadora metropolitana, se había movilizado en junio-julio, encarado tareas comunes con las otras Coordinadoras zonales y, en el orden organizativo y en lo relativo a la participación de fuerzas políticas, su trayectoria era similar a sus homólogas metropolitanas. La convocatoria era el primer intento de trascender el marco meramente gremial. Como pretendían algunas fuerzas de izquierda, se proponía nuclear a su alrededor a un conjunto de organizaciones populares (partidos políticos, Centros de Estudiantes secundarios y universitarios y hasta una flamante Comisión de Familiares de Presos Políticos), para impulsar un programa democrático amplio. La concepción de este tipo de Asamblea Multisectorial (el PRT le daba el nombre de Cabildo Abierto Popular) era reunir en un solo haz a una serie de entidades representativas con el fin de potenciar los reclamos de los trabajadores. El objetivo era constituir un amplio frente (acaudillado por la clase obrera) que pusiera límites a la ofensiva reaccionaria y a la vez multiplicara la

lucha democrática al sumar y articular otros contingentes a esa lucha. Se buscaba así superar una de las falencias observables en las jornadas de junio-julio, es decir, la falta de participación activa y la solidaridad de otras fracciones sociales. El hecho que un conjunto de 5 partidos políticos y sus respectivas juventudes, la Federación Universitaria de La Plata y una Coordinadora de Estudiantes Secundarios (entre otros adherentes), avalara y participara de esta convocatoria era un síntoma de maduración de la vanguardia obrera organizada, quien se demostraba capaz de poner en el orden del día los problemas de la clase, sumando a sus aliados naturales del campo popular, es decir los sectores de la pequeña burguesía movilizados. No obstante, algunas organizaciones de izquierda veían con recelo la conformación de este tipo de “multisectoriales”, por la influencia que podrían tener en ella sectores de la burguesía⁴⁸.

Antes de finalizar el año, la Coordinadora metropolitana emitió dos declaraciones, en las que se pronunciaba sobre dos cuestiones centrales: la situación particular de la clase obrera y los ataques represivos que sufrían sus sectores de vanguardia. En el primer caso, pudimos consultar dos versiones: una en forma de volante “mariposa” y otra, igualmente en forma de volante, pero con mayor desarrollo argumentativo. Bajo el título “El año termina, pero nuestra lucha sigue...”, la Coordinadora metropolitana proponía movilizarse por el siguiente plan reivindicativo mínimo: “1º) Aumento general a cuenta de un 130% (índice del costo de vida desde Junio) de AUMENTO SOBRE LOS CONVENIOS. 2º) Reapertura inmediata de las paritarias. 3º) Libertad a Gutiérrez, Piccinini, Jozzami y todos los presos gremiales, políticos y estudiantiles. 4º) Cese de la represión al Movimiento Obrero, repudiando todos los hechos de avasallamiento como a la UOM-La Matanza y Sierra Grande.” En el segundo volante mencionado, la Coordinadora trazaba un balance del año 1975 y como en el anteriormente nombrado, su título marcaba el rumbo que se debía seguir: “En defensa del Salario, del Movimiento Obrero y Nuestros Presos”. En la primera parte de la declaración, rescataba la importancia que para la historia del movimiento obrero tuvo 1975, en tanto puso al descubierto los planes de opresión de las clases dominantes y la respuesta proletaria, de la mano de un aumento en su grado de organización. Luego de identificar la continuidad entre las gestiones económicas de Rodrigo y Cafiero, señalaba que se trataba del plan de los monopolios (que afectaba igualmente a los pequeños productores y comerciantes) y que la situación como tal no cambiaría hasta tanto no cambiase el sistema de la dependencia y la explotación. Para imponer ese

⁴⁸UH, 15/12/75.

plan era necesario amordazar todo intento de rebeldía popular. Citaban como ejemplo los más de tres mil presos políticos, las setecientas víctimas de las bandas paramilitares y la acción represiva abierta de las FFAA en Tucumán, en astilleros de La Plata y frente a la UOM La Matanza, entre otros. A continuación, se destacaba la respuesta de los trabajadores cuyos picos más salientes fueron la “heroica resistencia obrera en Villa Constitución y Sierra Grande”, pero que también se reflejaron en aquellos conflictos exitosos: establecimientos metalúrgicos, Mercedes Benz, Grafa, bancarios, UTA, periodistas, navales y judiciales. Esta resistencia había permitido recuperar gran cantidad de organismos de base fabril de las manos de los dirigentes sindicales traidores. También, “que en los sectores más combativos se plantee la construcción de una alternativa de conducción del movimiento obrero desde los sindicatos y la CGT, la coordinadora de gremios, comisiones internas y cuerpos de delegados en lucha y las coordinadoras por gremio: Metalúrgico, Sanidad, UTA, Bancarios, ATE, etc”. La declaración terminaba con una evaluación del impacto político que tuvo el accionar de la Coordinadora durante 1975 y su proyección: “Nuestra lucha masiva, es lo que ha llevado al gobierno a una crisis política desde la caída de López Rega. Más allá de las peleas por la manija entre los distintos sectores del gobierno, la partidocracia liberal y las FFAA, estos sectores no se ponen de acuerdo porque la resistencia obrera popular cuestiona toda salida al margen de la voluntad popular”. El cierre, que incluye las cuatro consignas presentadas en el volante anterior, subrayaba la intención de seguir movilizándose en torno a dos ejes centrales: “CONTINUAR LUCHANDO POR NUESTROS SALARIOS Y LA LIBERTAD DE NUESTROS PRESOS”⁴⁹.

Respecto a la represión, la Coordinadora metropolitana elaboró una declaración que sólo fue difundida en los periódicos políticos que intentaban romper la censura abierta que amordazaba a la oposición de izquierda. Bajo el título de “La guerrilla industrial, un nuevo cuento para perseguir a los trabajadores”, pasaba a analizar el sentido de esa campaña de acción psicológica, que arreciará hasta el golpe militar de marzo de 1976. En primer lugar, la declaración identificaba quiénes y a través de qué medios se lanzaban esas acusaciones, que tenían como blanco principal a los obreros en lucha. Más adelante, al historiar los instrumentos de lucha del proletariado, se referían a la movilización. Esta

⁴⁹“El año termina, pero nuestra lucha sigue...”; “En defensa del Salario, del Movimiento Obrero y Nuestros Presos”. Volantes de la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Diciembre de 1975. Las mayúsculas son del original.

última, como herramienta no era nueva, lo que sí era novedoso es que dicha movilización se tuviera que realizar por fuera de los organismos tradicionales ante la traición de los dirigentes que usurpaban su dirección. Así se explica la creación de las Coordinadoras metropolitanas, como alternativa de lucha de los trabajadores. La declaración continúa preguntándose “¿Porqué nos acusan de ‘guerrilla industrial?’”. La respuesta es contundente: a pesar de haber puesto en juego todo el arsenal represivo el sistema de explotación no conseguía desactivar la resistencia obrera. La represión, tampoco era una manifestación original, y cita como ejemplos al coronel Falcón, la Semana Trágica, los fusilamientos de la Patagonia, el asalto a los sindicatos en 1955 y además las sucesivas represiones a los trabajadores del “Lisandro de La Torre, el Conintes, la acción contra el SiTrac-SiTram y el aplastamiento de los ‘Cordobazos, Tucumanazos y Rosariazos’”. Al gobierno peronista (a quien caracteriza de antipopular) ya no le alcanzaba la interminable lista de víctimas que provocaba la “Triple A” y debía utilizar masivamente a las FFAA. “La única diferencia con otras represiones al movimiento obrero es que hoy se hace en nombre del ‘combate a la guerrilla industrial’. Hoy la clase trabajadora ya no se traga estos motes como lo prueban las movilizaciones de Astarsa, metalúrgicos de La Matanza y las medidas tomadas en distintos establecimientos de la Zona Norte del Gran Buenos Aires contra la represión”. La declaración señala que quienes impulsaban esa campaña eran viejas figuras del campo reaccionario y al mismo tiempo afirma: “Tampoco nos asusta que lo hagan en nombre de un partido democrático, ya que hasta ahora ningún trabajador radical ha levantado un dedo para delatar a sus compañeros”, en una transparente referencia a las acusaciones de Balbín, principal vocero de tales denuncias. Y concluye: “Para los trabajadores la única ‘guerrilla industrial’ es la de quienes especulan con el mercado negro, el contrabando, la sobrefacturación, los bajos salarios, las suspensiones, las quiebras fraudulentas. Pero los trabajadores no conocemos que ninguno de esos ‘guerrilleros’ se halle detenido. Y nosotros los conocemos por nombre y apellido, a cualquiera de ellos: Ford, Bunge y Born, Alsogaray, Mercedes Benz, etc”⁵⁰.

⁵⁰EA, 23/12/75.

Aumento de la represión al activismo, nuevo plan de ajuste y reactivación de las coordinadoras

El primer trimestre de 1976, se nos ha presentado particularmente como el más difícil de reconstruir en términos de documentos producidos por la Coordinadora y también por las distintas fuerzas de izquierda. Esta dificultad muy probablemente se deba a la depuración y supresión de los archivos públicos y privados que se aplicó a partir de 1976. Por ese motivo, la crónica que desplegaremos a continuación tiene el más alto grado de provisionalidad de todo el presente trabajo. Recurriremos entonces a la información contenida en los escasos materiales de la prensa política y aquella publicada en los medios comerciales, la que seguramente no refleja en toda su magnitud los acontecimientos que se sucedían en forma contemporánea. El año comenzaba, en términos económicos, con una confirmación acerca de la crítica situación: según el instituto oficial de estadísticas, el alza del costo de la vida había sido del 19,5% en diciembre, acumulando para todo el año 1975 un 334%. Estas cifras indicaban también el fracaso de todas las estrategias aplicadas en esa materia por los distintas administraciones peronistas desde mayo de 1973 y sus diferentes ministros del área. El “Pacto Social” ya era un recuerdo lejano y los planes de ajuste “sin anestesia” como el implementado por Rodrigo parecían reaparecer en el horizonte, dado la impotencia de la receta gradualista de Cafiero. En tanto, la acción terrorista selectiva de la ultraderecha contra el activismo combativo de Zona Norte seguía su trágico derrotero. Así, el 20 de enero 3.000 trabajadores navales de los astilleros de Tigre y San Fernando volvieron a parar y manifestarse en el centro de la primera localidad, en repudio al secuestro de Carlos Álvarez, militante de la agrupación “José María Alessio” de Astersa. En una declaración a la prensa, el Congreso de Delegados de la Industria Naval, orientado por la agrupación nombrada, denunciaba: “No deja de ser sugestiva la coincidencia entre este hecho donde se pone en juego la vida de un trabajador y el replanteo de la cuestión salarial que se encuentra en marcha”. Asimismo, se anunciaba la continuidad de las medidas de fuerza y el apoyo a los trabajadores del astillero Sánchez, quienes venían protagonizando un plan de lucha desde fines de diciembre de 1975 en reclamo por el no pago de sus salarios desde dos meses atrás. En este último caso, el Congreso de Delegados concretaba su respaldo a través de la propaganda y agitación en los demás establecimientos de la actividad y un fondo de huelga para sostener las necesidades de los trabajadores y sus familiares. La intensa movilización

puesta en juego por los navales obligó a que la “delegación normalizadora” a cargo del SOIN debiera hacer gestiones para averiguar el paradero del obrero secuestrado. El 23 de enero los trabajadores de la Editorial Abril realizaron un paro de 24 horas en repudio a las amenazas de muerte que recibieron 4 delegados del personal. Finalmente, y como se temía, el domingo 25 se informaba en la prensa que había sido encontrado el cuerpo del trabajador de Astersa, Carlos Álvarez, acribillado a balazos y quemado, a un costado de la ruta Panamericana⁵¹. Mientras tanto, una entidad identificada como “Acción Patriótica Argentina” (integrada por varios militares retirados y en actividad, presidida por el ex almirante Isaac F. Rojas) publicaba una solicitada condenando y repudiando “la tiranía sindical [que imponía] el control de las fábricas por verdaderos soviets”. Días más tarde, el Cuerpo de Delegados Navales de Zona Norte, en una solicitada dirigida a las autoridades nacionales, provinciales, al movimiento obrero y a la opinión pública, se preguntaba “Otro obrero naval masacrado. ¿Hasta cuándo?”⁵².

El mes de febrero comenzó con la novedad política del relevo ministerial en cuatro áreas estratégicas: Economía, Trabajo, Justicia y Defensa. Los analistas políticos coincidían en que se trataba de un intento exitoso de reconstruir la influencia del grupo “lopezreguista” en el gobierno. Ante el progresivo deterioro del mismo, éste habría intentado una última y arriesgada apuesta: implementar un plan de ajuste económico ultraliberal (en la línea inaugurada por Rodrigo) y un recrudescimiento de las políticas represivas (se hablaba de legalizar la pena de muerte para delitos “subversivos”). Con estas medidas se buscaba dejar sin argumentos a aquellos que auspiciaban el golpe de Estado militar, pero si estas políticas no arrojaban los resultados esperados, desnudarían la impotencia del gobierno peronista de mantener bajo el régimen parlamentario la continuidad del sistema de dominación capitalista⁵³.

Cafiero se despidió con un incremento (según cifras oficiales) del 14,6% del costo de vida durante enero. Su reemplazante, Mondelli, pensaba aplicar un programa a mediano plazo que dejara de lado los ajustes graduales de su predecesor. Si bien la presentación formal del plan se postergó por un mes, algunas de sus principales medidas trascendieron a la prensa comercial de aquellos días: un aumento salarial de emergencia (que equivalía a menos de la mitad del incremento del costo de la

⁵¹ECC, 21/1/76; LN, 24/1/76; UH, 21 y 25/1/75. Díaz (1999), página 89. Morelli (2005).

⁵²LN, 26/1/75; UH, 31/1/76.

⁵³Véase, Dearriba (2001) y Kandel y Monteverde (1976).

vida en los últimos 60 días); liberación total de los precios; aumento de las tarifas de combustibles y servicios públicos del 80%; devaluación del peso; reducción del gasto público en materia social; privatización de empresas estatales; congelamiento de la planta de empleados públicos y pedido de un préstamo urgente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Analizando estas medidas que impactarían de manera central y prioritaria en los sectores asalariados, no se podía esperar otra respuesta que un recrudescimiento de la conflictividad social de igual o mayor magnitud que en junio-julio de 1975, pero con una diferencia cualitativa: los tiempos políticos se acortaban y el gobierno se encontraba en un estado de mayor debilidad⁵⁴.

A todo esto, desde comienzos de enero en las cúpulas sindicales se venía desarrollando una dura puja entre las respectivas conducciones de la CGT y las “62 Organizaciones”. Al frente de la primera se encontraba Casildo Herreras, quien intentaba despegarse del gobierno ante el transparente cuadro de descomposición política en el que estaba inmerso. En las “62 Organizaciones”, por el contrario, su líder Lorenzo Miguel se empeñaba en sostener a María Estela Martínez de Perón, convencido que su caída arrastraría también a los dirigentes sindicales oficialistas. Su temor era que un nuevo gobierno de carácter dictatorial y abiertamente antiobrero no necesitara los servicios de los dirigentes peronistas ortodoxos. Como la prensa comercial sintetizaba: “Las 62 sin alternativas frente al plan Mondelli”. La inminencia de un final de época, por otra parte, acentuaba los rasgos más conservadores y reaccionarios de una dirigencia que se resistía a perder sus posiciones de poder y privilegio.

A este cuadro, se le debía sumar la acción de un tercer sector burocrático, el “antiverticalismo” liderado por Calabró, embarcado abiertamente a favor del golpe militar. Entre febrero y marzo, dirigentes alineados con ese sector sorprenderían al activismo clasista al convocar plenarios y emitir declaraciones con frases “combativas”. En la perspectiva del “antiverticalismo”, se trataba de debilitar al gobierno, reacomodándose ante el indetenible relevo militar en la conducción del Estado⁵⁵. Estas pujas internas en la altura abrían una vez más espacio para una conducción alternativa desde las bases, como pretendían las fuerzas actuantes en las

⁵⁴Cotarelo y Fernández (1997).

⁵⁵Uno de los análisis más completos de la “interna sindical” se encuentra en una nota publicada en el semanario *NH*, 8/1/76.

Coordinadoras: el descontento y la movilización obrera podían rebasar objetivamente a las conducciones burocráticas⁵⁶.

La historia de las Coordinadoras registra en este mes un episodio que, si bien no podemos ubicar con total precisión cronológica, sirve para marcar el contexto de todo el movimiento. Nos referimos a un encuentro nacional que se pretendió desarrollar en la provincia de Córdoba, buscando reunir a los principales dirigentes y protagonistas de las luchas obreras durante 1975. Se intentaba dejar conformada una Coordinadora Nacional, algo que distintas agrupaciones de izquierda venían reclamando desde tiempo atrás. El lugar elegido no era casual: en los siete años anteriores, el proletariado cordobés había llevado adelante dos insurrecciones en conjunto con otros sectores populares (el “Cordobazo” en 1969 y el “Viborazo” en 1971); fue la cuna de experiencias sindicalistas clasistas como los sindicatos de fábrica SiTraC y SiTraM; produjo centenares de destacados activistas político-sindicales de la estatura nacional de Tosco y Salamanca y en forma contemporánea a los hechos que narramos, tenía en pie una de las más desarrolladas versiones de Coordinadora sindical del país: la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha. Este último organismo ejercía, en la práctica, la conducción de importantes contingentes de trabajadores de distintas ramas de actividad, participando de ella las direcciones clandestinas de gremios intervenidos como SMATA Córdoba y Luz y Fuerza de esa provincia. Su rol de conducción de las fracciones de vanguardia del proletariado cordobés no se agotó en el terreno estrictamente sindical y llegó a encabezar como dirección política la lucha contra el interventor de la provincia, el ultrafascista Lacabanne. En septiembre de 1975, una serie de paros activos y marchas forzó la renuncia del nombrado. A partir de allí (y hasta marzo de 1976), esta “Coordinadora” cordobesa estuvo al frente de la resistencia contra los sucesivos planes de ajuste económicos y la lucha por las libertades democráticas. Esa movilización cobró singular importancia por ser Córdoba uno de los epicentros del “terror blanco” desatado contra los activistas obreros y populares⁵⁷.

⁵⁶Como comentó un dirigente gremial en agosto de 1975: “En estos momentos hay muchos dirigentes sindicales que son lo suficientemente fuertes como para llamar a una huelga, pero hay muy pocos que tengan la fuerza para parar una”. Citado en Riz (1987), páginas 197 y 198.

⁵⁷Mattini (1989); testimonio de “Pedro”, militante de base en Pozzi y Schneider (2000), páginas 237 y 238. *Boletín de la Mesa de Gremios en Lucha*, diciembre de 1975 y Castro (2002/3).

El encuentro de Córdoba era una muy sentida aspiración de casi todas las fuerzas de izquierda, poniendo en marcha una instancia de coordinación que superara lo estrictamente regional. Según nuestros testimonios, a ese Plenario concurrieron cerca de 600 destacados activistas con distintos grados de responsabilidad en la conducción de organismos de base fabril de todo el país. El local elegido para el encuentro fue la sede del Sindicato de Trabajadores de Perkins (SiTraP), que era conducido por aquella fecha por un frente de agrupaciones clasistas con predominio de PRT y OCPO. Por Zona Norte del Gran Buenos Aires, de acuerdo a la muy imprecisa información que contamos, concurrió un grupo heterogéneo. Por una parte, la Secretaria General de la comisión interna del laboratorio Squibb y “el Chino” Cardozo (delegado por la minoría en ese establecimiento y destacado cuadro político de OCPO); una delegación de la Ford (con presencia del PRT) y también el delegado y a la vez responsable político de la agrupación de JTP en el astillero Astarsa, Aldo Ramírez. Este último había sido secuestrado meses atrás y con posterioridad al golpe militar será uno más de los activistas obreros “detenidos-desaparecidos” de Zona Norte. Si bien el encuentro se frustró, debido a la intervención del Ejército que rodeó la manzana y detuvo a algunos de los participantes, la sola intención de llevar a cabo esta reunión indicaba las potencialidades que latían al interior de la vanguardia obrera en lucha⁵⁸.

Mientras en cada fábrica comenzaba a discutirse los alcances y efectos del nuevo plan económico, una nueva oleada de “terror blanco” comenzó a abatirse sobre el activismo obrero opositor en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. El 4 de febrero los diarios informaban sobre el secuestro de dos delegados navales, Oscar Echeverría, del astillero Mestrina y Luis Cabrera, de Acquamarine (este último ya había sobrevivido a un secuestro anterior en noviembre de 1975). El grupo represivo se llevó también a la mujer de Cabrera, Rosa Casariego, maestra y delegada del sindicato docente. La movilización de los trabajadores navales, sus denuncias públicas y hasta la presentación de “habeas corpus” a favor de los secuestrados no dieron resultado. El lunes 9 de febrero, los vespertinos informaban que los cuerpos de los tres habían sido encontrados acribillados en Moreno. Su velatorio en la sede del sindicato en el centro de Tigre y el entierro posterior reunió, por última vez, una multitud calculada en cerca de 10.000 personas, con mayoría de obreros navales y sus familiares, y también de otras delegaciones proletarias de las fábricas cercanas, convocados todos por la Coordinadora Norte.

⁵⁸Pérez (2002) y Cristina (2002/3).

Cuando se desconcentraba la multitud, grupos de activistas tirotearon la regional Tigre de la policía bonaerense, a la que acusaban de haber sido responsable directa de los asesinatos. Esta reacción de los militantes sólo consiguió ser controlada con la llegada de refuerzos policiales y una tanqueta de la cercana guarnición militar de Campo de Mayo. Cuatro días más tarde otro grupo fascista asesinó al sacerdote del Tercer Mundo Francisco Soares, en la humilde casa de Carupá (partido de San Fernando) en donde residía. El padre “Pancho”, como lo conocían en la comunidad, tenía un fuerte compromiso con las barriadas empobrecidas y había sido el cura que rezó el responso por los tres asesinados días antes⁵⁹. El mismo día 13 de febrero se informaba de la aparición del cadáver de Juan Pablo Lobos, delegado clasista de la fábrica de cerámicas Lozadur. A su lado y torturado pero con vida apareció también otro delegado de la misma empresa, quien había sido secuestrado junto a Lobos. Los compañeros en la dirección combativa del Sindicato Ceramistas de Villa Adelina recordaron en una solicitada, su trayectoria de lucha por garantizar la higiene y seguridad laboral en la empresa, un comedor y la dignificación de sus compañeros. En repudio a este asesinato, se llevó a cabo un paro de 24 horas el 17 de febrero en todas las fábricas de cerámicas del país⁶⁰.

El 16 de febrero la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), integrada por las 700 principales y más concentradas entidades del sector patronal, realizó el primer “paro empresarial” contra el gobierno peronista, acusándolo de ser el responsable de la situación de postración económica que vivía la Argentina y responsabilizándolo también por sus “políticas estatizantes y socializantes”⁶¹. Mientras tanto, en la revista *Discusión* (que reflejaba la opinión del gran empresariado), aparecían dos notas reavivando el fantasma de la “guerrilla fabril”. En la segunda, de fines de febrero de 1976, al hablar de las “áreas calientes” en las que dicha infiltración subversiva se encontraba más activa, señalaba el área metropolitana como uno de esos territorios afectados. Y denunciaba a “otras [zonas] en las que, si bien el problema no ha alcanzado gravedad desde el punto de vista cuantitativo, han establecido –en algunos casos– verdaderos soviet merced al empleo de la fuerza y la intimidación. No escapan a este fenómeno

⁵⁹LR, 9 y 10/2/76. LN, 10, 11 y 14/2/76; Cro, 13/2/76; AS, 23/2/76. Sobre la comprometida labor del padre “Pancho”, Gastón (2002); “Petiso” (2003) y Magne (2004), Prólogo y capítulo 6.

⁶⁰Cro, 14 y 19/2/76.

⁶¹PO, 18/2/76.

más de 150 establecimientos diseminados en las localidades de La Plata, Gran Buenos Aires, de la Capital Federal y de las ciudades de Campana, Zárate, San Nicolás, Rosario, Santa Fe y el partido de Tigre (la denominada Agrupación Alessio-Mestrina, de obreros navales responde a los dictados de la subversión organizada)⁶². El editorialista de esa publicación detallaba con precisión quirúrgica el número de establecimientos “contaminados”, casi la misma cifra de plantas fabriles en que reconocía tener delegaciones participantes la Coordinadora metropolitana, en su declaración del 20 de diciembre de 1975. Igualmente significativa es la identificación precisa de la agrupación de obreros navales, la misma que estaba sufriendo desde comienzos de año una de las más sistemáticas campañas de eliminación selectiva de sus activistas. El 24 de febrero se confirmaba la aparición de dos cadáveres en un descampado de Tigre. Una de las víctimas, que había sido salvajemente torturada antes de su asesinato, era el activista César Montiel, de destacada actuación en el conflicto obrero en Matarazzo, fábrica alimenticia donde trabajaba⁶³.

A partir de la difusión oficial el día 5 de marzo del llamado “Plan Mondelli”, los medios que expresaban de manera tradicional las posiciones de la gran burguesía comenzaron a alertar lo que por otra parte ya se podía comprobar en la calle: el peligro que el descontento obrero escapara al control de las direcciones gremiales burocráticas. *La Nación* en su editorial del 8 de marzo afirmaba “la probable reacción de los trabajadores ante el nuevo plan ya produjeron conflictos que desbordaron a las dirigencias”, y alertaban sobre el riesgo que corría la conducción de la CGT al ser la movilización encabezada por “delegados de filiación marxista”⁶⁴. Al día siguiente el Secretario General del SMATA nacional reconocía que los paros en las plantas automotrices eran una reacción “espontánea” de los trabajadores. Deslindaba así la responsabilidad del gremio e, indirectamente, reconocía que las protestas eran conducidas orgánicamente por los activistas de izquierda. El jueves 11, el INDEC informaba que el incremento del costo de vida había sido de 19,3% en febrero, manteniendo así una tendencia irrefrenable que disminuía día a día el poder adquisitivo de los salarios, lo que a su turno encrespaba las luchas de los trabajadores. El clima de rebeldía que había comenzado una vez más en el interior, con epicentro en Córdoba se extendió rápidamente al Gran Buenos Aires. La gravedad de la situación forzó

⁶²Discusión, números 37 (del 10 al 23 de febrero de 1975) y 38 (del 23 de febrero al 8 de marzo de 1975).

⁶³LN, 24/2/76.

⁶⁴LN, 8/3/76.

al gobierno a salir a condenar esas protestas. El comunicado oficial reconocía que se estaban desarrollando medidas de fuerza especialmente de metalúrgicos y mecánicos en Capital Federal, Gran Buenos Aires y el Interior. También que algunas seccionales de la CGT del Interior desconocían abiertamente a la conducción nacional. En una dramática convocatoria para que los dirigentes frenaran esas luchas, el gobierno amenazó con intervenir a las organizaciones sindicales donde las bases precisamente no acataran a sus direcciones⁶⁵. Ese mismo día, se produjo una oleada de paros en todo el cinturón fabril formado por las localidades de Morón, Moreno, San Martín, Ciudadela, Luján, San Miguel y Vicente López, siendo en la actividad metalúrgica donde más se hizo sentir ese paro generalizado. Muchas de las seccionales de la UOM participantes estaban alineadas con Calabró, pero de todas formas, la magnitud del movimiento trascendió el sector metalúrgico y abarcó también las grandes plantas automotrices del conurbano. El viernes 12 se llevó a cabo una movilización formada por 50 colectivos y camiones repletos de trabajadores que desde la Zona Oeste y Norte intentaron sin éxito, reeditar las multitudinarias marchas de junio-julio del año anterior. La policía bonaerense (fuerza de seguridad que reportaba directamente al gobernador Calabró) impidió el avance de la columna obrera, lo que viene a demostrar que la misma no se trataba de una acción de presión de aquel dirigente. La magnitud del operativo represivo, que incluyó 1 helicóptero, 4 patrulleros y 2 carros de asalto, reflejaba el temor por las consecuencias de dicha marcha. La intervención de la izquierda en estos hechos era una preocupación también presente en la opinión del editorialista de *La Nación*, al admitir que dentro de las múltiples causas del descontento gremial se debía tener en cuenta la participación de “sectores radicalizados que intentan aprovechar el deterioro de algunos dirigentes de la CGT y las ‘62’”. El editorial señalaba que, según la opinión de esos dirigentes, los protagonistas “no son únicamente los metalúrgicos sino también los mecánicos: está el problema de ‘los bichos colorados’, infiltrados en las Comisiones Gremiales Internas”. El gobernador bonaerense, en declaraciones a la prensa el día siguiente, afirmaba tajantemente: “no se trataba de trabajadores de su sector [los ‘antiverticalistas’], sino de grupos radicalizados de izquierda”⁶⁶.

En el laboratorio Squibb (uno de los principales núcleos organizativos de la Coordinadora Norte), se sucedería una trágica secuencia de acontecimientos. Los mismos se iniciaron cuando un alto directivo

⁶⁵LN, 12/3/76.

⁶⁶LN, 13 y 14/3/76. *Cro*, 13/3/76.

convocó en forma reservada al grupo de delegados de la JTP para informarles que el Ejército les había exigido a los ejecutivos del laboratorio todos los datos sobre los militantes políticos. El directivo ofreció a los delegados peronistas recursos económicos para retirarse de la empresa y trasladarse con sus familias fuera del país, para eludir lo que caracterizó como “inminente y muy sangriento golpe”. Sin embargo, los delegados rechazaron el ofrecimiento, argumentando que no podían dejar solos al resto de sus compañeros. A los pocos días, en el ámbito de conducción de Montoneros se decidió el pase a la clandestinidad y por lo tanto el abandono de la planta de aquellos cuadros más destacados y expuestos. Esta decisión no era compartida por los activistas, que consideraban conveniente una retirada gradual y más organizada, que preservara el trabajo político dentro de la fábrica. Sin embargo, la postura que terminó imponiéndose fue la primera y se procedió a tomar con una escuadra armada de Montoneros el laboratorio. Los delegados convocaron allí mismo una asamblea y los activistas más importantes que se retiraron explicaron su condición de militantes y el porqué de esa salida. El resto de los delegados de JTP, a su turno, aclararon que seguirían desempeñando sus funciones como representantes de los trabajadores. Este episodio resultó muy conmocionante para los militantes que dejaban el establecimiento para pasar a la clandestinidad: se trataba de abandonar el lugar de militancia donde se habían ido desarrollando como cuadros políticos y significaba, además, iniciar una actividad en las sombras. Según el testimonio recogido, las compañeras y compañeros del laboratorio los abrazaban entristecidos, formulándoles comentarios como este: “Si sabíamos todos de tu militancia ¿por qué tuviste que exponerte así, públicamente?”. La mención de este último hecho nos parece representativa: contrariamente a la versión generalizada, a lo largo de nuestra investigación no encontramos referencias acerca de un supuesto nivel de rechazo y distanciamiento entre los trabajadores comunes y los activistas de izquierda, aun aquellos más involucrados en la lucha armada⁶⁷. Por el contrario, existía un tipo de fraternidad que los militantes habían sabido ganar, forjada al calor de la lucha cotidiana. Esta situación se plasmaba en las conversaciones entre el militante y el obrero no comprometido,

⁶⁷Cristina (2002/3). Testimonios de dos delegados (que no estaban alineados con la JTP) coinciden en el relato, indicando como expresaron su crítica a esa decisión, durante la improvisada asamblea. A pesar de dicha discrepancia, la misma no provocó ninguna violencia contra ellos. Testimonios de “Bombilla” y “Pelusa”, delegados del laboratorio Squibb, en la localidad de Martínez (Norte del Gran Buenos Aires), años 1975 y comienzos de 1976 (Buenos Aires y San Isidro, 2007).

cuando este último le expresaba “tené cuidado..., te acompaño a tomar el colectivo..., no te juegues tanto..”. En algunos casos eran los propios militantes quienes tomaban distancia por el riesgo que significaba para el trabajador común ser visto hablando con un activista.

La práctica de pasar a la clandestinidad, manifestando en asambleas de planta la condición de militante se fue haciendo más extendida en la medida que avanzaba la represión sobre el activismo. Se trataba de un hecho importante: se abandonaba el papel de “independiente” (que a esa altura ninguno de sus compañeros creía) para asumir una militancia y un proyecto político revolucionario⁶⁸. No obstante, el episodio más trágico ocurrirá la noche del 12 de marzo, cuando el “terror blanco” golpeó de manera directa a la militancia revolucionaria de Squibb. Ese terror era cada vez más difícil de identificar ya que los grupos represivos estaban integrados por distintas “patotas”: militares, de la burocracia sindical y policiales. La víctima en este caso fue el delegado Aníbal Espino, quien fue asesinado en su domicilio delante de toda su familia. Este activista militaba al momento de su asesinato en el Movimiento Socialista Revolucionario (MSR), como lo informaba su semanario al recordar al compañero fusilado. Espino integraba la agrupación orientada por OCPO, de la cual el MSR era su frente legal, concebido como espacio de articulación con otras fuerzas de izquierda. El entierro en el cementerio de Villa Adelina se convirtió (como antes había ocurrido con los delegados navales) en un verdadero acto político, al ser acompañado su cuerpo por una multitud formada por sus compañeros de trabajo y militancia, quienes le rindieron homenaje a través de discursos en los que se destacó su compromiso y entrega a la causa revolucionaria⁶⁹.

Ante la oleada de terror fascista, las distintas organizaciones de izquierda adoptaron diferentes estrategias de preservación de sus cuadros y simpatizantes. PO inició un repliegue ordenado, sin abandonar en lo posible los establecimientos donde tenía mayor presencia e influencia, aunque algunos de sus principales militantes ya venían siendo

⁶⁸Cristina (2002/3). Correa (2003), Gastón (2002), Benencio (2002), “Petiso” (2003) y Girotti (2002). “Oscar”, militante del PST en Del Carlo recuerda como un muy buen activista del PRT (Juan Cuello) planteó en una asamblea fabril “que él se iba a luchar [en la estructura militar de su organización] para conseguir algo superior para los trabajadores, que él no dejaba la lucha”. Cuello va a morir combatiendo en el intento de copamiento del regimiento del Ejército en Monte Chingolo (diciembre de 1975). A pesar de la visión crítica que tenía “Oscar” sobre esa elección, admite que dentro de la fábrica no se repudió tal actitud.

⁶⁹RCOP, 17/3/76.

encarcelados desde por lo menos un año antes. Similar comportamiento siguió el PST. El PRT y la JTP venían retirando a sus activistas más expuestos, apostando a dejar no obstante “células dormidas”, integradas por simpatizantes que se encargarían de mantener la presencia de la organización dentro de la planta. Además de estas precauciones, tanto el PRT como OCPO hicieron una pública advertencia al conjunto de la militancia fabril sobre la inminencia de una ofensiva militar sobre los núcleos de activistas opositores de izquierda, como parte de la estrategia ya declarada de combatir a la “guerrilla de fábrica”. En la medida de sus recursos, para ese entonces bastante menguados por la represión, algunas de estas organizaciones ofrecieron cobertura a dirigentes y militantes político-sindicales aunque no pertenecieran a sus filas⁷⁰.

En todo el país, los diez días previos al golpe militar se registró un intenso proceso huelguístico y de movilizaciones de protesta. Ante esto, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pudieron reaccionar más que con amenazas, advirtiendo que todo podría ser peor si como resultado del descontrol social las FFAA terminaban por tomar el poder. De manera reservada, muchos legisladores, funcionarios y dirigentes sindicales burocráticos preparaban su huida, lo que demostraba la absoluta fatalidad y resignación con la que afrontaban el futuro cercano, la misma que por otra parte expresaban los principales partidos “democráticos” de oposición, como la UCR. La consigna de la hora era, en el gobierno y en esa oposición, “no hay solución, todo está dicho”.

Las organizaciones de izquierda con mayor actuación en las coordinadoras por el contrario, no se resignaban y proponían enfrentar el golpe con la movilización obrera. Sostenían que cuanto mayor fuera el número de trabajadores en la calle y luchando, menos espacio tendrían los golpistas, quienes de lo contrario estarían obligados a desatar una guerra civil abierta. Por ese motivo, redoblaban su actividad, en especial en las fábricas más movilizadas. La actividad de las coordinadoras resurgieron con la misma fuerza que en junio-julio de 1975. La pregunta era si todo este esfuerzo iba a ser suficiente para detener el golpe o por el contrario,

⁷⁰Para el PRT, EC, 25/12/76; De Santis (2000), páginas 535, 539 y 540; Mattini (2003). Para la OCPO, RCOP, 3/3/76. Las referencias a PO, Frigoli (2003). La JTP de los navales de Zona Norte realizó una reunión para los activistas que se mantenían trabajando dentro de los astilleros, en un club barrial de Tigre. Morelli (2005). Benencio (2002), referente de la agrupación “José María Alessio”, nos contó de una reunión la noche antes del golpe en donde se sugirió no concurrir al astillero por el riesgo a ser secuestrados. Para las vísperas del golpe y los días inmediatamente posteriores en el astillero, Lorenz (2007), capítulo 11.

al mostrar la radicalidad alcanzada por algunas fracciones obreras, lo precipitaría. Los sectores reaccionarios y que respondían a la gran burguesía aprovechaban este intenso ritmo de actividad de la izquierda para acelerar el desenlace golpista. Una editorial de *La Opinión* volvía a la carga con el argumento de la “subversión en fábrica”: “los grupos de acción clasista y del ex Partido Auténtico actúan clandestinamente en las empresas con doble objetivo: la llamada ‘guerrilla de fábrica’, destinada a la acción directa y la formación de cuadros de reemplazo, destinados a cubrir el vacío que dejarían los dirigentes peronistas”. Remarcaban también el peligro de desborde obrero ante el desprestigio de la dirigencia sindical burocrática. Citaban como ejemplo las declaraciones del dirigente “antiverticalista” De Luca, quien al ser consultado sobre un paro convocado por Lorenzo Miguel y Adalberto Wimer, descreía de su efectividad “ya que ambos no tienen representatividad (...) porque miles de trabajadores realizan movilizaciones y huelgas al margen de sus direcciones”⁷¹.

En Zona Norte, al igual que a mediados de 1975, se extendía un clima asambleario con huelgas y paros en repudio al Plan Mondelli. El sábado 13 se reunió la Mesa Ejecutiva de la Coordinadora Norte, decidiendo distribuir un volante agitativo y convocar a un Plenario zonal para la siguiente semana. El jueves 18 por la tarde se realizó una marcha de los trabajadores de por lo menos cinco de las fábricas más activas en aquel momento y con presencia en la Coordinadora: la textil La Hidrófila, Editorial Abril, la alimenticia Terrabusi, la papelera 3M y la metalúrgica Ferrania. En esa marcha zonal, impulsada por la Coordinadora, se convocó a distintos contingentes obreros a sumarse a una demostración mucho más masiva⁷².

El 16 de marzo se produce un nuevo secuestro, en este caso la esposa de un delegado de los obreros navales del astillero Mestrina. Seis días más tarde, en las vísperas del golpe, al Secretario General del Sindicato de Obreros de Aserraderos y Anexos, alineado con sectores combativos, quien apareció asesinado al día siguiente⁷³. Estos son los dos últimos episodios de terrorismo selectivo que hemos podido registrar antes de la irrupción militar, en nuestra zona de estudio.

El sábado 20 de marzo, se reunió por última vez antes del golpe la Coordinadora Norte. De acuerdo al relato de uno de los participantes,

⁷¹LO, 16/3/76.

⁷²AS, 15 y 20/3/76 de marzo de 1976.

⁷³UH, 19/3/76. Cro, 23 y 24/3/76.

“Estuvieron presentes en la reunión más de 50 compañeros representantes de 10 comisiones internas, así como muchos delegados y activistas de las más importantes fábricas de la zona. Luego del debate se resolvió (A) sacar un boletín con una línea editorial que debe plantear las siguientes coincidencias: 1) contra el Plan Mondelli, contra el gobierno, contra la Multisectorial, contra el golpe, por \$800.000 de aumento y dos millones de básico; 2) por la libertad de todos los presos; 3) asambleas de fábrica para pronunciarse por estos puntos; 4) por la huelga general del movimiento obrero para obtener este paquete de medidas; (B) constitución de una Mesa Regional integrada por un representante por comisión interna; (C) realización de un nuevo plenario la semana próxima invitando a concurrir fábricas de la zona de San Martín; (D) constitución de un bloque metalúrgico dentro de la Coordinadora para que agite sus objetivos dentro de ese gremio”⁷⁴.

Finalmente, *La Prensa* informaba el 24 de marzo sobre una declaración del día anterior de la Coordinadora metropolitana. En la nota se señalaba:

“La denominada ‘Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Delegados en Lucha’ anunció para hoy una ‘movilización general y paros en rechazo al Plan Mondelli’ y por la situación –dicen– que atraviesa el país. Integran la mencionada Comisión delegados de los gremios de la alimentación, textiles, metalúrgicos y molineros. Solicita un aumento de emergencia de 10.000 pesos y un salario mínimo de 25.000; congelamiento de precios al 1° de Enero pasado; un estricto control de precios sobre las empresas productoras de artículos de primera necesidad; plena vigencia de la ley 14.250 e inmediata convocatoria de las Comisiones Paritarias para discutir salarios; cese de la represión contra los trabajadores; levantamiento del Estado de Sitio y libertad a los presos políticos y gremiales. Finalmente piden la inmediata convocatoria del Comité Central Confederal y la declaración de un paro nacional contra el plan del Ministro de Economía”⁷⁵.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976, tal cual venían anticipando todas las organizaciones políticas de izquierda⁷⁶, iba a ser el inicio de

⁷⁴Ad, 14/4/76.

⁷⁵LP, 24/3/76.

⁷⁶Según PO, “Un golpe militar que emerja del desarrollo de esta crisis no tendrá el carácter de la ‘libertadora’ ni del onganato: se tratará de un golpe de liquidación de todo el régimen de libertades democráticas y de ilegalización del movimiento obrero, con métodos de guerra civil”. RPO, enero-febrero de 1976. Con ligeros matices, esta opinión era

una profunda reconfiguración del capitalismo argentino. Sólo la perspectiva histórica permite comprender en toda su magnitud los cambios en la economía y la sociedad que tal proceso venía a implantar y profundizar. El golpe surgió como forma extrema de imponer la hegemonía del sector más concentrado y poderoso de la gran burguesía, que requería el disciplinamiento absoluto de las clases subalternas. Atraídos (y subordinados) los demás sectores de la clase dominante al campo gravitatorio de la gran burguesía, paralizada y desmovilizada por el terror la pequeña burguesía, sólo restaba la presencia de la clase obrera como último obstáculo para alcanzar esos fines. Neutralizar de manera efectiva y duradera toda respuesta del proletariado, era sin duda la principal preocupación y en esa dirección se volcaron todas las energías. A medida que el peronismo restaurado demostraba su impotencia para garantizar el régimen de dominación, se fueron incrementando las tendencias más agresivas de la clase dominante hacia la movilización de los sectores obreros. En ese proceso, la construcción del enemigo (“la guerrilla fabril”) y de un escenario apocalíptico (“el caos que antecede a la ‘sovietización’”) jugaron el rol de preparar las condiciones para justificar la represión contra los sectores de vanguardia de la clase trabajadora y sus correlatos organizativos políticos y sindicales.

A comienzos de febrero de 1976, la cúpula del Ejército terminó de elaborar un extenso documento titulado “Plan del Ejército (Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional)” de carácter secreto, firmado por el general Jorge R. Videla (Comandante General del Ejército) y el general Roberto E. Viola. En dicho documento, conocido también como “Orden de batalla”, se establecía que “la Junta de Comandantes Generales ante el grave deterioro que sufre la Nación ha resuelto adoptar las previsiones para el caso de tener que destituir al Gobierno Nacional y constituir un Gobierno Militar”. Los blancos prioritarios de la acción represiva serían como “opponente”, “todas las organizaciones o elementos integrados en ellas (...) que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/u obstaculicen el normal desenvolvimiento del Gobierno Militar”. Al definir con mayor precisión los alcances del término “opponente”, se distinguía entre dos categorías: activo y potencial. Dentro de la primera, el documento fijaba como “prioridad I” a 8 ocho organizaciones “Político-Militares” y 11 organizaciones políticas y colaterales. Dentro de estas 19 estructuras políticas estaban comprendidas la totalidad de

también la del resto de las organizaciones de izquierda. A pesar de esto se coincidía que esta situación no necesariamente implicaría una derrota en toda la línea de cada una de estas fuerzas políticas y mucho menos del movimiento obrero.

organizaciones de izquierda con mayor presencia dentro del movimiento obrero y en especial las que orientaban a sus fracciones más avanzadas. Mucho más significativa es la enumeración que se hace en el punto “d” del Anexo I “Inteligencia” de las organizaciones específicamente gremiales, consideradas igualmente prioritarias en tanto “oponente activo”. Así y en orden se detallan: “Comisión Nacional Intersindical. Ex CGT de los argentinos. Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical. Juventud Trabajadora Peronista. Agrupaciones de Base. Movimiento Sindical de Base. Movimiento Sindical Combativo. *Coordinadora Nacional de Gremios Combativos y Trabajadores en Lucha*”⁷⁷.

La “orden de batalla” venía a confirmar los pronósticos de las fuerzas políticas de izquierda sobre el carácter del golpe en un doble sentido. Por una parte, el significado de equiparar a las organizaciones revolucionarias con sus colaterales gremiales e incluso con espacios de coordinación más amplios y plurales. Quedaba explícitamente demostrada la continuidad del pensamiento que identificaba mecánicamente gremialismo combativo opositor con “subversión armada” vigente desde mediados de 1975. De esta forma se puede afirmar, como sostenían los grupos de izquierda, que las Fuerzas Armadas venían a completar la obra que no había podido concluir el peronismo gobernante.

En el segundo aspecto, al fijar como oponente prioritario a eliminar a esos dos conjuntos de organismos políticos y sindicales se buscaba descabezar la posible resistencia obrera, para luego pasar a una ofensiva masiva y generalizada sobre las condiciones de contratación (salarios, ritmos de producción, salubridad) y de vida del proletariado. Para garantizar ese objetivo, ponemos como ejemplo de tal ofensiva, la sanción de la “ley” 21.261 decretada por la Dictadura. En ella, en su artículo 1 “se suspende el derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto de parte de los trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”.

Para finalizar, los hechos inmediatamente posteriores al golpe vinieron a confirmar que la represión no se detendría en los portones de las fábricas. En una clara actitud ejemplificadora dirigida hacia los contingentes obreros más movilizados y combativos, tropas del Ejército procedieron a ocupar militarmente cuatro de los establecimientos más emblemáticos durante el año 1975: el laboratorio Squibb, la automotriz

⁷⁷D’Andrea Mohr (1999), páginas 63 a 65. Las citas entrecomilladas pertenecen al documento, los destacados son nuestros.

Ford y los astilleros Astarsa y Mestrina. En todos ellos, a partir del 24 de marzo se presentaron efectivos uniformados, provistos de listas con los nombres, apellidos y en algunos casos fotos, de los principales activistas. Estos al ser detectados fueron inmediatamente arrestados y llevados con rumbo desconocido. Las fuerzas represivas no se conformaron con realizar detenciones clandestinas, por el contrario al hacerlo a la luz pública (en algunos casos secuestrando a los trabajadores al pie de sus máquinas) transmitían un mensaje aterrador: la represión no tendría límites. Nunca como en los dos primeros meses posteriores al golpe se pudo comprobar de manera más transparente la connivencia entre los empresarios y las Fuerzas Armadas, que ejercían el control político del Estado. Muchas de las identificaciones se realizaban con las propias fichas de ingreso de los obreros a la fábrica, suministradas por los departamentos de personal de cada planta. En la Ford, los más altos ejecutivos reunieron a un grupo de delegados destacados para informarles que a partir de ese momento su condición de representantes de los operarios cesaba, la que en el futuro sería encarada por los capataces. De acuerdo al testimonio posterior de un delegado secuestrado que recuperó luego de un año su libertad, los raptos se ejecutaron a un promedio de 3 trabajadores por día, hasta completar la casi totalidad de la comisión interna. En su caso, a comienzos de abril de 1976, la patrulla militar que lo detiene en la sección en la que trabajaba, a la vista de sus compañeros, lo trasladó hasta un “quincho” que la empresa tenía en el mismo predio, utilizado por la Ford para agasajar a miembros de las Fuerzas Armadas. Allí se encontró con otros 5 delegados igualmente secuestrados. Más tarde, todos los detenidos eran remitidos a distintas comisarías de Zona Norte. De acuerdo a la investigación de la CONADEP, los dos principales “chupaderos” fueron los destacamentos policiales de Ingeniero Maschwitz y Tigre. En estos centros de concentración clandestinos, los secuestrados se encontraban con otros delegados de distintas empresas de la zona, como Terrabusi y los astilleros Astarsa y Sánchez⁷⁸. En el primero de estos astilleros, la represión hacia el activismo fue igualmente contundente: en la mañana del 24 de marzo, en un operativo ejecutado en la puerta de la planta con tanquetas militares, camiones y helicópteros de guerra, fuerzas uniformadas detuvieron a 60 trabajadores, todos ellos integrantes de una lista que portaban los militares. Al día siguiente, el astillero Mestrina fue objeto de otro operativo represivo, secuestrando

⁷⁸Testimonio de varias víctimas en el *Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)*, más conocido como *Nunca Más* (1991), páginas 379 a 382. Testimonio de Pedro Troiani (2002).

a por lo menos 6 delegados. Uno de ellos, Hugo Rezek, había sufrido el rapto de su esposa una semana antes del golpe, cuando una “patota” intentó detenerlo en su domicilio. El impacto que produjo esta oleada represiva sobre la combativa fracción del proletariado naval de Zona Norte no pudo ser mayor: según el testimonio de la madre de un delegado del astillero Mestrina secuestrado, a partir de ese momento “no existieron nuevos delegados sindicales en la empresa”⁷⁹. En el laboratorio Squibb, la intervención militar se tradujo en la ocupación del establecimiento con patrullas militares y tanquetas. El cuerpo de delegados fue detenido en pleno y llevado a Campo de Mayo, principal centro de concentración clandestino de Zona Norte. Algunos delegados, considerados no peligrosos, fueron más tarde liberados. No obstante, el saldo de “desaparecidos” y asesinados (cuando se resistieron a ser secuestrados en otros operativos), se eleva a más de una decena y media, entre delegados y activistas⁸⁰.

Estos casos puntuales son solamente una muestra de la modalidad represiva descargada sobre los contingentes obreros que habían protagonizado desde 1973 el más importante proceso de movilización proletaria en la Zona Norte del Conurbano bonaerense. Por testimonios indirectos iguales procedimientos se ejecutaron, tal vez en una magnitud menor, en decenas de otras fábricas. La reconstrucción posterior encarada por distintos investigadores coincide en que los efectos de la represión produjo un retraimiento objetivo del nivel de actividad reivindicativa de los trabajadores y un descenso significativo de las luchas, por lo menos en los primeros meses posteriores al golpe. El pase a la clandestinidad que algunas fuerzas de izquierda habían implantado en algunas plantas consiguió mantener la presencia en ellas, pero en condiciones opresivas que dificultaban cualquier intento de organización significativa. En este marco, hemos perdido el rastro de la acción de la Coordinadora Interfabril Norte (como así también de las otras zonas), aunque el recuerdo de su experiencia siguió presente en la memoria de muchos activistas sobrevivientes y en las nuevas camadas de obreros combativos, quienes pasados los primeros momentos de terror, retomaron con desigual éxito luchas reivindicativas y acciones de resistencia⁸¹.

Capítulo IV

¿Qué fueron las coordinadoras?

⁷⁹Nunca Más (1991), página 376. Lorenz (2007), capítulo II. Baschetti (2001), página 12.

⁸⁰Cristina (2002/3).

⁸¹Otro caso destacado de represión al activismo fabril en la zona (abril de 1976) fue el ejecutado contra 3 delegados del combativo personal de la metalúrgica Del Carlo. Bittrán y Schneider (1992) y Pozzi (1988).